

Diario de los Debates



Directiva

Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

Directiva

Primera Presidenta

Legisladora

Yolanda Josefina

Cepeda Echavarría

Primera Secretaria

Legisladora

Bernarda

Reyes Hernández

Segunda Secretaria

Legisladora

Lidia Nallely

Vargas Hernández

Inicia: 10:00 horas.

Presidenta: hago explícito mi franco deseo que este jueves sea un día colmado de experiencias significativas para todos; compañeras y compañeros legisladores, iniciamos la Sesión Ordinaria número veinticuatro de esta Sexagésima Tercera Legislatura; Primera Secretaria por favor lleve a cabo la Lista de Asistencia.

Primera Secretaria: diputado Juan Francisco Aguilar Hernández; Edgar Alejandro Anaya Escobedo; Martha Patricia Aradillas Aradillas; José Luis Fernández Martínez; Liliana Guadalupe Flores Almazán; Eloy Franklin Sarabia; Dolores Eliza García Román; Rubén Guajardo Barrera; Salvador Isais Rodríguez; Alejandro Leal Tovías; José Antonio Lorca Valle; Amilcar Loyde Villalobos; Gabriela Martínez Lárraga; Roberto Ulises Mendoza Padrón; Nadia Esmeralda Ochoa Limón; René Oyarvide Ibarra; María Aranzazu Puente Bustindui; Héctor Mauricio Ramírez Konishi; Ma. Elena Ramírez Ramírez; Emma Idalia Saldaña Guerrero; Cinthia Verónica Segovia Colunga; José Ramón Torres García; Edmundo Azael Torrescano Medina; María Claudia Tristán Alvarado; Bernarda Reyes Hernández; Lidia Nallely Vargas Hernández; Yolanda Josefina Cepeda Echavarría; 27 diputados presentes.

Presidenta: hay cuórum; inicia la Sesión Ordinaria, y se declaran válidos los acuerdos que se tomen.
Segunda Secretaria haga favor de dar lectura al Orden del Día.

Segunda Secretaria: Orden del Día, Sesión Ordinaria No 24, marzo 31, 2022.

1. Acta Sesión Ordinaria número 23, del 25 de marzo del 2022.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

II. Siete Asuntos de Correspondencia.

III. Discursos:

- a) Natalicio de Octavio Irineo Paz Lozano, Premio Nobel de Literatura en 1990(31 marzo).
- b) Aniversario de la Toma de Puebla(2 abril).
- c) Día Internacional del Autismo(2 abril).

IV. Diecinueve Iniciativas.

V. Cuatro Dictámenes; tres con Proyecto de Decreto; y una con Proyecto de Resolución.

VI. Dos Puntos de Acuerdo.

VII. Asuntos Generales.

Presidenta: a consideración el Orden del Día.

Al no haber discusión, Segunda Secretaria de favor proceda a la votación del Orden del Día.

Secretaria: a votación el Orden del Día; quienes estén por la afirmativa, ponerse de pie; quienes estén por la negativa, ponerse de pie; MAYORÍA por la afirmativa.

Presidenta: aprobado el Orden del Día por MAYORÍA.

Compañeros todos, les aviso que hoy jueves, tenemos el acompañamiento para presenciar parte de nuestros trabajos de esta Sesión Ordinaria, de jóvenes estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura en Derecho de la Universidad San Pablo; con ellos, acude el coordinador de la licenciatura, Profesor Rodrigo Muñoz Vega, sean todos bienvenidos.

El acta de la Sesión Ordinaria número 23 del 25 de marzo, se les notificó en la Gaceta Parlamentaria; por tanto, está a discusión.

Al no haber discusión, Primera Secretaria por favor proceda a la votación del acta.

Secretaria: a votación el acta; quienes estén por la afirmativa, ponerse de pie; quienes estén por la negativa, ponerse de pie; MAYORÍA por la afirmativa.

Presidenta: aprobada el acta por MAYORÍA.

Continuamos; Segunda Secretaria por favor lea la correspondencia del Poder Legislativo.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Secretaria: oficio No. 23, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 23 de marzo del presente año, solicita primera prórroga para dictaminar iniciativa turno número 150.

Presidenta: se otorga.

Primera Secretaria de favor prosiga con la correspondencia de ente autónomo.

Secretaria: oficio No. 399, Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, uno de marzo del presente año, recibido el 24 del mismo mes y año, estados financieros enero.

Presidenta: se turna a la Comisión de Vigilancia.

Segunda Secretaria por favor detalle la correspondencia de ayuntamientos; y organismo paramunicipal.

Secretaria: oficio s/n, dirección de agua potable alcantarillado y saneamiento de Ébano, sin fecha, recibido el 23 de marzo del año en curso, informe financiero 4° trimestre 2021.

Presidenta: se turna a la Comisión de Vigilancia.

Secretaria: oficio No. 78, presidente municipal de Salinas, 23 de marzo del presente año, recibido el 24 del mismo mes y año, respuesta a exhorto 822.

Presidenta: se turna al legislador Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

Secretaria: oficio No. 226, presidente municipal de San Ciro de Acosta, 24 de marzo del año en curso, recibido el 25 del mismo mes y año, certificación acta cabildo aprobación minuta que modifica el artículo 88 de la Constitución Local.

Presidenta: engrosar.

Secretaria: oficio No. 85, presidente municipal de Ciudad Valles, 25 de marzo del presente año, recibido el 29 del mismo mes y año, certificación acta cabildo aprobación minuta que modifica el artículo 88 de la Constitución Local.

Presidenta: engrosar.

Secretaria: oficio No. 53, presidente municipal de San Luis Potosí, 30 de marzo del año en curso, recibido el 31 del mismo mes y año, certificación acta cabildo aprobación minuta que modifica el artículo 88 de la Constitución Local.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Presidenta: engrosar.

En el siguiente punto del Orden del Día, con motivo del Natalicio de Octavio Irineo Paz Lozano, Premio Nobel de Literatura en 1990, participa la legisladora Ma. Elena Ramírez Ramírez.

Ma. Elena Ramírez Ramírez: con su permiso Presidenta, buenos días compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadanos que nos honran con su presencia, en este recinto y a todos quienes nos siguen en la transmisión en vivo de esta sesión, gracias por acompañar, señoras y señores, hoy se conmemora un año más del natalicio de Octavio Paz, poeta, ensayista, escritor y diplomático; sin duda, uno de los autores mexicanos más prestigiosos de la historia, único mexicano que ha obtenido el premio Nobel de Literatura en 1990. quien con su obra *El Laberinto de la Soledad* comenzó a llamar la atención a nivel internacional, es junto con Pablo Neruda y César Vallejo, el grupo de grandes poetas que, tras el declive del modernismo lideraron la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX, estudió en las Facultades de Derecho y de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, donde tomó clases con el escritor Carlos Pellicer, que lo vinculó con poetas como Jorge Cuestas, Javier Villaurrutia, Salvador Novo y José Gorostiza, en 1937 contrajo matrimonio con la escritora Elena Garro, con quien tuvo una hija Elena, para luego viajar a España y participar en el congreso de escritores antifascistas, donde conoció a Rafael Alberti, Nicolás Guillén y Pablo Neruda.

En el servicio exterior mexicano comenzó en 1945 sirviendo en las embajadas de Francia, India y Japón, la vasta producción literaria de Octavio Paz se enmarca entre la lírica, con casi una treintena de libros publicados, y el ensayo que igualmente incluyen más de 30 títulos, como todo intelectual Octavio Paz se mantuvo en el centro de la discusión artística, política y social de nuestro país, su curiosidad, variedad de intereses e inteligencia, se muestran en sus numerosos ensayos que incluyen una amplia diversidad de temas como el arte y la literatura, la sociología y la lingüística, así como la historia y la política, aunque Octavio Paz es reconocido por su calidad de excepcional como poeta y ensayista, otra faceta importante en su vida es la del traductor de poetas, cuya producción está reunida en el libro *versiones y diversiones* de 1974, que fue reeditada en 2000; pero además, Octavio Paz es uno de los escritores mexicanos más traducidos junto con Carlos Fuentes y Juan Rulfo, pues su obra se encuentra en 32 idiomas y continuamente aparecen sus libros en lenguas extranjeras.

La importancia de la obra literaria de Paz también se manifiesta son múltiples reconocimientos a los que se hizo acreedor, coronados por el premio en 1990, pero que también incluye el premio Javier Villaurrutia en 1957 por el Arco y la Lira, el Premio Internacional de Poesía de Bruselas, Bélgica, en



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

1963, el Nacional de Ciencias y Artes en lingüística y Literatura, el Premio Jerusalén y el Nacional de Letras de México, estos 3 en 1977, desde 1967 fue miembro del Colegio Nacional y fue nombrado miembro Honorario de la Academia Mexicana de la Lengua a partir de 1997, Octavio Paz fue nombrado Doctor Honoris Causa por diversas universidades en todo el mundo, como la de Boston Harvard, Nueva York, Texas, la UNAM, la de Murcia y la de Roma, además de obtener el Premio Nacional de Periodismo de México en 1998 en reconocimiento a su trayectoria.

Hoy a casi 24 años de su fallecimiento, los invito a que recordemos como se merece a este gran actor, siendo la ocasión idónea para leer y releer a uno de los más grandes intelectuales del siglo XX, concluyó con una frase de Octavio Paz que decía, “la memoria no es lo que recordamos, sino lo que nos recuerda, la memoria es un presente que nunca acaba de pasar”, muchas gracias.

Presidenta: ahora escucharemos la intervención del legislador Héctor Mauricio Ramírez Konishi, Secretario de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, inherente al Aniversario de la Toma de Puebla.

Héctor Mauricio Ramírez Konishi: buenos días, con su permiso Presidenta, compañeras y compañeros, “señor ministro de guerra, por la dirigencia de mañana sírvase mandarme 300 zapapicos, 200 barretas y 150 palas, a la más que sea posible de estas últimas, si el gobierno haciendo un esfuerzo sobrehumano me manda de preferencia 2,000 infantes, yo le aseguraría hasta con mi vida que la división francesa sería derrotada precisamente el día 6, Puebla 5 de mayo, el enemigo está acampando a 3/4 de la garita de esta ciudad, son las 12:00 del día y se ha roto el fuego del cañón de ambas parte, sobre el campo a las 2:30 de la tarde, dos horas y media nos hemos batido, seguramente atacó con 4,000 hombres, todo su impulso fue sobre el Cerro de Loreto, se retiran sus columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas, comienza un fuerte aguacero, a las 4 de la tarde comenzó su retirada el enemigo, 5 de la tarde aproximadamente, las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria, el enemigo ha hecho esfuerzos supremos durante tres horas, fue rechazado tres veces, está formado fuera de tiro y no lo bato como desearía, porque sabe no tengo para ello fuerzas bastante, sírvase dar cuenta de este parte al ciudadano presidente”, esta narración es la que ya hace en uno de los anales más gloriosos de la historia de nuestro país a través de los telegramas que de viva voz el General Ignacio Zaragoza, jefe del Ejército de Oriente, envió al Gobierno Juarista en pleno desarrollo de la batalla de Puebla del 05 de mayo de 1862.

Dicha invasión francesa fue producto de la determinante medida del Presidente Benito Juárez, cuando suspendió los pagos de la deuda externa a Francia, España e Inglaterra, situación que la



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

diplomacia resolvería más adelante con las naciones involucradas, excepto con Francia que rechazó todo tipo de oferta, la defensa de Puebla fue exitosa y posicionó con respeto a nuestro país ante el panorama internacional, al ser en ese momento el francés el Ejército más respetado del mundo, en esa época, donde la soberanía se defendía a costa de la vida y el territorio se delimitaba con la sangre de miles de héroes desconocidos, es obligación de nosotros valorar su legado a través del fortalecimiento del diálogo, del respeto a las instituciones y del fomento a la democracia, construyéndolo como pilares fundamentales de un país cuya población lucha diariamente contra la adversidad; es cuanto, muchas gracias.

Presidenta: seguimos; el legislador René Oyarvide Ibarra presenta discurso con motivo del Día Internacional del Autismo.

René Oyarvide Ibarra: con su venia Presidenta, muy buenos días a todas y a todas las personas que el día de hoy nos acompañan y nos visitan en el Pleno del Honorable Congreso del Estado, a los estudiantes que hoy están aquí de la Universidad de San Pedro, sean ustedes bienvenidos a su casa, San Pablo, perdón, sean bienvenidos a su casa, a los medios de comunicación y a todos aquellos que nos siguen hoy en las redes sociales, compañeras y compañeros diputados, hoy subo a Tribuna para poder enviar un mensaje en el marco de la celebración del próximo 2 de abril de cada año, que es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, uno de cada 160 infantes en el mundo nacen con un trastorno de neurodesarrollo, conocido como Autismo, más niñas que niños, la tasa es de cuatro a uno, según estudios del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM se estima que en México están siendo diagnosticados y atendidos, hígole, o sea, la verdad que sobre esta condición, 115 niños, son 20,000 niños que están naciendo en la República Mexicana, lo que significa que uno de cada 115 niños que nacen en nuestro país, nacen con esta condición, el trastorno de Espectro Autista se caracteriza por cuatro síntomas, deficiencia del lenguaje, deficiencia en la comunicación e interacción social, movimientos repetitivos y estereotipados, y alteraciones en la percepción sensorial.

Ustedes saben cómo ven el mundo las niñas y los niños que nacen con autismo, lo ven por el rabito del ojo, estudios de resonancia magnética en autismo han demostrado que muchos autistas presentan una auténtica visión atípica, nosotros normalmente escaneamos una imagen y enfocamos el rostro de las personas, pero en cambio los autistas se enfocan en un punto central y el movimiento lo perciben de una manera diferente, no tienen una visión frontal porque así minimizan el movimiento, como si trataran de filtrar la información que reciben del entorno, saben porque con autismo se sufre un gran miedo a los fuegos artificiales, y no de un miedo normal, es un miedo y



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

pánico irracional a los ruidos fuertes, agudos y normalmente repentinos, como son las explosiones típicas de los fuegos artificiales o las tormentas, sus sentidos están alterados y no acaban siendo regulados y controlados de forma ordenada por el sistema vestibular que se encuentra situado dentro del oído interno, y es el que se encarga de mantener el equilibrio y la postura, imagínense nada más lo que viven en las festividades, donde el tronar cohetones a diestra y siniestra, es para unos un gusto y celebración, ya es tiempo compañeras y compañeros diputados que legislemos sobre ello.

El autismo es una condición que dura toda la vida, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en diciembre del 2007, el designar el día 2 de abril de cada año como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre esta discapacidad, en este marco celebramos la diversidad y nos pronunciamos contra la discriminación, es increíble que todavía en este año 2022 las personas con autismo sigan teniendo que afrontar múltiples barreras en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, a menudo se ven privados de acceso a la educación, al empleo y carecen de un apoyo necesario para tomar decisiones autónomas en sus vidas, en la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, quedó plenamente establecido que en este derecho sean realmente incluidas las personas con autismo, ya que en la ley, el derecho inherente para todos los miembros de la sociedad es un derecho universal, conseguir que este derecho sea real en la práctica significa cambiar actitudes, fomentar una comprensión y proporcionar herramientas necesarias para empoderar a las personas con autismo, y aun cuando en San Luis Potosí ya existe una Ley General para la Atención a Personas y Protección con Condición del Espectro Autista, esta fue publicada en febrero de 2017, la verdad que necesitamos compañeras y compañeros diputados, generar un mejor marco de protección y apoyo a través de estos programas, que realmente están contemplados en esa ley y para el día de hoy son insuficientes.

Las políticas públicas en favor de los niños y adolescentes con el trastorno de espectro autista deben ser más incluyentes, y coincido con los representantes de asociaciones civiles que apoyan este sector de la población, que aun tristemente, y lo digo así, porque aún se tiene que trabajar para hacer entenderle a la sociedad potosina, que es una condición que no clasifica los niños como especiales, y que requiere del apoyo institucional para alcanzar su desarrollo e integrarlo dentro de la sociedad, y con las mismas oportunidades, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Sensibilización sobre el Autismo, compañeras y compañeros diputados los invito a que legislemos juntos para apoyar las necesidades de este tema, pedir un mejor presupuesto al Ejecutivo del Estado, para apoyar a las asociaciones civiles que apoyen esta noble causa, y apoyar al Centro del Autismo del DIF, del



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Centro de Rehabilitación y Educación Especial, para que mantengamos una promesa fundamental de la agenda 2030, para el desarrollo sostenible de no dejar a nadie atrás, y reafirmemos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades, la libre determinación y la plena inclusión de todas las personas con autismo; es cuanto Presidenta, gracias

Presidenta: estamos ya en el apartado de iniciativas; la legisladora Bernarda Reyes Hernández, presenta la primera.

PRIMERA INICIATIVA

CC. DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

PRESENTES.

DIPUTADA BERNARDA REYES HERNÁNDEZ y DIPUTADA MARÍA CLAUDIA TRISTÁN ALVARADO, integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo que disponen los numerales, 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 61, 62, 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a consideración de esta Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto que insta en REFORMAR el capítulo VI de “Educación Indígena” de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí; con el objeto de dar cumplimiento a la acción de inconstitucionalidad 179/2020, así como fortalecer el capítulo del sistema de educación para pueblos y comunidades indígenas; con fundamento en la siguiente:

EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

El día 14 de mayo del año 2020, fue aprobada por la LXII legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Educación para el Estado y publicada un 14 de mayo de 2020. Dentro de la nueva Ley de Educación, se contempla un capítulo destinado a la educación indígena, que busca garantizar el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, así como migrantes y jornaleros agrícolas.

El capítulo VI de la actual Ley de Educación para el Estado de San Luis Potosí, en su artículo 39, reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígena a ser escuchados cuando se trate de reformas de esta materia, por medio de una consulta de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia. Sin embargo, no pudo llevarse a cabo la consulta que el mismo capítulo contempla, por motivos ajenos a la legislatura anterior, tratándose de una pandemia por el virus SARS-COV2.

Por esto, el 13 de agosto de 2020, la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó acción de inconstitucionalidad en contra del Poder Legislativo y Ejecutivo, buscando declarar de inconstitucional la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, expedida mediante decreto 0675 publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el catorce de mayo de dos mil veinte; por transgredir el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y de las personas con discapacidad.

Derivado de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en su acción de inconstitucionalidad 179/2020 la declaración de invalidez de los artículos 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46 y 47 de la ley de educación del Estado de San Luis Potosí, relativos a sus capítulos “VI. educación indígena” y “VIII. educación inclusiva; motivo de esto, la sentencia en su punto tercero resolutive, a la letra dice:

“TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los dieciocho meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutive al Congreso del Estado de San Luis Potosí, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de las respectivas consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad, dicho Congreso deberá legislar en las materias de educación indígena y de educación inclusiva, en los términos precisados en el considerando sexto de esta determinación.”⁽¹⁾

⁽¹⁾Sentencia acción de inconstitucionalidad 179/2020
<https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272883>



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Con lo anterior, se obliga a la actual legislatura del Congreso del Estado, a llevar a cabo el proceso de Consulta Indígena, en los artículos mencionados; teniendo dieciocho meses siguientes a que se notificó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 179/2020.

En este entendido, los artículos que integran el capítulo VI de educación indígena para el Estado de San Luis Potosí, se entiende que actualmente están tácitamente derogados, y son inaplicables para dar certeza jurídica a este marco legal, por esto es que se deben poner a consideración y consultarlos, para que puedan ser nuevamente contemplados y vigentes.

La actual Ley de Educación del Estado, en su capítulo VI destinado a la educación indígena, independientemente de no ser consultada en su momento, encontramos que el contenido de este podría considerarse favorable para los pueblos y comunidades indígenas, lo que también es cierto es que el proceso que les dio origen no se apegó a los parámetros que exige una consulta previa en la materia.

Sumando al articulado anterior, se observa que, en todo momento, se contempla a quienes van a recibir la educación, pero también es fundamental que se reconozca a quienes imparten dicha educación, como directores, jefes de departamento y maestros. Por tratarse del principal pilar de la educación, ya que de ellos depende, que el proceso de transmitir y llevar la educación a quienes la necesitan, sea de gran eficacia, apegándose a los criterios fundamentales.

Es importante que el capítulo de la Ley de Educación se reconozca no solo a quienes van a recibir la educación, sino también los encargados de impartirla y desarrollarla, tomándolos en cuenta dentro de la Ley de Educación del Estado y con mayor sentido en el capítulo que se refiere a la educación indígena; mencionando al área especializada en impartir la educación a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.

En la actualidad, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado reconoce a la Dirección de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural, dentro reglamento interno y manual de organización, con base a ello se propone que en este capítulo exista y se mencione dicha área; y con esto garantizar la continuidad y sostenibilidad de los procesos de educación dirigida a pueblos y comunidades indígenas.

Entendamos por educación intercultural, la orientada principalmente a mantener abiertos los canales de transmisión, adquisición y reproducción de la cultura de pueblos y comunidades indígenas y paralelamente, a favorecer la adquisición de otros códigos de comunicación,



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

conocimiento y comportamiento; ayudando al proceso que facilita la articulación armónica e integral de lo nuevo a partir de una matriz cultural propia.⁽²⁾

⁽²⁾ Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano del Estado de San Luis Potosí – decreto 239

Por lo que una educación bilingüe garantiza el derecho constitucional de los pueblos originarios a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus elementos culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad.

Por lo anterior se entiende que una educación bilingüe e intercultural, promueve la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, respecto a la diversidad cultural, diálogo intercultural y la toma de conciencia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Finalmente, es de considerar que los propósitos de la presente iniciativa es poner a consideración bajo proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, el articulado que se encuentra invalidado y a su vez de reforzarlo, así como mencionar al área especializada en impartir la educación indígena; generando un texto que en su momento pueda verse reflejado como Ley. Por lo que la presente iniciativa es posible y no requiere de impacto presupuestal, toda vez que dicha área ya existe dentro de su manual de organización, sin embargo, es importante que se les mencione dentro del capítulo dirigido a la educación indígena.

Para una mayor comprensión de los alcances que persigue esta iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTUAL	PROPUESTA DE REFORMA
Capítulo VI Educación Indígena ARTÍCULO 38. En el Estado de San Luis Potosí se garantizará el ejercicio de los	Capítulo VI Educación Indígena ARTÍCULO 38. En el Estado de San Luis Potosí se garantizará el ejercicio de los

derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afroamericanas, así como **migrantes y jornaleros agrícolas**. Las acciones educativas para estos pueblos y comunidades, por parte del Gobierno del Estado y los Municipios, se encaminarán a garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, y contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de sus tradiciones oral y escrita, como de sus lenguas, como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

La educación que se imparta en poblaciones en donde se encuentren asentadas comunidades indígenas de las diferentes etnias de la entidad, deberá ser plurilingüe e intercultural y atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y

derechos educativos, culturales y lingüísticos a **todas y todos los integrantes de** pueblos y comunidades indígenas o afroamericanas, **conforme a lo establecido en los tratados internacionales sobre la materia, la Constitución Política y la presente ley**. Las acciones educativas para estos pueblos y comunidades, por parte del Gobierno del Estado y los Municipios, se encaminarán a garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, y contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de sus tradiciones oral y escrita, como de sus lenguas, como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

La educación que se imparta en poblaciones en donde se encuentren asentadas comunidades indígenas de las diferentes etnias de la entidad, **así como granjas agrícolas** deberá ser plurilingüe e intercultural y atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación

preservación del patrimonio histórico y las culturas de la Entidad.

ARTÍCULO 39. Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus competencias, consultarán de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en materia educativa, relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 40. En materia de educación indígena, las autoridades educativas estatal y municipal podrán realizar, entre otras acciones, las siguientes:

I. Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad;

II. Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los

del patrimonio histórico y las culturas de la Entidad.

ARTÍCULO 39...

ARTÍCULO 40. En materia de educación indígena, las autoridades educativas estatal y municipal **deberán** realizar, entre otras acciones, las siguientes:

I. Fortalecer el **área especializada** de educación indígena, las escuelas, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad;

II a VI...

pueblos indígenas y comunidades indígenas o afroamericanas, y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías;

III. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, en las diversas lenguas de la entidad federativa;

IV. Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes;

V. Tomar en consideración, en las opiniones que emitan para la elaboración de los planes y programas de estudio, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar;

VI. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia,

tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe, y

VII. Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar que exista un programa de becas para los estudiantes **indígenas** en todos los niveles, así como programas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas.

Sin correlativo

En términos de lo previsto por el penúltimo párrafo del inciso B del Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, y a los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecer las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas disposiciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las

VII. Establecer **mecanismo** de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para **fortalecer los programas de becas educativas y alimentarias para las y los** estudiantes en todos los niveles, así como programas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas.

VIII. Establecer dentro de su organigrama la **dirección de educación indígena bilingüe e intercultural**.

...

comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.	
--	--

Con base en los motivos expuestos y previa consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas respecto al contenido de la presente iniciativa, se pone a consideración a consideración de este Honorable Pleno, el siguiente:

PROYECTO
DE
DECRETO

ÚNICO: Se REFORMA capítulo VI de “educación indígena” de la LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, para quedar como sigue:

Capítulo VI
Educación Indígena

ARTÍCULO 38. En el Estado de San Luis Potosí se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a **todas y todos los integrantes de** pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, **conforme a lo establecido en los tratados internacionales sobre la materia, la Constitución Política y la presente ley.** Las acciones educativas para estos pueblos y comunidades, por parte del Gobierno del Estado y los Municipios, se encaminarán a garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, y contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración,

preservación y desarrollo tanto de sus tradiciones oral y escrita, como de sus lenguas, como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

...

ARTÍCULO 39...

ARTÍCULO 40. En materia de educación indígena, las autoridades educativas estatal y municipal **deberán** realizar, entre otras acciones, las siguientes:

I. Fortalecer el **área especializada** de educación indígena, las escuelas, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad;

II a VI...

VII. Establecer **mecanismo** de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para **fortalecer los programas de becas educativas y alimentarias para las y los** estudiantes en todos los niveles, así como programas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afroamericanas, en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas.

VIII. Establecer dentro de su organigrama la **dirección de educación indígena bilingüe e intercultural.**

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, "Plan de San Luis".

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Bernarda Reyes Hernández: muy buenos días, agradezco las palabras del compañero diputado René Oyarvide, por la sensibilización que tiene a nivel de los compañeros del Congreso, y por supuesto que nos sumamos a esta concientización, que si bien es cierto ya lo dijo, todas las personas que tienen esta condición necesitan mayores garantías para disfrutar una vida plena, esta mañana con el permiso de la Directiva, de los compañeros legisladores y de las personas que nos acompañan de



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

manera virtual a través de nuestras redes, les expresamos un fraternal saludo, quiero presentarles hoy una iniciativa que va dirigida particularmente a la educación indígena, la educación es un tema fundamental en la vida de toda persona, por esta razón la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º nos indica que toda persona tiene derecho a la educación, y cuando el tema de educación le sumamos que va dirigida a un grupo prioritario, como son los pueblos y comunidades indígenas se vuelve de más importancia, el mismo numeral de nuestra ley suprema nos indica, que la educación para los pueblos y comunidades indígenas se impartirá de manera plurilingüe e intercultural, basada en el respeto, en la promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural.

Otro derecho que se reconoce para los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, es el de ser escuchados por medio de una consulta directa, libre, de buena fe, previa informada y culturalmente adecuada, en este tenor la presente iniciativa es la de poner a consideración de los pueblos y comunidades indígenas por medio de consulta lo expuesto en relación al capítulo de educación indígena de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, así como el de complementarlo, y de igual forma que se mencione el área especializada de impartir la educación indígena en el estado, como lo es la Dirección de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural, dentro de la ley en comento, que en particular garantiza el derecho de quienes son los operativos de esta educación; es cuanto, muchas gracias.

Presidenta: se turna a las comisiones de, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Asuntos Indígenas

Primera Secretaria lea la segunda iniciativa, por favor.

SEGUNDA INICIATIVA

Ciudadanas y ciudadanos legisladores integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

C.C. Secretarios de las Comisiones.

P r e s e n t e s .

José Mario de la Garza Marroquín ciudadano potosino en pleno ejercicio de los derechos políticos que me reconoce de forma amplia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis

Potosí y en particular su artículo 61 respecto del derecho de iniciar leyes; en conformidad con lo preceptuado en los artículos 130, 131 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente **Iniciativa con Proyecto de Decreto** para adicionar un quinto párrafo al artículo 19 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, con el objeto legal de reconocer el derecho a un nombre que no vulnere la dignidad humana de la persona.

Con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El nombre es el primer rasgo de identidad civil y es también elemento fundamental de autoreconocimiento humano y referencia social. Para la Real Academia de la Lengua Española por nombre se entiende: “Palabra que designa o identifica seres animados o inanimados”. El nombre, es la vocalización de quién somos. Al ser único, propio, e identitario, es útil para la diferenciación y la afirmación del individuo en la colectividad.

Por su parte, diferentes civilistas han abordado esta definición elemental. El preclaro jurista mexicano Rafael De Pina, refiere que el nombre “es el signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales”.

Para muchos tratadistas, la referencia del nombre como un derecho humano que, además al implicarse como el primer acto de irrupción civil de la persona en el ámbito del derecho, debe privilegiarse el supremo interés de la niñez, en virtud de que la materialización de este relevante hecho, corre por cuenta del padre, la madre o quien ejerza la tutela sobre el menor.

Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (comúnmente conocida como el Pacto de San José de 1969), es de los primeros instrumentos internacionales que reconocen el nombre como un derecho humano:

Artículo 18: Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en su artículo 8 abunda sobre aquellas cuestiones ajenas al menor que pueden menoscabar sus derechos e impone a los Estados signatarios el respetarlos íntegramente:

Artículo 8: 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

Todo, adminiculado con el Artículo 3 que, para enfatizar la necesidad del respeto al supremo interés del menor, a la letra indica:

Artículo 3: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño

Como hemos visto, de forma reciente algunos padres y madres, especialmente jóvenes, suelen proponer para nombre o nombres de sus hijos algunas expresiones que se derivan de alguna coyuntura extraordinaria, algún apodo, algún episodio momentáneo de redes sociales o algún sustantivo tan transgresor que suele ser hiriente en el futuro para el menor que no puede negarse a dicha imposición nominativa.

Es evidente que cuando se selecciona un nombre para el hijo que atente contra su dignidad, entonces es cuando aplica la protección legal de que el derecho de los progenitores a la elección del nombre no es absoluto, sino que debe limitarse por el derecho de las y los hijos a tener un nombre que no les produzca afectaciones futuras, vejaciones a su dignidad y problemas permanentes para relacionarse socialmente.

Esta limitación que desde nuestro punto de vista es necesaria en la legislación civil tiene también un fundamento constitucional, puesto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho humano al nombre en los siguientes términos:

Artículo 29. En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición

de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Como puede apreciarse, queda demostrado que este derecho del menor que se materializa a través de los padres o tutores, sin embargo, no es una libertad absoluta o ilimitada, sino que debe circunscribirse a los principios que priman en este derecho de la mayor importancia.

En este tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sendas jurisprudencias para encuadrar la forma en que puede desdoblarse este derecho, en la 2013385, en lo relativo al reconocimiento de reglamentarlo por parte de las legislaturas de los estados, siempre que se respete la esencia de la figura jurídica:

DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

Conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 29 del mismo ordenamiento, se advierte que el sentido y alcance del derecho humano al nombre, a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales contra dos por el Estado Mexicano en la materia, son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial; incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido; y, es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. Así, la regulación para el ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida siempre que esté en ley bajo condiciones tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, “se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías

procesales”. Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe “en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño”, lo que significa que, en “cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deber ser una consideración primordial que se atenderá”, lo cual incluye no solo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.

Época: Décima época. Registro: 2013385. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, enero de 2017, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. CXL1/2016 (10a.). Página: 792. (SCJN, 2017).

Y en la segunda (2006593), en lo tocante a la supremacía del interés del menor, el componente de estabilidad tanto material como espiritual, así como las implicaciones futuras que ello puede tener en su personalidad, por lo que, en todo momento, debe privilegiarse su interés superior en los términos establecidos en la Constitución del país:

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS.

Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre,

donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa “zona intermedia”, haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que está de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se debe atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional.

Época: Décima época. Registro: 2006593. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, junio de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 44/2014 (10a.). Página: 270. (SCJN, 2014).

Es por lo antes expuesto, que se considera de la mayor necesidad, que el Estado de San Luis Potosí incluya entre sus deberes, imponer límites al derecho de los padres y madres a elegir el nombre de sus hijas e hijos el cual debe preservar y respetar en todo momento la dignidad y el interés superior del menor, evitándose luego, que contenga expresiones vejatorias con graves consecuencias a lo largo de su vida, especialmente en la fase de formación de su personalidad y cuando lo que necesita es justamente todo lo contrario, entornos saludables, armónicos y desarrollar una autoestima sólida.



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

Con base en los motivos expuestos, se presenta a consideración de este pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. *Se adiciona un quinto párrafo al artículo 19 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, para quedar de la siguiente manera:*

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

LIBRO PRIMERO

DE LAS PERSONAS

TITULO PRIMERO

De las Personas Físicas

ART. 19.- El nombre de las personas físicas se forma con el nombre propio y sus apellidos.

El nombre propio será impuesto por quien declare el nacimiento de una persona, respetando la voluntad de los progenitores, pudiendo ser simple o compuesto y los apellidos serán el del padre y el de la madre, en el orden que de común acuerdo determinen o, en su caso, sólo los de aquél, o los de ésta, en el supuesto de reconocimiento por separado.

El acuerdo de los progenitores respecto al orden de los apellidos, deberá mantenerse para todos los hijos de la misma filiación.

En caso de que no exista acuerdo respecto del orden de los apellidos, se asentará en el acta el primer apellido del padre, seguido del primer apellido de la madre.

El nombre propio en ningún caso podrá constituirse con palabras que denigren la personalidad, marcas comerciales, connotaciones físicas discriminatorias, números o apodos.

TRANSITORIOS



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Secretaria: iniciativa, que plantea adicionar quinto párrafo al artículo 19 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí; Licenciado José Mario de la Garza Marroquín, 18 de marzo del año en curso.

Presidenta: se turna a la Comisión de Justicia.

El legislador Alejandro Leal Tovías expone la tercera iniciativa.

TERCERA INICIATIVA

CC. Diputados Secretarios de la LXIII Legislatura Del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Presentes.

Dip. Alejandro Leal Tovías, integrante de la LXIII Legislatura y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que disponen los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; los artículos 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y los artículos 61, 62, y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Soberanía, **Iniciativa con Proyecto de Decreto que DEROGA la fracción V del artículo 18, y REFORMA la fracción VI del mismo artículo, así como la fracción X del artículo 109, de y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí,** misma que fundamento en la siguiente:

EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

Mediante Decreto Legislativo 502 publicado en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el martes 13 de junio de 2006, se expidió la **Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí,** disposición de observancia general, orden



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

público e interés social, la cual tiene por objeto el orden, la transparencia, la rendición de cuentas, la obligación a los legisladores de adquirir un mayor y mejor compromiso con las funciones de representación, fiscalización, control de los poderes y de los organismos constitucionales autónomos, así como de la función de legislar en beneficio de los potosinos, con la congruencia y responsabilidad que representa que el Congreso del Estado sea el poder depositario de la representación y la soberanía popular.

El artículo 18, en las fracciones V y VI de la mencionada Ley Orgánica refiere que el Congreso tiene la atribución de autorizar las enajenaciones y permutas que los municipios pretendan efectuar, así como la incorporación o desafectación de bienes del dominio público o de uso común municipal, el gravamen de los bienes municipales, los empréstitos y en general las deudas que contraigan los municipios.

El artículo 109, en la fracción X, establece, por su parte, que la Comisión de Gobernación tiene la competencia sobre las resoluciones a las autorizaciones para desafectar bienes destinados al dominio público y al uso común, y para enajenar bienes inmuebles propiedad del Estado; así como para incorporar, desafectar, enajenar, permutar o gravar bienes del dominio público municipal;

En cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada el 21 de mayo de 2020, en la Controversia Constitucional 109/2019, y para no supeditar la administración de bienes de los municipios al Poder Legislativo del Estado, mediante Decreto **1139** publicado en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el 26 de febrero de 2021, en el cual se REFORMA el artículo 115 en su párrafo primero; y DEROGA del artículo 57 las fracciones XXXI y XXXII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Se REFORMA los artículos 31 en su inciso c) la fracción III, 108 en su párrafo segundo, 111, 112, 113 y 156; Se ADICIONA al artículo 108 el párrafo tercero; y DEROGA del artículo 32 la fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; Se DEROGA del artículo 106 las fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; Se REFORMA los artículos 31, 32 en su párrafo segundo y en su inciso g), 34, 36, 37 en su párrafo primero y 42, de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con la finalidad de armonizar la legislación estatal con la federal.

En el caso de las Leyes mencionadas en el párrafo anterior, existieron adecuaciones en el sentido de armonizar la legislación estatal vigente, sin embargo, en el caso de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, la reforma que se llevó a cabo fue insuficiente, en razón



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

de que los artículos 18 y 109, contienen en la actualidad fracciones que contiene facultades que se hace necesario suprimir respecto del Pleno y de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, que refieren al trámite de la autorización de enajenación de bienes de los municipios.

Para mayor claridad en la modificación que se propone, se inserta el siguiente cuadro de contraposición de la norma vigente con la norma en los términos que se propone la reforma:

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí (VIGENTE)	PROPUESTA
<p>ARTICULO 18. Las atribuciones del Congreso del Estado con relación a los municipios son las siguientes:</p> <p>V. Autorizar, previa solicitud aprobada por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento respectivo, las enajenaciones y permutas que los municipios pretendan efectuar, así como la incorporación o desafectación de bienes del dominio público o de uso común municipal;</p> <p>VI. Autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos de ley, y a solicitud del ayuntamiento respectivo, aprobada por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del mismo, el gravamen de los bienes municipales, los empréstitos y en general las deudas que contraigan los municipios, cuando excedan el término de la administración de que se trate;</p> <p>ARTICULO 109. Compete a la Comisión de Gobernación, la atención, análisis, discusión y,</p>	<p>ARTICULO 18. Las atribuciones del Congreso del Estado con relación a los municipios son las siguientes:</p> <p>V. SE DEROGA;</p> <p>VI. Autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos de ley, y a solicitud del ayuntamiento respectivo, aprobada por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del mismo, los empréstitos y en general las deudas que contraigan los municipios, cuando excedan el término de la administración de que se trate;</p> <p>ARTICULO 109. Compete a la Comisión de Gobernación, la atención, análisis, discusión y,</p>



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

en su caso, dictamen o resolución de los siguientes asuntos:

X. Los tocantes a las autorizaciones para desafectar bienes destinados al dominio público y al uso común, y para enajenar bienes inmuebles propiedad del Estado; así como para incorporar, desafectar, enajenar, permutar o gravar bienes del dominio público municipal;

en su caso, dictamen o resolución de los siguientes asuntos:

X. Los tocantes a las autorizaciones para desafectar bienes destinados al dominio público y al uso común, y para enajenar bienes inmuebles propiedad del Estado;

PROYECTO
DE
DECRETO

ÚNICO. Se **DEROGA** la fracción V del artículo 18, y se **REFORMA** la fracción VI del mismo artículo, así como la fracción X del artículo 109, de y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTICULO 18. Las atribuciones del Congreso del Estado con relación a los municipios son las siguientes:

V. SE DEROGA;

VI. Autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos de ley, y a solicitud del ayuntamiento respectivo, aprobada por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del mismo, los empréstitos y en general las deudas que contraigan los municipios, cuando excedan el término de la administración de que se trate;

ARTICULO 109. Compete a la Comisión de Gobernación, la atención, análisis, discusión y, en su caso, dictamen o resolución de los siguientes asuntos:

X. Los tocantes a las autorizaciones para desafectar bienes destinados al dominio público y al uso común, y para enajenar bienes inmuebles propiedad del Estado;



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Alejandro Leal Tovías: con su permiso Presidenta, saludo con respeto a todos mis compañeros, y a todos los asistentes a este Pleno, el artículo 18 en las fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, refiere que el Congreso tiene la atribución de autorizar las enajenaciones y permutas que los municipios pretendan efectuar, así como la incorporación o desafectación de bienes en dominio público o de uso común, municipal, el gravamen de los bienes municipales, los empréstitos y en general las deudas que contraiga los municipio, el artículo 109 en la fracción X, establece por su parte, que la Comisión de Gobernación tiene la competencia sobre las resoluciones a las autorizaciones para desafectar bienes destinados al dominio público y al uso común, y para enajenar bienes inmuebles propiedad del estado, así como para incorporar, afectar, enajenar, permutar o gravar bienes de dominio público municipal.

sin embargo, con la finalidad de armonizar la legislación estatal con la federal, y en cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada el 21 de mayo del 2020, en la controversia constitucional 109/2019, y para no supeditar la administración de bienes de los municipios al Poder Legislativo del Estado, mediante decreto 1139 publicado en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el 26 febrero de 2020, se presenta esta propuesta, es el caso de las leyes mencionadas en el párrafo anterior, existen adecuaciones en el sentido de armonizar la legislación estatal vigente; sin embargo, en el caso de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, la reforma que se llevó a cabo fue insuficiente, en razón de que los artículos 18 y 109 contienen en la actualidad fracciones que contiene facultades que se hace necesario suprimir respecto del Pleno y de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, que refieren al trámite de la autorización de enajenación de bienes de los municipios.

Con este antecedente, estoy proponiendo en esta iniciativa que se derogue la fracción V del artículo 18, y se reforma la fracción VI del mismo artículo, así como la fracción X del artículo 109, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, para que así los ayuntamientos puedan disponer de sus bienes como mejor les beneficie, y así las atribuciones del Congreso del



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Estado con relación a los municipios sean de la siguiente manera: autorizar previo al cumplimiento de los requisitos de ley y a solicitud del ayuntamiento respectivo, aprobada por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los miembros del mismo, los empréstitos y en general las deudas que contraiga los municipios, cuando sean el término de la administración de qué se trata, sólo compete a la Comisión de Gobernación, la atención, análisis, discusión y en su caso dictamen o resolución, las autorizaciones para desafectar bienes destinados al dominio público y al uso común, y para el enajenar bienes inmuebles del estado; es cuanto, gracias Presidenta.

Presidenta: se turna a las comisiones de, Puntos Constitucionales; Gobernación; y Desarrollo Territorial Sustentable.

La legisladora Gabriela Martínez Lárraga impulsa la cuarta iniciativa.

CUARTA INICIATIVA

DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

P R E S E N T E.

La que suscribe, **Gabriela Martínez Lárraga**, Diputada de la Representación Parlamentaria, de Redes Sociales Progresistas; en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 15 en su fracción I, 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí; someto a la consideración de esta Soberanía, iniciativa que propone adicionar un Capítulo XII a la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

Las Naciones Unidas a través del Procedimiento Especial sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, afirma que desde una perspectiva de derechos humanos, la edad no es simplemente una designación numérica, sino más bien una noción social enraizada en la costumbre, la práctica y la percepción de la función que una persona desempeña en su comunidad.

La vulnerabilidad y la fragilidad propias de la edad pueden ser el resultado del estado físico y mental, o de impedimentos debidos al envejecimiento, pero también pueden ser el resultado de obstáculos encontrados como consecuencia de la percepción de la sociedad y de la interacción de la persona con su entorno.

El envejecimiento de la población constituye uno de los cambios demográficos más importantes del siglo XXI. Es así que por primera vez en la historia, la humanidad alcanzará un punto en el que en el mundo habrá menos niños y niñas que personas de edad.

Es así que, a nivel mundial, aproximadamente 700 millones de personas, es decir, un 10% de la población mundial, tiene ya más de 60 años. Para 2050, este porcentaje se duplicará, alcanzando el 20%, es decir, 2.000 millones de personas, y para el caso de San Luis Potosí, no es la excepción.

En ese sentido la Observación General No. 6 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, manifestó que los Estados Parte, tienen la obligación de garantizar no solo el derecho a la vida, sino que ésta debe de ser digna en el acceso a la salud, a la educación, y en general que las acciones gubernamentales deben de relacionarse con el disfrute de todos los derechos humanos a que hacen frente las personas adultas mayores, en ámbitos como la prevención y protección ante la violencia y los malos tratos, la protección social, la alimentación y la vivienda, el empleo, la capacidad jurídica, el acceso a la justicia, la asistencia sanitaria y los cuidados asistenciales a largo plazo y paliativos, y que esos problemas exigen un análisis a fondo y medidas para subsanar las deficiencias del régimen de protección.

Por lo anterior, es que se reconoce internacionalmente el deber de los gobiernos a promover y garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades a las personas de edad, en particular tomando medidas para combatir el daño a su salud, al abandono, al maltrato y la violencia, ocupándose de la integración social y la debida diligencia sanitaria, poniendo importancia decisiva de la solidaridad, la reciprocidad y la interdependencia generacional en el ánimo de generar un sano desarrollo social para las personas adultas mayores.

Es así que, se propone esta iniciativa con el objetivo de crear centros gerontológicos que no solo reaccionen a lo acontecido, sino que prevengan en el cuidado y atención de las personas adultas mayores a partir de las necesidades que tiene este grupo poblacional. En ese sentido, y conscientes que esta iniciativa conlleva un impacto presupuestal es que una vez turnada, se solicita a las comisiones que les corresponda resolverlas, se solicite a la Secretaría de Finanzas un impacto

Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

presupuestal que responda a la obligación en materia de la progresividad de derechos humanos DESCA para las personas adultas mayores, pues de lo que se trata es de avanzar en la protección de derechos y no solo responder desde un piso de garantía mínimo.

A continuación, se inserta el siguiente cuadro comparativo para efecto de ilustrar como quedaría la reforma que se propone:

LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Texto vigente	Texto Propuesto
No hay correlativos	<p>CAPITULO XIII</p> <p>De los Centros Gerontológicos</p> <p>ARTÍCULO 45 QUINQUE. El Estado tiene la obligación de crear centros gerontológicos de libre acceso a la población adulta mayor.</p> <p>Los centros gerontológicos constituyen un nivel asistencial preventivo y activo de cuidados de larga duración, destinados a personas adultas mayores, teniendo como énfasis a personas en situación de pobreza, abandono, dependencia física y/o psíquica, comorbilidades o problemática social.</p> <p>ARTÍCULO 45 SEXTIES. Los servicios públicos de asistencia en estos centros deberán ser planificados, centrándose en la persona y en su seguridad.</p> <p>Los centros gerontológicos deberán contar con personal cualificado y los servicios deberán ser monitoreados para</p>

Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

evaluarse de forma continua, implantando acciones innovadoras para mejorarla poniendo como objetivo la mejora en la calidad de vida de las personas adultas mayores que hagan uso de este servicio.

ARTÍCULO 45 SEPTIES. Los centros gerontológicos dependerán del Sistema Estatal DIF y deberán contar con los recursos de residencia, de hogar, de unidad convivencial.

En cuanto a los servicios, deberán brindar comedor social, peluquería, podología, relajación, áreas de unidad y apoyo integral a la salud, orientación a la realidad, grupos terapéuticos, áreas de salud física y terapia ocupacional.

ARTÍCULO 45 OCTIES. El Sistema Estatal DIF deberá crear un modelo de Centro Gerontológico que no pierda la capacidad de adaptarse continuamente al constante cambio social y estrecha relación existente con el entorno, que de respuesta a las demandas sociales de esta población objetivo.

Es por todo lo anteriormente expuesto que, es necesario y urgente que se lleve a cabo la reforma propuesta:

PROYECTO

DE

DECRETO

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, decreta lo siguiente:

ÚNICO. Se **ADICIONA**, un Capítulo XIII y los respectivos artículos 45 Quinque, 45 Sexties, 45 Septies, 45 Octies, todos de la Ley para las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí; para quedar de la siguiente manera:

CAPITULO XIII

De los Centros Gerontológicos

ARTÍCULO 45 QUINQUE. El Estado tiene la obligación de crear centros gerontológicos de libre acceso a la población adulta mayor.

Los centros gerontológicos constituyen un nivel asistencial preventivo y activo de cuidados de larga duración, destinados a personas adultas mayores, teniendo como énfasis a personas en situación de pobreza, abandono, dependencia física y/o psíquica, comorbilidades o problemática social.

ARTÍCULO 45 SEXTIES. Los servicios públicos de asistencia en estos centros deberán ser planificados, centrándose en la persona y en su seguridad.

Los centros gerontológicos deberán contar con personal cualificado y los servicios deberán ser monitoreados para evaluarse de forma continua, implantando acciones innovadoras para mejorarla poniendo como objetivo la mejora en la calidad de vida de las personas adultas mayores que hagan uso de este servicio.

ARTÍCULO 45 SEPTIES. Los centros gerontológicos dependerán del Sistema Estatal DIF y deberán contar con los recursos de residencia, de hogar, de unidad convivencial.

En cuanto a los servicios, deberán brindar comedor social, peluquería, podología, relajación, áreas de unidad y apoyo integral a la salud, orientación a la realidad, grupos terapéuticos, áreas de salud física y terapia ocupacional.

ARTÍCULO 45 OCTIES. El Sistema Estatal DIF deberá crear un modelo de Centro Gerontológico que no pierda la capacidad de adaptarse continuamente al constante cambio social y estrecha relación existente con el entorno, que de respuesta a las demandas sociales de esta población objetivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente.

Gabriela Martínez Lárraga: gracias Presidenta, buenos días a todos, y nada más puntualizar que esta iniciativa surge de una de las propuestas del Parlamento de Mujeres que se llevó a cabo, respecto a los Centros Gerontológicos, la vulnerabilidad y la fragilidad propias de la edad pueden ser el resultado del estado físico y mental, o de impedimentos debidos al envejecimiento, pero también puede ser el resultado de obstáculos encontrados como consecuencia de la percepción de la sociedad y de la interacción de la persona con su entorno, el envejecimiento de la población constituye uno de los cambios demográficos más importantes de este siglo XXI, es así que por primera vez en la historia la humanidad alcanzará un punto en el que en el mundo habrá menos niños y niñas que personas de edad, es así que a nivel mundial aproximadamente 700 millones de personas; es decir, un 10% de la población mundial tiene ya más de 60 años, para 2050 ese porcentaje se duplicará alcanzando el 20%; es decir, 2 millones de personas, y para el caso de nuestro estado San Luis Potosí no es la excepción.

En este sentido, la observación general número 6 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, manifestó que los estados parte tienen la obligación de garantizar no sólo el derecho a la vida, sino que éste debe de ser digna en el acceso a la salud, a la educación y en general que las acciones gubernamentales deben de relacionarse con el disfrute de todos los derechos humanos a que hacen frente las personas adultas mayores, en ámbitos como la prevención



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

y protección ante la violencia y los malos tratos, la protección social, la alimentación y la vivienda, el empleo, la capacidad jurídica y el acceso a la justicia, la asistencia sanitaria y los cuidados asistenciales a largo plazo y paliativos, y que esos problemas exigen un análisis de nuestra parte a fondo, y medidas para subsanar las deficiencias del régimen de protección.

Por lo anterior, es que se reconoce internacionalmente el deber de los gobiernos a promover y garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades a las personas de edad, en particular tomando medidas para combatir el daño a su salud, el abandono, el maltrato, la violencia, ocupándose de su integración social y la debida diligencia sanitaria, poniendo la importancia decisiva de la solidaridad, la reciprocidad y la interdependencia generacional en el ánimo de generar un sano desarrollo social para nuestras personas adultas mayores; es así que se propone con esta iniciativa, crear Centros Gerontológicos, que no sólo reaccionen a lo acontecido, sino que prevengan en el cuidado y atención de las personas adultas mayores a partir de las necesidades que tienen este grupo poblacional.

En este sentido y conscientes de que esta iniciativa conlleva un impacto presupuestal, es que una vez turnada se solicite a las comisiones que les corresponda resolverlas, se solicite a la Secretaría de Finanzas un impacto presupuestal que responde a la obligación en materia de progresividad, de Derechos Humanos, DESCA, para las personas adultas mayores, pues de lo que se trata es de avanzar en la protección de derechos y no sólo responder desde un piso de garantía mínimo; agradezco su atención, es cuanto Presidenta.

Presidenta: se turna a las comisiones de, Derechos Humanos, Igualdad y Género; y Salud y Asistencia Social.

Continúa con la expresión la legisladora Gabriela Martínez Lárraga para la quinta iniciativa.

QUINTA INICIATIVA

DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

P R E S E N T E.

La que suscribe, **Gabriela Martínez Lárraga**, Diputada de la Representación Parlamentaria, de Redes Sociales Progresistas; en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 15 en su fracción I, 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62 y 65 del Reglamento

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí; someto a la consideración de esta Soberanía, iniciativa que propone reformar los artículos 2º, 21 y 51 de la Ley de Los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN
DE
MOTIVOS

Desde la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, las autoridades tienen el mandato de respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos.

En el sistema jurídico mexicano, la Constitución es una norma jurídica. Esta afirmación implica asumir que es vinculante por sí misma y que las normas inferiores que no respeten su contenido son inválidas. En este sentido, los derechos fundamentales han dejado de ser principios programáticos que únicamente podían hacerse efectivos cuando el legislador los materializaba en normas jurídicas para convertirse en normas con eficacia directa.

Sin embargo, las normas que contienen derechos fundamentales están redactadas de manera abstracta e indeterminada. Por ello, para que estos principios tengan verdadera fuerza vinculante es necesario que se concreten por los jueces y tribunales encargados de interpretar la Constitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha desempeñado como un verdadero Tribunal Constitucional que ha dotado de contenido a los derechos fundamentales a través de sus sentencias. Principalmente a partir de la décima época, los precedentes de la Suprema Corte son muy robustos en cuanto al desarrollo de estos derechos.

Ahora bien, una condición que contribuye a que los derechos fundamentales puedan ser verdaderas normas con eficacia directa, es que el contenido que se les ha dado por el supremo intérprete de la Constitución sea difundido de manera adecuada, especialmente entre los distintos operadores jurídicos.

En este sentido, el desconocimiento de la doctrina constitucional constituye un obstáculo para la aplicación de estos criterios a casos futuros, lo que opera en detrimento de la coherencia de las

decisiones judiciales y propicia la violación de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la seguridad jurídica. Por lo demás, no debe pasar inadvertido que el conocimiento de los criterios de la Suprema Corte puede ser complejo para las personas que no son especialistas en el tema debido a varios factores.

El primero de ellos tiene que ver con que el sistema de precedentes mexicano es particularmente complejo, ya que está revestido de distintas formalidades que pueden complicar el conocimiento de los criterios. Además, el lenguaje técnico que se utiliza en las sentencias puede hacerlas inaccesibles para aquellas personas que no son especialistas en derecho.

A lo anterior debemos añadir que el número de casos que se resuelven por la Suprema Corte es muy alto, por lo que resulta difícil conocer todos los criterios que se han dictado sobre un tema y estar al día en el seguimiento de los precedentes. Los derechos de la diversidad sexual se han posicionado en el centro del debate jurídico contemporáneo en la última década y han influido profundamente en la forma en la que se piensa el derecho en la actualidad. Sin duda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido un factor clave para este cambio de paradigma, a través de las decisiones que ha emitido en estos temas.

De esta manera, las decisiones de la Suprema Corte han contribuido de modo determinante a la incorporación normativa de otras realidades que no se apegan al paradigma tradicional de la sexualidad, la identidad y la expresión de género. Esto se traduce en la inclusión a distintas estructuras jurídicas de las uniones civiles, el cambio de nombre y sexo, entre otros.

Además, las resoluciones de la Corte se han caracterizado por su carácter pedagógico, lo que ha permitido traducir en términos jurídicos las exigencias y demandas de igualdad e inclusión del activismo de la diversidad sexual, llevándolas a espacios que les fueron vedados por décadas.

A través de su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha reconocido que, como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra la identidad de género y, para garantizar este derecho, el Estado mexicano debe establecer los procedimientos necesarios para adecuar los documentos de estas personas a su identidad de género.

Aun y cuando estos derechos personalísimos no se enuncian (derecho a la intimidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la identidad sexual y de género) en forma expresa en la Constitución, deben entenderse como derechos que derivan del reconocimiento al derecho a la

dignidad humana previsto en el artículo 1º. constitucional, pues sólo a través de su pleno respeto podría hablarse de un ser humano en toda su dignidad.

Como parte de estos derechos, el individuo tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, la manera en que logrará las metas y los objetivos que para él son relevantes. De ahí el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad como la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano como ente autónomo. Tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado.

De esta manera, el derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de procrear hijos y cuántos, así como en qué momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y por supuesto, la libre opción sexual, pues todos estos aspectos evidentemente son parte de la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma. En cuanto al ámbito sexual de una persona o a su identidad sexual y de género, se trata de aspectos inherentes a la persona humana y a su vida privada y, por ende, forman parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, esa parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público.

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersex (LGBTI), cuya orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales no se ciñen a las características consideradas socialmente como “adecuadas” o “normales”, constantemente enfrentan discriminación y violencia a la que se le conoce como: homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e intersexfobia.

La discriminación y violencia tienen su origen en prejuicios y estereotipos que derivan de la ignorancia respecto de la sexualidad y el género, y se presentan en distintas formas, niveles y ámbitos. Las consecuencias en la vida de las personas implican la imposibilidad de ejercer plenamente los derechos humanos y las expresiones más graves son los crímenes de odio.

Estudios de diversos países han demostrado que al ser comparadas con personas no LGBTI, las personas LGBTI tienen menores salarios, menos oportunidades de empleo, viven más frecuentemente en la pobreza, viven peores condiciones de salud, enfrentan mayores obstáculos en

la educación y sufren violencia y rechazo familiar con mayor frecuencia; y es así que 8 de cada 10 personas encuestadas trabajan.

En la postulación para un trabajo, varias personas han enfrentado prácticas que pudieran resultar discriminatorias, como pruebas de embarazo (2.59%) o de VIH/SIDA (11.76%). El trato que reciben las personas LGBTI no es igual al que reciben las personas heterosexuales. Sólo 2 de cada 10 personas perciben que siempre reciben el mismo pago cuando realizan las mismas actividades que personas heterosexuales.

A la discriminación debe sumarse la brecha significativa entre el marco normativo y la realidad para las personas LGBTI en el ámbito del trabajo y para las personas LGBTI que desean incursionar en el ámbito laboral. Otro estudio reveló que una de cada tres personas han sido víctima de discriminación por su jefa/e o compañeros/as de trabajo debido a su orientación sexual y/o identidad y expresión de género; a 10% de las personas encuestadas las han despedido por motivo de su orientación sexual y/o identidad de género; a 20% de las personas le han preguntado cuál es su orientación sexual y/o identidad de género para obtener o no un empleo, y al 14% les han negado un empleo por su orientación sexual y/o identidad de género.

De acuerdo con ello, los Estados deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de prohibir y erradicar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración. Además, eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y sensibilización a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias.

A continuación, se inserta el siguiente cuadro comparativo para efecto de ilustrar como quedaría la reforma que se propone:

LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Texto vigente	Texto Propuesto
<p>ARTICULO 2o.- El trabajo es un derecho y un deber social, y ha de efectuarse en condiciones de equidad e igualdad entre mujeres y hombres, que aseguren la integridad física y mental, así como un nivel económico decoroso para las personas trabajadoras y su familia, en un marco de libertad y dignidad, no discriminación y libre de violencia.</p> <p>No podrán establecerse distinciones entre las personas trabajadoras del servicio público por motivo de género, edad, etnia, preferencias políticas, religiosas o culturales, condición socioeconómica, cultural, discapacidad, enfermedad, orientación sexual o todas aquellas que puedan resultar discriminatoras.</p>	<p>ARTICULO 2o.- (...)</p> <p>(...)</p> <p>Así mismo, se deberán establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de garantizar la igualdad real de oportunidades.</p>
<p>ARTICULO 21.- Será facultad de los titulares de las entidades públicas respectivas, establecer las condiciones</p>	<p>ARTICULO 21.- (...)</p>

generales de trabajo, con acuerdo del sindicato correspondiente, a través de su directiva.

Las condiciones de trabajo estarán basadas en los principios de no discriminación, y de igualdad sustantiva, en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de sexo, edad, raza, nacionalidad, algún tipo de discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil y/o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

(...)

De igual manera, tanto las entidades públicas como las organizaciones sindicales, deberán establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero,

	con el fin de garantizar la igualdad real de oportunidades.
<p>ARTICULO 51.- Las instituciones públicas de gobierno en sus relaciones laborales, están obligadas a:</p> <p>I.- Preferir en igualdad de condiciones a los trabajadores sindicalizados, respecto de quienes no lo sean; a los que con anterioridad hubieran prestado sus servicios; para quienes represente la fuente única de ingresos; y a quienes tuvieran familia, respecto de los que no la tengan.</p> <p>II.- Pagar los sueldos y demás prestaciones en los días previamente señalados y de preferencia en el domicilio de la realización de los servicios;</p> <p>III.- Observar y cumplir todas las medidas de higiene y seguridad, para prevenir riesgos de trabajo;</p> <p>IV.- Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para el desempeño del trabajo encomendado;</p> <p>V.- Acatar en sus términos los laudos que emita el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, siempre que no existan recursos pendientes de resolución; VI.- Señalar las condiciones</p>	<p>ARTICULO 51.- (...)</p> <p>I. a la XV.</p>

generales de trabajo, las que nunca podrán ser menores a las que establece la presente ley, debiendo acordarlas con el sindicato respectivo;

VII.- Sin menoscabo de sus derechos de antigüedad, en los términos de las condiciones generales de trabajo, otorgar licencias a sus trabajadores en los siguientes casos:

a).- Para desempeñar cargos de elección popular;

b).- Para desempeñar comisiones sindicales;

c).- Los previstos en el artículo 37 de esta ley; y

d).- Cuando sean promovidos temporalmente a otras comisiones, en dependencias diferentes a la de su adscripción o cargos de confianza;

VIII.- Aportar a las instituciones de seguridad social respectivas, los porcentajes que correspondan al trabajador y a las entidades públicas de gobierno, para que aquéllas otorguen las jubilaciones o pensiones que procedan;

IX.- Cubrir las demás aportaciones que según las leyes de la materia correspondan y las convenidas con los

sindicatos respectivos, para que los trabajadores tengan los beneficios de la seguridad social;

X.- Cuando fueren condenadas en virtud de laudo ejecutorio, cubrir las indemnizaciones por despido injustificado, cuando los trabajadores afectados hayan optado por esta solución o, en su caso, reinstalar a los trabajadores en los puestos de los cuales hubieren sido separados injustamente y cubrir los salarios caídos conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de esta ley;

X. Bis. Tratándose de ayuntamientos, respecto de los laudos firmes que se hayan originado con motivo del despido o cese injustificado de un trabajador, y éste se haya generado durante su gestión, deberán acatarlo antes de concluir el periodo para el que fueron electos; en caso de no hacerlo, serán responsables en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí:

XI.- Guardar hacia los trabajadores el debido respeto y consideración;

XI Bis. Implementar, en acuerdo con las o los trabajadores, protocolo para prevenir el hostigamiento y/o acoso

sexual; XII.- Contribuir para el fomento de actividades cívicas, culturales y deportivas de los trabajadores;

XIII.- Proporcionar capacitación y adiestramiento en los términos de la presente ley;

XIV. Adoptar las medidas, adecuaciones, ajustes y mejoras necesarios que aseguren el libre acceso y desplazamiento de las personas en general, así como también de las personas trabajadoras que padezcan de alguna discapacidad en condiciones de igualdad y no discriminación. Para estos efectos deberán modificar, en su caso, las instalaciones, en los términos que señalen las propias autoridades y la normatividad vigente;

XV. Implementar, con base en el Programa Interno de Protección Civil que establece la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí, capacitación para las y los trabajadores en el rubro, por lo menos una vez al año dentro de la jornada laboral, y

XVI.- Cumplir con las demás obligaciones que deriven de este ordenamiento.

XVI.- En toda dependencia pública se deberá de tener una cuota de personas trabajadoras de la población LGBTI dando prioridad a las personas travestis,

transgénero y/o transexuales en los puestos que de acuerdo a su nivel de preparación les permita desempeñar, así mismo acceder a un plan de capacitación para el trabajo que de oportunidad al acceso de crecimiento laboral al interior de la institución; y

XVII. Cumplir con las demás obligaciones que deriven de este ordenamiento.

Es por todo lo anteriormente expuesto que, es necesario y urgente que se lleve a cabo la reforma propuesta:

PROYECTO
DE
DECRETO

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, decreta lo siguiente:

ÚNICO. Se **REFORMAN**, los artículos 2º, 21; así mismo se **ADHIERE** una fracción XVI al artículo 51; todos de la Ley de Los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí; para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 2o.- (...)

(...)

Así mismo, se deberán establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de garantizar la igualdad real de oportunidades.

ARTICULO 21.- (...)

(...)

De igual manera, tanto las entidades públicas como las organizaciones sindicales, deberán establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de garantizar la igualdad real de oportunidades.

ARTICULO 51.- (...)

I. a la XV.

XVI.- En toda dependencia pública se deberá de tener una cuota de personas trabajadoras de la población LGBTI dando prioridad a las personas travestis, transgénero y/o transexuales en los puestos que de acuerdo a su nivel de preparación les permita desempeñar, así mismo acceder a un plan de capacitación para el trabajo que de oportunidad al acceso de crecimiento laboral al interior de la institución; y

XVII. Cumplir con las demás obligaciones que deriven de este ordenamiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente.

Gabriela Martínez Lárraga: gracias Presidenta, esta iniciativa igual surge de una de las propuestas, de una de las participantes del segundo Parlamento de Mujeres que se lleva a cabo el pasado martes, Honorable Asamblea, a los colectivos de diversidad sexual y al público en general, esta iniciativa surge a partir de la propuesta de la ciudadana Bárbara Sami Portillo, quien pretende poner en

perspectiva la importancia de los derechos laborales de los colectivos de la diversidad Trans, frente a este jueves 31 de marzo, que es día de la visibilidad Trans, en el sistema jurídico mexicano la Constitución es una norma jurídica, esta afirmación implica asumir que es vinculante por sí misma, y que las normas inferiores que no respeten su contenido son inválidas.

En este sentido, los derechos fundamentales han dejado de ser principios programáticos que únicamente podían hacerse efectivos cuando el legislador los materializaba en normas jurídicas para convertirse en normas con eficacia directa, a lo anterior debemos añadir que el número de casos que se resuelven por la Suprema Corte es muy alto, por lo que resulta difícil conocer todos los criterios que se han dictado sobre un tema y estar al día en el seguimiento de los precedentes, los derechos de la diversidad sexual se han posicionado en el centro del debate jurídico contemporáneo en la última década, y han influido profundamente en la forma en la que se piensa el derecho en la actualidad; sin duda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un factor clave para este cambio de paradigmas, a través de las decisiones que ha emitido en estos temas, de esta manera las decisiones de la Suprema Corte han contribuido de manera determinante a la incorporación normativa de otras realidades que no se apegan al paradigma tradicional de la sexualidad, la identidad y la expresión de género.

Esto se traduce en la inclusión a distintas estructuras jurídicas de las uniones civiles, el cambio de nombre y sexo entre otros, a través de su jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha reconocido que como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra la identidad de género, y que para garantizar este derecho el estado mexicano debe establecer los procedimientos necesarios para adecuar los documentos de estas personas a su identidad de género, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersex, cuya orientación sexual e identidad de género, expresión de género y características sexuales no se ciñen a las características consideradas socialmente como adecuadas o normales, constantemente enfrentan discriminación y violencia a la que se le conoce como homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e intersexfobia, la discriminación y violencia tienen su origen en prejuicios y estereotipos que derivan de la ignorancia respecto de la sexualidad y el género, y se presentan en distintas formas niveles y ámbitos.

Las consecuencias en la vida de las personas implican la imposibilidad de ejercer plenamente los derechos humanos y las expresiones más graves son crímenes de odio, estudios de diversos países han demostrado que las personas LGTBTI tienen menores salarios, menores oportunidades de empleo, viven más frecuentemente en la pobreza, vive en peores condiciones de salud, enfrentan



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

mayores obstáculos en la educación, sufren de violencia y rechazo familiar con mayor frecuencia, y es así que 8 de cada 10 personas encuestadas trabajan, es así que esta iniciativa se presenta con el objetivo de fortalecer la lucha contra la discriminación, y que en las instituciones públicas se reconozca el derecho al trabajo de las personas de la diversidad sexual y que éstas sean incorporadas al ámbito laboral en actividades apropiadas a su experiencia laboral, así como abonar a la sensibilización institucional a fin de contrarrestar las actividades discriminatorias, es cuanto Presidenta.

Presidenta: se turna a las comisiones de, Trabajo y Previsión Social; y Derechos Humanos, Igualdad y Género.

Presenta la sexta iniciativa la legisladora Lidia Nallely Vargas Hernández.

SEXTA INICIATIVA

DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE.

Lidia Nallely Vargas Hernández, Diputada Local en la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, e integrante del **Grupo Parlamentario de MORENA** (Movimiento de Regeneración Nacional), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí; presento **iniciativa con proyecto de decreto** para adicionar diversas disposiciones a la **Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, con base en lo siguiente:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que son ciudadanos aquellas personas que, teniendo el carácter de mexicanos, cuenten con la edad de 18 años y que **tengan un modo honesto de vivir.**

Por su parte, **la Constitución Potosina**, en su artículo 19, señala que los habitantes del Estado **están obligados a tener un modo honesto de vivir**, lo cual se extiende a la fracción II, artículo 24, de la



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

misma Constitución, pues señala que para ser ciudadano potosino de igual forma se requiere tener dicha forma de vivir.

De ambas constituciones se advierte que para tener ciudadanía se requiere que las **personas tengan un modo honesto de vivir**, por lo que, para definir dicho **concepto**, los Tribunales competentes han determinado que se actualiza cuando **las conductas y acciones de las personas son acorde con los valores legales y morales**. En consecuencia, si una persona actúa en contra de dichos valores, se debe considerar que carece de un modo honesto de vivir.

Se transcribe la siguiente jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para extender la explicación:

Jurisprudencia 18/2001

MODO HONESTO DE VIVIR COMO REQUISITO PARA SER CIUDADANO MEXICANO. CONCEPTO.- El concepto de modo honesto de vivir ha sido uniforme en la evolución de las sociedades y de las leyes, identificando con él a la conducta constante, reiterada, asumida por una persona en el seno de la comunidad en la que reside, con apego y respeto a los principios de bienestar considerados por la generalidad de los habitantes de este núcleo social, en un lugar y tiempo determinados, como elementos necesarios para llevar una vida decente, decorosa, razonable y justa. **Para colmar esta definición, se requiere de un elemento objetivo, consistente en el conjunto de actos y hechos en que interviene un individuo; y un elemento subjetivo, consistente en que estos actos sean acordes con los valores legales y morales rectores del medio social en que ese ciudadano viva.** Como se advierte, este concepto tiene un contenido eminentemente ético y social, que atiende a la conducta en sociedad, la cual debe ser ordenada y pacífica, teniendo como sustento la moral, como ingrediente insoslayable de la norma jurídica. El modo honesto de vivir, es una referencia expresa o implícita que se encuentra inmersa en la norma de derecho, tal y como sucede con los conceptos de buenas costumbres, buena fe, que tienen una connotación sustancialmente moral, constituyendo uno de los postulados básicos del derecho: vivir honestamente. En ese orden de ideas, la locución un modo honesto de vivir, se refiere al comportamiento adecuado para hacer posible la vida civil del pueblo, por el acatamiento de deberes que imponen la condición de ser mexicano; en síntesis, quiere decir buen mexicano, y es un presupuesto para gozar de las prerrogativas inherentes a su calidad de ciudadano.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Adentrando en temas electorales, en el Estado de San Luis Potosí, realizando una interpretación amplia y con atención a los artículos antes citados, se desprende que **para ser candidato a algún puesto de elección popular se requiere ser ciudadano potosino, por tanto tener un modo honesto de vivir, ya que una de las características de la ciudadanía es precisamente eso. Si tiene un modo deshonesto de vivir no tendrá el carácter de ciudadano y en consecuencia no podrá ser candidato.**

La palabra *candidato* deviene de la antigua roma, y en esos tiempos se hacía referencia a que las personas que pretendían acceder a un cargo debían demostrar que son dignos de representar a los demás, incluso se vestían de blanco con la finalidad de distinguirse entre la multitud. En la actualidad esto se puede traducir en un *modo honesto de vivir*.

En San Luis Potosí, en las leyes correspondientes, se aprecia que quienes pretendan representar a sus iguales, deben cumplir con requisitos especiales, lo cual es correcto. Las personas que accedan a un cargo deben tener la firme creencia que harán acciones en beneficio de los intereses populares. **Si acceden personas al cargo que vayan en contra de dichos intereses, el Estado eventualmente se desestabilizará**, por ello habrá de procurarse que los potosinos tengan representantes que velen por los intereses generales, apartándose en todo momento de intereses individuales.

Ahora, por disposición del artículo 1 y 4 de la Constitución Política Federal, todas las autoridades tienen la obligación de respetar y promover el **principio del interés superior del menor**.

En el principio del interés superior del menor **se presenta la obligación de respetar en todo momento los derechos de los menores de edad, desde dos puntos de vista: de prevención y reparación**. Una forma ejemplar de garantizar dicho principio es mediante el aseguramiento de sus alimentos y que éstos sean entregados con prontitud, para no poner en riesgo su subsistencia.

Para efectos de la iniciativa, se afirma que si una persona no proporciona alimentos a sus hijos, estará vulnerando el principio del interés superior del menor. Más aún cuando existe una sentencia de por medio y la misma no se acata.

No hay nada más violatorio de derechos humanos que aquellas acciones u omisiones que afectan a los menores de edad. Es claro que **si una persona no proporciona alimentos atenta las leyes, las buenas costumbres, los valores morales y la dignidad humana**.

El objeto de la presente iniciativa recaen en que las personas que pretendan ser candidatos a cualquier puesto de elección popular, deban presentar un escrito en el que, bajo protesta de decir

verdad, manifiesten que no tienen deudas alimentarias por motivo de sentencia ejecutoriada. Lo anterior por que se parte de la tesis que los representantes populares deben respetar los derechos humanos desde antes de ser candidatos.

Si una persona incumple con su obligación de proporcionar alimentos, estará atentando en contra de disposiciones constitucionales, legales además de atentar contra los valores morales y de buenas costumbres, todo en perjuicio de su acreedor alimentario. Lo que se traduce, por criterios del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, que no tienen un modo honesto de vivir, pues dichos actos son contrarios a derechos humanos en materia del interés superior de los menores.

No pasa desapercibido que habrá personas que quieran ser candidatos y que a su vez tengan deudas alimentarias, por lo que, si se solicita el requisito de que manifiesten que no han incumplido con dicha obligación, al menos sentirán la necesidad de cumplir con sus deudas para no ser evidenciados ante el electorado y serán referente social para que los deudores alimentarios sepan que hay consecuencias en cualquier nivel.

En la actualidad se requiere que se presente una carta de no antecedentes penales, por lo que si se amplía al carácter alimentario, sería en beneficio de los potosinos, pues se garantizaría de mejor manera que los candidatos sean ejemplares. Además de que se garantizaría que los futuros servidores respeten los derechos alimentarios de los niños.

No hay duda que si una persona incumple con su obligación de proporcionar alimentos, es garantía de que no podrá cumplir con pulcritud actos en beneficio de los potosinos. **Si falla en lo particular, fallará en lo general. Si falla a su núcleo familiar, fallará al núcleo social y gubernamental. Si no puede con lo menos, no podrá con lo más.**⁽¹⁾ Si comete omisiones inhumanas como no proporcionar alimentos no debemos permitir que dichas personas lleguen a ser candidatos. Los potosinos no merecen tener representantes que vulneran derechos de los menores de edad.

Este tema tiene que ser sensible para el Estado de San Luis Potosí, pues otras entidades federativas lo han dado a notar. E incluso el propio Instituto Nacional Electoral emitió lineamientos para que los partidos políticos **“prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género”**⁽²⁾, en lo que precisamente destaca el tema de la presente iniciativa.

⁽¹⁾Haciendo referencia en contrario al principio del derecho: “Quien puede lo más puede lo menos”.

⁽²⁾<https://centralectoral.ine.mx/2020/10/28/deudores-de-pension-alimenticia-y-condenados-por-violencia-familiar-o-delitos-sexuales-no-podran-ser-candidatos-en-las-elecciones/>

A continuación el cuadro comparativo de la propuesta:

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (Con adición)
<p>LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ</p> <p>ARTÍCULO 304. A la solicitud de registro deberá anexarse la siguiente documentación de cada uno de los candidatos:</p> <p>...</p> <p>V. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:</p> <p>...</p> <p>(sin correlativo)</p>	<p>LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ</p> <p>ARTÍCULO 304. A la solicitud de registro deberá anexarse la siguiente documentación de cada uno de los candidatos:</p> <p>...</p> <p>V. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:</p> <p>...</p> <p>j) No incumplir deudas alimentarias ordenadas mediante sentencia firme.</p>

Es por lo anterior, que se propone la presente iniciativa, para consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. - Se adiciona el inciso j), a la fracción V, del artículo 304, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ARTÍCULO 304. A la solicitud de registro deberá anexarse la siguiente documentación de cada uno de los candidatos:

...

V. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:

...

j) No incumplir deudas alimentarias ordenadas mediante sentencia firme.

TRANSITORIOS

PIMERO. – El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Lidia Nallely Vargas Hernández: con su venia Presidenta, buenos días a todos, la palabra candidato deviene de la antigua Roma, y en esos tiempos se hacía referencia a que las personas que pretendían acceder a un cargo debían demostrar que son dignos de representar a los demás, incluso se vestían de blanco con la finalidad de distinguirse entre la multitud, blanco como un signo de pureza, de blancura, era un distintivo del candidato, en la actualidad esto puede traducirse un en un modo honesto de vivir, las personas que accedan a un cargo deben tener la firme creencia que harán acciones en beneficio de los intereses populares, si acceden personas al cargo que vayan en contra de dichos intereses el estado eventualmente se desestabilizará; ahora, por disposición del artículo 1º y 4º de la Constitución Política Federal, todas las autoridades tienen la obligación de respetar y promover el principio del interés superior del menor, una forma ejemplar de garantizar dicho principio es mediante el aseguramiento de sus alimentos y que éstos sean entregados con prontitud para no poner en riesgo la subsistencia de los menores, se afirma que si una persona no proporciona alimentos a sus hijos está vulnerando el principio del interés superior del menor, más aún cuando existe una sentencia de por medio y que la misma no se acata.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

No hay nada más violatorio de Derechos Humanos que aquellas acciones u omisiones que afectan a los menores de edad, es claro que si una persona no proporciona alimentos atenta a las leyes, las buenas costumbres, los valores morales y la dignidad humana, si una persona incumple con sus obligaciones de proporcionar alimentos, es garantía de que no podrá cubrir el compromiso con los potosinos, si falla en lo particular fallará en lo general, si fallas un núcleo familiar, fallará al núcleo social y gubernamental, si no puede con lo menos no podrá con lo más, si una persona recae en omisiones inhumanas no debemos permitir que llegue a ser candidato, los potosinos y las potosinas no merecen tener representantes que vulneran derechos de los menores de edad.

Es por lo anterior, que las personas que pretendan ser candidatos deberán presentar un acta en la que bajo protesta de decir verdad, manifiesten que no incumplen con deudas alimentarias ordenadas mediante sentencias firmes, es cuanto y muchas gracias.

Presidenta: se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales; con copia a la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Tiene la palabra la diputada Bernarda Reyes.

Bernarda Reyes Hernández: con el permiso de la promovente, solicitó adherirme a su propuesta.

Presidenta: la diputada Liliana, diputada María Claudia, adelante, Amilcar diputado, diputado Juan Francisco, José Antonio Lorca, diputado Juan Ramón, diputada María Aránzazu, diputado Roberto Ulises, diputado Alejandro Leal, diputada Martha Patricia, diputada Nadia Esmeralda, diputado Héctor Mauricio, diputado Eloy, diputada Dolores Elisa, diputada Gabriela Martínez, diputada Emma Idalia, diputado José Luis Fernández, diputado Salvador Isais, diputado Rubén Guajardo, diputado Edmundo Torrescano, diputada María Elena, diputada Cinthia Segovia, diputado René Oyarvide, también yo, Yolanda Cepeda, si me lo permite; incorporarse en el acta y en el registro las adhesiones.

El legislador José Luis Fernández Martínez explica la séptima iniciativa.

SÉPTIMA INICIATIVA

DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

P R E S E N T E.

DIP. JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ, DIP. ELOY FRANKLIN SARABIA, DIP. DOLORES ELIZA GARCÍA ROMÁN, DIP. MARTHA PATRICIA ARADILLAS ARADILLAS, DIP. ROBERTO ULISES MENDOZA PADRÓN, DIP. NADIA ESMERALDA OCHOA, DIP. EDGAR ALEJANDRO ANAYA ESCOBEDO, DIP. SALVADOR ISAÍS RODRÍGUEZ, DIP. CINTHIA VERÓNICA SEGOVIA COLUNGA, DIP. RENÉ OYARVIDE IBARRA, Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la atribución que nos confieren los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, elevamos a la consideración de esta representación de la Soberanía del pueblo potosino, la presente Iniciativa que insta a reformar los artículos 343 fracción I y II, 357 primer párrafo, ambos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, propuesta que planteamos al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Es necesario considerar que el proceso electoral de nuestra entidad se lleve a efecto con todas las condiciones propicias para fortalecer nuestra democracia y genere certidumbre en los partidos políticos, en los candidatos y en el electorado.

Un tema fundamental dentro del proceso electoral es la duración de las campañas y las precampañas, ya que esto se encuentra estrechamente ligado con distintas inquietudes de los actores políticos, como son el abstencionismo, la propaganda negativa, el uso de recursos de procedencia ilícita, la aplicación de herramientas tecnológicas, y la adaptación al modelo de austeridad que prevalece en el país.

Los partidos, candidatos y precandidatos tienen el propósito de obtener el mayor número de votos, pero la experiencia ha demostrado, que entre más tiempo dure su labor de proselitismo, menor será el interés en los potenciales votantes por emitir su voto, ya que la propaganda satura de mensajes a la población de forma agobiante, y consecuentemente, la intensa exposición mediática a la que se someten los candidatos, los coloca a todos en una posición de desgaste progresivo e irreversible, que desembocan en el abstencionismo.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Un factor que contribuye al deterioro de la imagen de candidatos y precandidatos es la divulgación de información falsa sobre los mismos, lo cual se facilita y se incrementa con periodos largos de campaña o precampaña. Reducir estos periodos es contrarrestar la práctica de la propaganda negativa, que nada abona al proceso electoral, y por el contrario lo pervierte. Un periodo breve de campaña o precampaña permitirá que los aspirantes a un cargo de elección popular se concentren en presentar a los potenciales votantes sus propuestas, dejando al margen la diatriba, el rumor, y en general la campaña negra.

Otro aspecto que se pretende evitar con la presente iniciativa, es el uso de recursos de procedencia ilícita en campañas y precampañas. Es cierto que los gastos deben apegarse a lo establecido por la norma legal, y en todo caso justificarse, sin embargo, cualquier infractor de esa norma tendrá mayor oportunidad de exceder el presupuesto autorizado, de manipularlo y de hacerlo valer a su favor, en tanto tenga un periodo más amplio para promover el voto. Reducir esos periodos se traducirá en la posibilidad de fiscalizar con mayor precisión y rapidez todos los gastos y recursos económicos empleados, para generar equidad en el proceso electoral.

A su vez, la nueva normalidad ha impuesto algunas prácticas indispensables para el desahogo de las actividades ordinarias. Una de ellas es la aplicación de instrumentos tecnológicos y el uso del internet, los cuales permiten acortar distancias, optimizar tiempos, y por supuesto, disminuir costos. En este sentido, se puede citar la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la cual se revela, entre otros datos que en México durante 2020:

- Se estimó una población de 84.1 millones de usuarios de internet, que representan 72.0% de la población de seis años o más.
- Se cuenta con 88.2 millones de usuarios de teléfono celular (75.5% de la población de seis años o más).
- Se estimaron 44.4 millones de usuarios de computadora.
- De 36.0 millones de hogares, 76.6% cuenta con por lo menos con un televisor de tipo digital.

- Que 71.5 millones de personas son usuarias de señal de televisión abierta (61.2% del total de la población de seis años o más), y
- Que son usuarias de radio 41.0 millones de personas (35.1% de los habitantes de 6 o más años).⁽¹⁾

En lo que respecta exclusivamente al Estado de San Luis Potosí:

- Se estimó una población de 1, 725, 432 usuarios de internet, de los cuales 50.8% son mujeres y 49.2% son hombres.
- Los tres lugares principales para el acceso a internet son: El hogar con 89.2%, el celular inteligente (Smartphone) con 44.5%, y la casa de otra persona (amigo o familiar) con 37.3 por ciento.
- Se cuenta con 1, 808, 261 usuarios de telefonía celular, es decir, 9 de cada 10 potosinos disponen de un celular inteligente (Smartphone).
- Se estimaron 904, 781 potosinos con computadora.
- Que hay 1, 609, 785 personas con señal de televisión abierta, y
- Que 932, 175 potosinos utilizan radio.⁽²⁾

⁽¹⁾https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf

⁽²⁾<https://slp.gob.mx/usi/Paginas/NOTICIAS%202021/En-SanLuisPotosi-hay-1-mill%C3%B3n-725432-de-usuarios-de-Internet-y-88-2-millones-de-usuarios-de-telefonos-celulares-ENDUTIH-202.aspx>

Con los datos anteriores de la Encuesta citada, se puede concluir que actualmente los candidatos y precandidatos tienen a su alcance las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para difundir sus propuestas de forma instantánea, no presencial y a costos moderados. Por lo que con estas herramientas, se puede reducir el periodo de campañas y precampañas sin afectar los propósitos de difundir la imagen de los aspirantes a cargos de elección popular, divulgar sus propuestas y compromisos, y promover el voto a su favor.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Cabe resaltar que la presente iniciativa es tendiente a coadyuvar con la política de austeridad que prevalece en el país y que constituye un eje rector para hacer más eficiente el erario público. En términos generales, reducir el periodo de campañas y precampañas incentivará: mayor participación de los ciudadanos; consolidación de plataformas electorales propositivas en temas legislativos y de administración pública; mayor transparencia y fiscalización de los gastos efectuados y de los recursos económicos invertidos; la combinación de las actividades presenciales tradicionales para promocionar un candidato o precandidato, con el uso de las TIC que permiten promocionarse con rapidez ante un sector amplio de la población; y, en suma, disminuir considerablemente el gasto del proceso electoral, que es una demanda de la sociedad.

Debe expresarse que la iniciativa propuesta se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su fracción IV, inciso j) señala:

“ARTÍCULO 116.

...

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

...

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;...”

Por lo anterior y para efectos de ilustrar el contenido de la iniciativa propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En cuanto a las **precampañas**:

Texto Vigente	Texto Propuesto
ARTICULO 343. ...	ARTÍCULO 343. ...

I. Tratándose de las precampañas para la elección de Gobernador, estas se desarrollarán dentro del período comprendido del quince de noviembre del año previo al de la elección, al quince de febrero del año de la elección, y no podrán durar más de sesenta días a partir del día el que el partido político, a través de su representante, notifique al Consejo el comienzo de sus procesos;

II. Tratándose de las precampañas para la elección de Diputados y ayuntamiento, estas se desarrollarán dentro del período comprendido del quince de noviembre del año previo al de la elección, al quince de febrero del año de la elección, y no podrán durar más de cuarenta días a partir del día el que el partido político, a través de su representante, notifique al Consejo el comienzo de sus procesos, y

I. Tratándose de las precampañas para la elección de Gobernador, se desarrollarán dentro del período comprendido del quince de noviembre del año previo al de la elección, al quince de febrero del año de la elección, y no podrán durar más de **treinta días** a partir del día en que el partido político, a través de su representante, notifique al Consejo el comienzo de su proceso.

II. Tratándose de las precampañas para la elección de Diputados y ayuntamiento, estas se desarrollarán dentro del período comprendido del quince de noviembre del año previo al de la elección, al quince de febrero del año de la elección, y no podrán durar más de **veinte días** a partir del día en que el partido político, a través de su representante, notifique al Consejo el comienzo de su proceso.

En cuanto a las **campanas**:

Texto Vigente	Texto Propuesto
ARTICULO 357. Las campañas electorales para Gobernador del Estado tendrán una duración de noventa días.	ARTICULO 357. Las campañas electorales para Gobernador del Estado tendrán una duración de sesenta días .



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

Las campañas electorales para diputados y ayuntamientos tendrán una duración de sesenta días. ...	Las campañas electorales para diputados y ayuntamientos tendrán una duración de treinta días
--	--

Por todo lo anterior expuesto, se concluye necesario reducir los tiempos previstos para las campañas y precampañas electorales, en los términos propuestos en la presente iniciativa, en beneficio de los potosinos.

Por lo que, con fundamento en los artículos 61, 62, 63, 64 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, los que suscriben sometemos a esta Asamblea Legislativa la presente Iniciativa.

PROYECTO
DE
DECRETO

ÚNICO. Se REFORMAN las fracciones I y II del artículo 343, así como el artículo 357 en su primer párrafo, ambos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 343.

...

I. Tratándose de las precampañas para la elección de Gobernador, se desarrollarán dentro del período comprendido del quince de noviembre del año previo al de la elección, al quince de febrero del año de la elección, y no podrán durar más de treinta días a partir del día en que el partido político, a través de su representante, notifique al Consejo el comienzo de su proceso.

II. Tratándose de las precampañas para la elección de Diputados y ayuntamiento, estas se desarrollarán dentro del período comprendido del quince de noviembre del año previo al de la

elección, al quince de febrero del año de la elección, y no podrán durar más de veinte días a partir del día en que el partido político, a través de su representante, notifique al Consejo el comienzo de su proceso.

ARTICULO 357. Las campañas electorales para Gobernador del Estado tendrán una duración de sesenta días. Las campañas electorales para diputados y ayuntamientos tendrán una duración de treinta días.

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto.

José Luis Fernández Martínez: muy buenos días, con el permiso de la Presidenta, saludo con mucho respeto a mis compañeros y compañeras diputados, también a los medios de comunicación, y a las personas que a través de ellos nos siguen en esta sesión, hago el uso de la Tribuna para poner a consideración de ustedes una iniciativa que presentamos en conjunto el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, que tiene que ver con el proceso de reforma electoral que estamos procesando en este momento en el Congreso del Estado, presentamos un conjunto de iniciativas que voy a enumerar en esta misma intervención, que tienen que ver con, el darle voz a la petición de muchos ciudadanos, que dimos cuenta a través de los foros electoral; en primera instancia, quisiera mencionar que estamos proponiendo la desaparición de un concepto llamado alianza partidaria, que no tiene ningún sentido de estar vigente en la Ley Electoral de San Luis Potosí, debido a que este concepto desapareció hace mucho tiempo de la Ley Federal y entiendo que somos uno de dos estados que lo mantiene vigente, y es un término evidentemente antidemocrático.

Segundo, estamos proponiendo también elevar el porcentaje requerido de votación para ocupar un asiento en esta soberanía, es decir del 3% elevarlo al 4% de la votación para poder acceder a una curul por la vía plurinominal, también estamos proponiendo que en los distritos XIII, XIV y XV, los partidos políticos propongan en acción afirmativa un candidato de ascendencia de pueblos



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

originarios, de pueblos indígenas, y me quiero detener en la siguiente propuesta, que es la que solicite el uso de la voz para presentar, que tiene que ver con uno de los puntos más señalados por los ciudadanos y las ciudadanas de San Luis Potosí en los foros electorales, tiene que ver con la duración de las campañas políticas y por ende de su costo, de todo lo que se gasta de dinero público en las campañas; por eso, estamos proponiendo que se ajuste la ley electoral a los extremos mínimos que marca la Constitución Política de la República Mexicana y la Constitución Política de San Luis Potosí.

Es decir, que para la campaña de gobernador constitucional se reduzca de 90 días de campaña a 60 días, para la campaña de ayuntamientos y diputados locales se reduzca de 60 días a 30 días, también hay una modificación en los periodos de precampaña, donde se manejan los extremos pero se reduce de manera significativa los días que se podrán ocupar también en la precampaña, con esta propuesta específicamente sentimos que le estamos dando voz a una propuesta y a un reclamo de la ciudadanía, y que esperemos contar con el respaldo y con el apoyo en una primera instancia de la Comisión Electoral, de la Comisión Especial para la Reforma Electoral en una siguiente instancia, de la Comisión de Puntos Constitucionales para que sea dictaminado de manera favorable, por supuesto que sea votada a favor en el Pleno; es cuanto, muchas gracias.

Presidenta: se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales; con copia a la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Segunda Secretaria lea por favor la octava iniciativa.

OCTAVA INICIATIVA

DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

P R E S E N T E.

DIP. JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ, DIP. ELOY FRANKLIN SARABIA, DIP. DOLORES ELIZA GARCÍA ROMÁN, DIP. MARTHA PATRICIA ARADILLAS ARADILLAS, DIP. ROBERTO ULISES MENDOZA PADRÓN, DIP. NADIA ESMERALDA OCHOA, DIP. EDGAR ALEJANDRO ANAYA ESCOBEDO, DIP. SALVADOR ISAÍS RODRÍGUEZ, DIP. CINTHIA VERÓNICA SEGOVIA COLUNGA, DIP. RENÉ OYARVIDE IBARRA, Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, integrantes del



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la atribución que nos confieren los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, elevamos a la consideración de esta representación de la Soberanía del pueblo potosino, la presente Iniciativa que insta a reformar la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, propuesta que planteamos al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática para conformar los diferentes órganos de gobierno mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Los partidos políticos deben sujetarse a las disposiciones establecidas en Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, la cual, en su artículo 1 señala entre otras cosas que la renovación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Y abunda en el tema en el artículo 7, al señalar que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Asimismo, los partidos políticos deben sujetarse a lo establecido por la Ley General de Partidos Políticos, la cual regula las formas de participación o asociación de los partidos políticos para postular candidatos. Debemos resaltar que la Ley General de Partidos Políticos, reconoce el derecho de los partidos para formar Coaliciones, Frentes y Fusiones, y de éstas tres figuras, únicamente las Coaliciones son las que se forman con fines electorales, es decir con el fin de postular candidatos en un proceso electoral.

En el ámbito local, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 134 fracción VI, establece el derecho de los partidos políticos a formar Coaliciones, Alianzas Partidarias, Frentes y Fusiones, y de forma específica se establece en el artículo 170 que los partidos políticos para fines electorales pueden formar Coaliciones o Alianzas Partidarias y postular los mismos candidatos en las elecciones estatales.

En este sentido, podemos advertir que en el ámbito federal solo se contempla la figura de las Coaliciones, mientras que en el ámbito local, además se contempla la figura de Alianzas Partidarias, la cual genera discordancia con la figura de las Coaliciones, en virtud de que en éstas últimas no se permite la transferencia de votos, a diferencia de las Alianzas Partidarias que han sido utilizadas para negociar los votos para cada uno de los partidos aliados, para efectos de la conservación del registro, de otorgamiento de financiamiento y de asignación de cargos de representación proporcional.

Existe discordancia entre las Coaliciones y las Alianzas Partidarias en virtud de que las primeras tienen el objetivo de lograr la mayor cantidad de votos que traigan como resultado la mayor representatividad en los órganos de gobierno, sin posibilidad de distribuir o transferir votos. Mientras que las segundas establecen la distribución de votos que se realizará para cada partido político, ya que eso les permite subsistir, dejando al margen la voluntad de los electores, quienes al emitir su voto ignoran a cuál partido político de la alianza le beneficiará.

Es así como las Alianzas Partidarias generan incertidumbre y confusión ya que se constituyen como una negociación entre fuerzas políticas, en la que incluso puede no haber coincidencia ideológica, pero postulan al mismo candidato o candidatos, sólo como una estrategia para obtener mejores resultados.

Por su parte en la Coalición, los partidos políticos aparecen con su propio emblema en la boleta electoral manteniendo su individualidad y disminuyendo ampliamente la confusión entre los electores, pues de este modo pueden emitir su sufragio exactamente al partido político de su elección. En consecuencia, al existir mayor certidumbre en la emisión del voto, se reflejará en el aumento de la participación ciudadana, disminuyendo a su vez el abstencionismo y los incidentes y protestas que se generan en el cómputo de votos.

Aunado a lo anterior, debemos considerar que el proceso electoral en el Estado debe apegarse de forma estricta a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 1 y 7, así como a lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí en su artículo 20, que describen al voto como un derecho y una obligación de carácter intransferible. De igual forma, es necesario homologar nuestra Legislación local con el modelo planteado en la Ley General de Partidos Políticos que en su artículo 23 únicamente hace referencia a la figura de Coaliciones.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Es por ello, y porque esta Soberanía tiene la facultad de legislar sobre las formas de participación o asociación de los partidos para postular candidatos, que consideramos necesario Derogar las Alianzas Partidarias en el ánimo de fortalecer el sistema democrático de San Luis Potosí y armonizar nuestro marco jurídico electoral con la legislación federal, garantizando en todo momento el derecho de asociación de los partidos políticos, así como la libertad de los ciudadanos potosinos de votar directamente por el partido político de su elección.

La eliminación de la figura de Alianzas Partidarias que se propone en esta iniciativa atiende a la exigencia de generar condiciones de equidad en la competencia electoral, que contribuyan a fortalecer nuestra democracia. Asimismo, se pretende abonar a la certeza en la emisión del voto, y con ello contribuir a generar condiciones de igualdad en la participación política y ofrecer a los potosinos un clima de estabilidad política y de mayor gobernabilidad.

Para efectos de ilustrar el contenido de la iniciativa propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
<p>TITULO SEXTO</p> <p>CAPITULO IV</p> <p>De las disposiciones Generales Aplicables a los Frentes, las Coaliciones, las Alianzas Partidarias y las Fusiones.</p> <p>ARTÍCULO 170. Los partidos políticos para fines electorales, pueden formar coaliciones, alianzas partidarias y postular los mismos candidatos en las elecciones estatales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley.</p>	<p>TITULO SEXTO</p> <p>CAPITULO IV</p> <p>De las disposiciones Generales Aplicables a los Frentes, las Coaliciones y las Fusiones.</p> <p>ARTÍCULO 170. Los partidos políticos para fines electorales, pueden formar coaliciones y postular los mismos candidatos en las elecciones estatales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley.</p>

ARTÍCULO 172. Los partidos de nuevo registro no pueden convenir frentes, alianzas partidarias coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección local inmediata posterior a su registro según corresponda.

ARTÍCULO 173. Se presumirá la validez del convenio de coalición o de alianza partidaria del acto de asociación o participación, siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en contrario.

Capítulo VII

De las Alianzas Partidarias

ARTÍCULO 191. Dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, pueden presentar candidaturas en alianza partidaria; sujetándose a las siguientes reglas y condiciones:

I. Podrán postular candidatos en alianza para la elección de Gobernador del Estado, diputados por el principio de mayoría relativa, y planillas de mayoría relativa para la renovación de ayuntamientos, sea en elección ordinaria o extraordinaria. En todo

ARTÍCULO 172. Los partidos de nuevo registro no pueden convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección local inmediata posterior a su registro según corresponda.

ARTÍCULO 173. Se presumirá la validez del convenio de coalición del acto de asociación o participación, siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en contrario.

Capítulo VII

De las Alianzas Partidarias

(DEROGADO)

ARTÍCULO 191. (DEROGADO).

caso se requiere el consentimiento escrito del candidato o candidatos en alianza. En este esquema no podrán postularse candidatos a diputados, y regidores por el principio de representación proporcional;

II. Antes de que concluya el plazo para el registro oficial deberán presentar ante el Consejo, la autorización del órgano directivo estatal de cada partido para llevarlas a cabo;

III. Que la solicitud de registro correspondiente cumpla con todos los requisitos legales, y se efectúe dentro del plazo que para tal efecto establezca la presente Ley o convocatoria, según el caso;

(REFORMADA, P.O. 31 DE MAYO DE 2017)

IV. Que celebren los partidos contendientes en alianza partidaria, los convenios respectivos. Dicho convenio deberá contener:

a) Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que se trate.

- b) Emblema común de los partidos que lo conforman, y el color o colores con que se participa.
- c) Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar, y el consentimiento por escrito del candidato.
- d) La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes de la alianza partidaria propuesta.
- e) La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la alianza partidaria, para efectos de la conservación del registro, para el otorgamiento del financiamiento público y, en su caso, para la asignación de representación proporcional, y otros aquellos que establezca esta Ley.
- f) Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de los medios de comunicación distintos a radio y televisión, y a los topes de gastos de

campana determinados por el Consejo.

g) Para las elecciones de diputados y miembros de los ayuntamientos, determinar el partido político al que pertenecerán los candidatos en caso de resultar electos;

v. *(DEROGADA, P.O. 31 DE MAYO DE 2017)*

vi. *(DEROGADA, P.O. 31 DE MAYO DE 2017)*

(ADICIONADA, P.O. 31 DE MAYO DE 2017)

vii. Los partidos políticos que postulen candidatos bajo la figura de alianza partidaria, no podrán postular candidatos propios ni de otros partidos políticos para la elección que convinieron;

(ADICIONADA, P.O. 31 DE MAYO DE 2017)

viii. Al convenio de alianza partidaria deberá anexarse los siguientes documentos:

a) La documentación que acredite que los partidos políticos postulantes del candidato propuesto entregaron en

tiempo y forma, su plataforma electoral a la autoridad electoral, y

b) Las actas que acrediten que los órganos internos de los partidos aprobaron de conformidad con sus estatutos, y la firma del convenio de alianza partidaria para la elección que corresponda.

ARTÍCULO 192. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de diputados, terminará automáticamente la alianza partidaria por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a diputados de la alianza que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de alianza.

(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2017)

ARTÍCULO 193. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos en alianza partidaria, aparecerá el emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que se participa en la boleta electoral, según la elección de que se trate. Los votos se computarán a favor del candidato propuesto en alianza partidaria, y la

ARTÍCULO 192.(DEROGADO).

ARTÍCULO 193. (DEROGADO).

distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio registrado ante el Consejo.

ARTÍCULO 194. Cada uno de los partidos en alianza, en todo caso, deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de candidatos a regidores por el mismo principio.

ARTÍCULO 195. La solicitud de registro del convenio de alianza, según sea el caso, deberá presentarse al Consejo, según la elección que lo motive, acompañado de la documentación pertinente, en la etapa de registro de candidatos de la elección de que se trate.

Una vez registrado un convenio de alianza, el Consejo, dispondrá su publicación en el Periódico Oficial del Estado o en el órgano de difusión oficial local, según corresponda.

ARTÍCULO 194. (DEROGADO).

ARTÍCULO 195. (DEROGADO).

En relación con la iniciativa propuesta, resulta necesario armonizar los siguientes artículos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 6°. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

...

VII. Campaña electoral: el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones, alianzas partidarias y los candidatos registrados, para la obtención del voto;

ARTÍCULO 25. Queda prohibido a los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias, precandidatos y candidatos, entregar a los electores, dinero, despensas, enseres domésticos, materiales para construcción y, en general, cualquier otro bien, en todo tiempo y bajo cualquier título o denominación.

Se exceptúan de la prohibición establecida en el párrafo anterior, los bienes utilitarios con propaganda impresa.

ARTÍCULO 28. Los diputados y los miembros de los ayuntamientos podrán ser reelectos.

Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido político o por

ARTÍCULO 6°. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

...

VII. Campaña electoral: el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto;

ARTÍCULO 25. Queda prohibido a los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, entregar a los electores, dinero, despensas, enseres domésticos, materiales para construcción y, en general, cualquier otro bien, en todo tiempo y bajo cualquier título o denominación.

Se exceptúan de la prohibición establecida en el párrafo anterior, los bienes utilitarios con propaganda impresa.

ARTÍCULO 28. Los diputados y los miembros de los ayuntamientos podrán ser reelectos.

Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido político o por

cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o alianza partidaria que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Los miembros de los ayuntamientos, pueden ser electos por dos periodos consecutivos por el mismo cargo. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o alianza partidaria que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

ARTÍCULO 44. El Pleno del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. NORMATIVAS:

...

e) Expedir y publicar oportunamente las convocatorias para que los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias o ciudadanos por su propio derecho, soliciten el registro de candidaturas a Gobernador, diputados, y ayuntamientos.

...

II. EJECUTIVAS:

cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Los miembros de los ayuntamientos, pueden ser electos por dos periodos consecutivos por el mismo cargo. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

ARTÍCULO 44. El Pleno del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. NORMATIVAS:

...

e) Expedir y publicar oportunamente las convocatorias para que los partidos políticos, coaliciones o ciudadanos por su propio derecho, soliciten el registro de candidaturas a Gobernador, diputados, y ayuntamientos.

...

II. EJECUTIVAS:

b) Resolver sobre los convenios de coalición y alianzas partidarias que presenten los partidos políticos, dentro de los diez días siguientes a aquél en que los reciba.

ARTÍCULO 134. Son derechos de los partidos políticos:

...

VI. Formar coaliciones, alianzas partidarias, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección estatal que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de la Ley General de Partidos y esta Ley;

ARTÍCULO 144. Se considera información pública de los partidos políticos:

...

IX. Los convenios de frente, coalición, alianza partidaria o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas estatales;

...

ARTÍCULO 165. Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre

b) Resolver sobre los convenios de coalición que presenten los partidos políticos, dentro de los diez días siguientes a aquél en que los reciba.

ARTÍCULO 134. Son derechos de los partidos políticos:

...

VI. Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección estatal que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de la Ley General de Partidos y esta Ley;

ARTÍCULO 144. Se considera información pública de los partidos políticos:

...

IX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas estatales;

...

ARTÍCULO 165. Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre

las campañas beneficiadas de acuerdo con lo siguiente:

I. Como gastos genéricos de campaña, se entenderá los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la que el partido, la coalición o la alianza partidaria, promueva o invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña;

ARTÍCULO 189. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición o alianza partidaria en los términos del presente Capítulo.

ARTÍCULO 203. Si un partido político nacional perdiera su registro, pero en el ámbito estatal hubiere obtenido, sin mediar coalición o alianza partidaria, al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las últimas elecciones en que participó, y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, podrá solicitar registro como partido político estatal, siempre y cuando lo

las campañas beneficiadas de acuerdo con lo siguiente:

I. Como gastos genéricos de campaña, se entenderá los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la que el partido o la coalición, promueva o invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña;

ARTÍCULO 189. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del presente Capítulo.

ARTÍCULO 203. Si un partido político nacional perdiera su registro, pero en el ámbito estatal hubiere obtenido, sin mediar coalición, al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las últimas elecciones en que participó, y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, podrá solicitar registro como partido político estatal, siempre y cuando lo haga en un término que no exceda de

haga en un término que no exceda de treinta días a partir de la publicación de la pérdida del registro en el Diario Oficial de la Federación. La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos:

...

ARTÍCULO 217. Las agrupaciones políticas podrán participar en los procesos electorales del Estado, exclusivamente mediante convenios de participación con un partido político, o con candidatos independientes, siempre y cuando se sujeten a las siguientes bases:

I. Les queda expresamente prohibido participar con coaliciones y alianzas partidarias;

...

ARTÍCULO 233. Son derechos de los aspirantes a candidatos independientes registrados, los siguientes:

...

IV. Realizar actos y propaganda en los términos permitidos a los precandidatos de partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias,

treinta días a partir de la publicación de la pérdida del registro en el Diario Oficial de la Federación. La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos:

...

ARTÍCULO 217. Las agrupaciones políticas podrán participar en los procesos electorales del Estado, exclusivamente mediante convenios de participación con un partido político, o con candidatos independientes, siempre y cuando se sujeten a las siguientes bases:

I. Les queda expresamente prohibido participar con coaliciones.

...

ARTÍCULO 233. Son derechos de los aspirantes a candidatos independientes registrados, los siguientes:

...

IV. Realizar actos y propaganda en los términos permitidos a los precandidatos de partidos políticos y

conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de esta Ley, y

...

(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2017) ARTÍCULO 235. ...

...

II. La recepción de las manifestaciones se hará ante la presencia de los funcionarios electorales que al efecto se designen, y de los representantes que, en su caso, designen los partidos políticos, coaliciones o alianzas partidarias, y aquellos que los propios aspirantes decidan acreditar, sin que se requiera la comparecencia personal del ciudadano que exprese su apoyo a un determinado aspirante a candidato independiente, y

ARTÍCULO 262. Los aspirantes o candidatos independientes que incumplan con la normatividad electoral que les resulte aplicable, podrán ser sancionados en términos de lo previsto en el Título Décimo Cuarto de esta Ley.

Queda prohibido a los candidatos independientes participar en coalición o

coaliciones, conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de esta Ley, y

...

(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2017) ARTÍCULO 235. ...

...

II. La recepción de las manifestaciones se hará ante la presencia de los funcionarios electorales que al efecto se designen, y de los representantes que, en su caso, designen los partidos políticos o coaliciones, y aquellos que los propios aspirantes decidan acreditar, sin que se requiera la comparecencia personal del ciudadano que exprese su apoyo a un determinado aspirante a candidato independiente, y

ARTÍCULO 262. Los aspirantes o candidatos independientes que incumplan con la normatividad electoral que les resulte aplicable, podrán ser sancionados en términos de lo previsto en el Título Décimo Cuarto de esta Ley.

alianza partidaria con partidos políticos.

ARTÍCULO 292. Los partidos políticos, las alianzas partidarias o las coaliciones con derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, podrán registrar candidatos para cargos de elección popular. Los ciudadanos del Estado podrán ser registrados como candidatos independientes, siempre que atiendan a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes, y resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto en la presente Ley.

El Consejo dará amplia difusión a las convocatorias de registro de candidatos, procurando que sean conocidas oportunamente por los ciudadanos potosinos.

ARTÍCULO 307. ...

...

II. Que los partidos políticos solicitantes, hayan registrado

Queda prohibido a los candidatos independientes participar en coalición con partidos políticos.

ARTÍCULO 292. Los partidos políticos, o las coaliciones con derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, podrán registrar candidatos para cargos de elección popular. Los ciudadanos del Estado podrán ser registrados como candidatos independientes, siempre que atiendan a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes, y resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto en la presente Ley.

El Consejo dará amplia difusión a las convocatorias de registro de candidatos, procurando que sean conocidas oportunamente por los ciudadanos potosinos.

ARTÍCULO 307. ...

...

II. Que los partidos políticos solicitantes, hayan registrado candidatos a diputados de mayoría

candidatos a diputados de mayoría relativa en cuando menos diez distritos electorales, lo que se podrá acreditar con los registrados por el propio partido y los que correspondan a las alianzas partidarias, a la coalición parcial o flexible a la que, en su caso, pertenezca, y

...

ARTÍCULO 317. Los partidos políticos, las coaliciones, alianzas partidarias y los candidatos independientes, con derecho a participar en el proceso electoral, podrán solicitar se les acredite un representante propietario, y un suplente ante la mesa directiva de casilla; así como un representante general por cada cinco casillas en zonas rurales, y uno por cada diez casillas en zonas urbanas.

...

ARTÍCULO 323. Los representantes generales se sujetarán a las normas siguientes:

...

III. Comprobar la presencia de los representantes de su partido político, coalición, alianza partidaria, o candidato independiente, en las mesas

relativa en cuando menos diez distritos electorales, lo que se podrá acreditar con los registrados por el propio partido y los que correspondan a la coalición parcial o flexible a la que, en su caso, pertenezca, y

...

ARTÍCULO 317. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos independientes, con derecho a participar en el proceso electoral, podrán solicitar se les acredite un representante propietario, y un suplente ante la mesa directiva de casilla; así como un representante general por cada cinco casillas en zonas rurales, y uno por cada diez casillas en zonas urbanas.

...

ARTÍCULO 323. Los representantes generales se sujetarán a las normas siguientes:

...

III. Comprobar la presencia de los representantes de su partido político, coalición o candidato independiente, en las mesas directivas de casilla, o recibir

directivas de casilla, o recibir de ellos los informes relativos a su desempeño;

IV. No sustituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos, coaliciones, alianza partidaria, o candidatos independientes, ante las mesas directivas de casillas, sin embargo, podrán coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos ante las propias mesas directivas de casilla;

...

ARTÍCULO 324. ...

...

IV. Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación, y final de escrutinio. De no encontrarse presente el representante de un partido político, coalición, alianza partidaria o candidato independiente, deberá entregarse copia del acta en mención al representante general del mismo;

ARTÍCULO 335. En caso de cancelación o sustitución de uno o más candidatos, no habrá modificación a las boletas si éstas ya estuvieran impresas.

de ellos los informes relativos a su desempeño;

IV. No sustituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, ante las mesas directivas de casillas, sin embargo, podrán coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos ante las propias mesas directivas de casilla;

...

ARTÍCULO 324. ...

...

IV. Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación, y final de escrutinio. De no encontrarse presente el representante de un partido político, coalición o candidato independiente, deberá entregarse copia del acta en mención al representante general del mismo;

ARTÍCULO 335. En caso de cancelación o sustitución de uno o más candidatos, no habrá modificación a las boletas si éstas ya estuvieran impresas.

En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos, las coaliciones, las alianzas partidarias y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los comités municipales electorales, comisiones distritales electorales, o el Consejo.

ARTÍCULO 344. ...

...

Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición o alianza partidaria.

ARTÍCULO 348. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y alianzas partidarias y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Pleno del Consejo conforme a esta Ley.

...

ARTÍCULO 353. La propaganda impresa que los candidatos utilicen

En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los comités municipales electorales, comisiones distritales electorales, o el Consejo.

ARTÍCULO 344. ...

...

Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición.

ARTÍCULO 348. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Pleno del Consejo conforme a esta Ley.

...

ARTÍCULO 353. La propaganda impresa que los candidatos utilicen

durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político, alianza partidaria o coalición que ha registrado al candidato. En el caso de candidatos independientes, se deberá insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “candidato independiente”.

La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones, las alianzas partidarias y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7o. de la Constitución Federal, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros, y a las instituciones y valores democráticos.

ARTÍCULO 354. ...

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, las alianzas partidarias y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. El Consejo está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión o el retiro de cualquier propaganda.

durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato. En el caso de candidatos independientes, se deberá insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “candidato independiente”.

La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7o. de la Constitución Federal, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros, y a las instituciones y valores democráticos.

ARTÍCULO 354. ...

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. El Consejo está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión o el retiro de cualquier propaganda.

...

ARTÍCULO 355. Los mensajes de la propaganda que los partidos políticos, las coaliciones, las alianzas partidarias y los candidatos realicen en la vía pública, a través de grabaciones, se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones legales y administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación por ruido.

ARTÍCULO 387. El escrutinio y cómputo de la elección, se realizará conforme a las reglas siguientes:

...

VI...

Tratándose de partidos coaligados o en alianza partidaria, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición o alianza partidaria lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.

ARTÍCULO 388. Para determinar la validez o nulidad de los votos emitidos

...

ARTÍCULO 355. Los mensajes de la propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos realicen en la vía pública, a través de grabaciones, se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones legales y administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación por ruido.

ARTÍCULO 387. El escrutinio y cómputo de la elección, se realizará conforme a las reglas siguientes:

...

VI...

Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.

ARTÍCULO 388. Para determinar la validez o nulidad de los votos emitidos para efecto del cómputo a que se refiere

para efecto del cómputo a que se refiere el artículo anterior, se observarán las siguientes reglas:

...

II...

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición o alianza partidaria entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.

III. Si el elector cruza más de un emblema o recuadro de un partido político y se trata de candidatos de la coalición o alianza partidaria, se computará un solo voto en favor del candidato, fórmula o planilla específica.

ARTÍCULO 401. ...

Su objetivo será el de informar oportunamente garantizando la seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Pleno del Consejo, los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía.

ARTÍCULO 404. ...

...

el artículo anterior, se observarán las siguientes reglas:

...

II...

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.

III. Si el elector cruza más de un emblema o recuadro de un partido político y se trata de candidatos de la coalición, se computará un solo voto en favor del candidato, fórmula o planilla específica.

ARTÍCULO 401. ...

Su objetivo será el de informar oportunamente garantizando la seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Pleno del Consejo, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía.

ARTÍCULO 404. ...

...

VIII. Para el cómputo distrital de la votación para diputados, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos en alianza partidaria y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la alianza partidaria; de existir fracción los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación.

ARTÍCULO 422. ...

...

II. Para el cómputo municipal de la votación para ayuntamientos, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos en alianza partidaria y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma municipal de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la alianza partidaria; de existir fracción los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación.

VIII. (DEROGADA).

ARTÍCULO 422. ...

...

II. (DEROGADA).



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario atender al orden jurídico en nuestra normatividad electoral y armonizar y homologar nuestra Ley Electoral del Estado con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como con la Ley General de Partidos Políticos, y en este sentido proponemos Derogar la figura de Alianzas Partidarias, en los términos propuestos en la presente iniciativa, a efecto de fortalecer nuestro sistema democrático en beneficio de los potosinos.

Por lo que, con fundamento en los artículos 61, 62, 63, 64 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, los que suscriben sometemos a esta Asamblea Legislativa la presente Iniciativa.

PROYECTO

DE

DECRETO

Se modifican los Artículos 6 fracción VII, 25 primer párrafo, 28, 44 fracción I inciso e), fracción II inciso b), 134 fracción VI, 144 fracción IX, 165 fracción I, 170, 172, 173 y 189 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 6°. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

...

VII. Campaña electoral: el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto;

ARTÍCULO 25. Queda prohibido a los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, entregar a los electores, dinero, despensas, enseres domésticos, materiales para construcción y, en general, cualquier otro bien, en todo tiempo y bajo cualquier título o denominación.

Se exceptúan de la prohibición establecida en el párrafo anterior, los bienes utilitarios con propaganda impresa.

ARTÍCULO 28. Los diputados y los miembros de los ayuntamientos podrán ser reelectos.

Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Los miembros de los ayuntamientos, pueden ser electos por dos periodos consecutivos por el mismo cargo. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

ARTÍCULO 44. El Pleno del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. NORMATIVAS:

...

e) Expedir y publicar oportunamente las convocatorias para que los partidos políticos, coaliciones o ciudadanos por su propio derecho, soliciten el registro de candidaturas a Gobernador, diputados, y ayuntamientos.

...

II. EJECUTIVAS:

b) Resolver sobre los convenios de coalición que presenten los partidos políticos, dentro de los diez días siguientes a aquél en que los reciba.

ARTÍCULO 134. Son derechos de los partidos políticos:

...

VI. Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección estatal que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de la Ley General de Partidos y esta Ley;

ARTÍCULO 144. Se considera información pública de los partidos políticos:

...

IX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas estatales;

...



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

ARTÍCULO 165. Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre las campañas beneficiadas de acuerdo con lo siguiente:

1. Como gastos genéricos de campaña, se entenderá los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la que el partido o la coalición, promueva o invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña;

ARTÍCULO 170. Los partidos políticos para fines electorales pueden formar coaliciones y postular los mismos candidatos en las elecciones estatales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley.

ARTÍCULO 172. Los partidos de nuevo registro no pueden convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección local inmediata posterior a su registro según corresponda.

ARTÍCULO 173. Se presumirá la validez del convenio de coalición del acto de asociación o participación, siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en contrario.

ARTÍCULO 189. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del presente Capítulo.

Se Deroga el Capítulo VII del Título Sexto de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

Capítulo VII

De las Alianzas Partidarias

(DEROGADO)

ARTÍCULO 191. (DEROGADO).

ARTÍCULO 192. (DEROGADO).

ARTÍCULO 193. (DEROGADO).



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

ARTÍCULO 194. (DEROGADO).

ARTÍCULO 195. (DEROGADO).

Se modifican los Artículos 203 primer párrafo, 217 fracción I, 233 fracción IV, 235 fracción II, 262, 292, 307 fracción II, 317, 323 fracción III y IV, 324 fracción IV, 335, 344 quinto párrafo, 348 primer párrafo, 353, 354 segundo párrafo, 355, 387 fracción VI segundo párrafo, 388 fracción II inciso b), fracción III y 403 tercer párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 203. Si un partido político nacional perdiera su registro, pero en el ámbito estatal hubiere obtenido, sin mediar coalición, al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las últimas elecciones en que participó, y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, podrá solicitar registro como partido político estatal, siempre y cuando lo haga en un término que no exceda de treinta días a partir de la publicación de la pérdida del registro en el Diario Oficial de la Federación. La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos:

...

ARTÍCULO 217. Las agrupaciones políticas podrán participar en los procesos electorales del Estado, exclusivamente mediante convenios de participación con un partido político, o con candidatos independientes, siempre y cuando se sujeten a las siguientes bases:

I. Les queda expresamente prohibido participar con coaliciones.

...

ARTÍCULO 233. Son derechos de los aspirantes a candidatos independientes registrados, los siguientes:

...

IV. Realizar actos y propaganda en los términos permitidos a los precandidatos de partidos políticos y coaliciones, conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de esta Ley, y

...

(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2017) ARTÍCULO 235. ...

...

II. La recepción de las manifestaciones se hará ante la presencia de los funcionarios electorales que al efecto se designen, y de los representantes que, en su caso, designen los partidos políticos o coaliciones, y aquellos que los propios aspirantes decidan acreditar, sin que se requiera la comparecencia personal del ciudadano que exprese su apoyo a un determinado aspirante a candidato independiente, y

ARTÍCULO 262. Los aspirantes o candidatos independientes que incumplan con la normatividad electoral que les resulte aplicable, podrán ser sancionados en términos de lo previsto en el Título Décimo Cuarto de esta Ley.

Queda prohibido a los candidatos independientes participar en coalición con partidos políticos.

ARTÍCULO 292. Los partidos políticos, o las coaliciones con derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, podrán registrar candidatos para cargos de elección popular. Los ciudadanos del Estado podrán ser registrados como candidatos independientes, siempre que atiendan a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes, y resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto en la presente Ley.

El Consejo dará amplia difusión a las convocatorias de registro de candidatos, procurando que sean conocidas oportunamente por los ciudadanos potosinos.

ARTÍCULO 307. ...

...

II. Que los partidos políticos solicitantes, hayan registrado candidatos a diputados de mayoría relativa en cuando menos diez distritos electorales, lo que se podrá acreditar con los registrados por el propio partido y los que correspondan a la coalición parcial o flexible a la que, en su caso, pertenezca, y

...

ARTÍCULO 317. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos independientes, con derecho a participar en el proceso electoral, podrán solicitar se les acredite un representante propietario, y

un suplente ante la mesa directiva de casilla; así como un representante general por cada cinco casillas en zonas rurales, y uno por cada diez casillas en zonas urbanas.

...

ARTÍCULO 323. Los representantes generales se sujetarán a las normas siguientes:

...

III. Comprobar la presencia de los representantes de su partido político, coalición o candidato independiente, en las mesas directivas de casilla, o recibir de ellos los informes relativos a su desempeño;

IV. No sustituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, ante las mesas directivas de casillas, sin embargo, podrán coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos ante las propias mesas directivas de casilla;

...

ARTÍCULO 324. ...

...

IV. Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación, y final de escrutinio. De no encontrarse presente el representante de un partido político, coalición o candidato independiente, deberá entregarse copia del acta en mención al representante general del mismo;

ARTÍCULO 335. En caso de cancelación o sustitución de uno o más candidatos, no habrá modificación a las boletas si éstas ya estuvieran impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los comités municipales electorales, comisiones distritales electorales, o el Consejo.

ARTÍCULO 344. ...

...

Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

ARTÍCULO 348. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Pleno del Consejo conforme a esta Ley.

...

ARTÍCULO 353. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato. En el caso de candidatos independientes, se deberá insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “candidato independiente”.

La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7o. de la Constitución Federal, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros, y a las instituciones y valores democráticos.

ARTÍCULO 354. ...

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. El Consejo está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión o el retiro de cualquier propaganda.

...

ARTÍCULO 355. Los mensajes de la propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos realicen en la vía pública, a través de grabaciones, se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones legales y administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación por ruido.

ARTÍCULO 387. El escrutinio y cómputo de la elección, se realizará conforme a las reglas siguientes:

...

VI...



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.

ARTÍCULO 388. Para determinar la validez o nulidad de los votos emitidos para efecto del cómputo a que se refiere el artículo anterior, se observarán las siguientes reglas:

...

II...

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.

III. Si el elector cruza más de un emblema o recuadro de un partido político y se trata de candidatos de la coalición, se computará un solo voto en favor del candidato, fórmula o planilla específica.

ARTÍCULO 401. ...

Su objetivo será el de informar oportunamente garantizando la seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Pleno del Consejo, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía.

Se deroga la fracción VIII del Artículo 404 y fracción II del Artículo 422 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 404. ...

...

VIII. (DEROGADA).

ARTÍCULO 422. ...

...

II. (DEROGADA).



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

Secretaria: iniciativa, que insta reformar los artículos, 6° en su fracción VII, 25 en su párrafo primero, 28, 44 en sus fracciones, I el inciso e), y II el inciso b), 134 en su fracción VI, 144 en su fracción IX, 165 en su fracción I, 170, 172, 173, 189, 203 en su párrafo primero, 217 en su fracción I, 233 en su fracción IV, 235 en su fracción II, 262 en su párrafo segundo, 292 en su párrafo primero, 307 en su fracción II, 317 en su párrafo primero, 323 en sus fracciones, III y IV, 324 en su fracción IV, 335, 344 en su párrafo quinto, 348 en su párrafo primero, 353, 354 en su párrafo segundo, 355, 387 en su párrafo penúltimo, 388 en sus fracciones, II el inciso b), y III, y 401 en su párrafo tercero; y derogar, del Título Sexto el capítulo VII con sus artículos, 191 a 195, y de los artículos, 404 la fracción VIII, y 422 la fracción II de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; legisladores, José Luis Fernández Martínez, Eloy Franklin Sarabia, Dolores Eliza García Román, Martha Patricia Aradillas Aradillas, Roberto Ulises Mendoza Padrón, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Salvador Isais Rodríguez, Cinthia Verónica Segovia Colunga, y René Oyarvide Ibarra, 23 de marzo del año en curso, recibida el 25 del mismo mes y año.

Presidenta: se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales; con copia a la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Estado de San Luis Potosí

El legislador René Oyarvide Ibarra impulsa la novena iniciativa.

NOVENA INICIATIVA

DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

P R E S E N T E.

DIP. JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ, DIP. ELOY FRANKLIN SARABIA, DIP. DOLORES ELIZA GARCÍA ROMÁN, DIP. MARTHA PATRICIA ARADILLAS ARADILLAS, DIP. ROBERTO



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

ULISES MENDOZA PADRÓN, DIP. NADIA ESMERALDA OCHOA, DIP. EDGAR ALEJANDRO ANAYA ESCOBEDO, DIP. SALVADOR ISAÍIS RODRÍGUEZ, DIP. CINTHIA VERÓNICA SEGOVIA COLUNGA, DIP. RENÉ OYARVIDE IBARRA, Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la atribución que nos confieren los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, elevamos a la consideración de esta representación de la Soberanía del pueblo potosino, la presente Iniciativa que insta a reformar la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, propuesta que planteamos al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2º, como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en su artículo 9º reconocen ampliamente los derechos humanos y políticos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística del País y del Estado.

Dentro de los derechos tutelados por las normas Constitucionales, se encuentran el respeto a la identidad indígena y la conciencia de la misma, la libre autodeterminación de sus pueblos y la promoción en la igualdad de oportunidades. Todo ello, en el marco de la Convencionalidad de la que ha participado el Estado Mexicano.

Como ejemplo de ello, podemos citar el Artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que señala el derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre Pueblos indígenas y tribales, que es el documento internacional más relevante sobre derechos de los pueblos indígenas, nos refiere la importancia de la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones en los temas que los involucra.

Es importante enfatizar que la conciencia de su identidad indígena constituye el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Sin embargo, la realidad ha demostrado que para obtener una postulación para un cargo de elección popular, se ha recurrido a la simulación en perjuicio de las personas que sí pertenecen a los pueblos indígenas. Por



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

lo que es imperante fijar reglas claras y concretas que garanticen la plena y auténtica participación política de los pueblos y comunidades indígenas.

En razón de lo anterior, y con la finalidad de brindar certeza y seguridad jurídica, así como para contrarrestar la simulación es necesario establecer la autoadscripción calificada, entendida como la forma de acreditación de la calidad de persona indígena con el vínculo de la comunidad del distrito electoral por el que se postula el candidato o candidata. Es decir, como un mecanismo de garantía para la representación política indígena. Esto deberá atenderse bajo el criterio de perspectiva intercultural, de tal modo que resulte más favorable a los integrantes de pueblos indígenas.

La sociedad potosina demanda la creación de mecanismos legales que garanticen la participación y la representación política de las personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas. Esto, en razón de que el estado de San Luis Potosí cuenta con una considerable población que se autoadscribe como indígena. De conformidad con la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, se estima que en el Estado de San Luis Potosí el 23.2% de la población se autoadscribe indígena y recientemente el Censo de Población y Vivienda 2020 indica una población de 231,213 personas mayores de 3 años que hablan alguna lengua indígena. De acuerdo con los datos que publica, los distritos electorales uninominales locales con mayor concentración de población indígena se encuentra en los distritos 13 con cabecera distrital en el municipio de Tamuín, 14 con cabecera distrital en el municipio de Tancanhuitz, y 15 con cabecera distrital en el municipio de Tamazunchale del Estado de San Luis Potosí, por lo que consideramos que se debe establecer un marco jurídico con disposiciones legales que favorezcan su participación política y su efectiva y plena representación en el órgano legislativo local.

En consecuencia, esta iniciativa propone que precisamente en los distritos con mayor concentración de población indígena, los Partidos Políticos y Coaliciones, en cualquiera de los distritos electorales uninominales 13,14 ó 15 del Estado de San Luis Potosí, deberán de postular en por lo menos uno de esos distritos, una fórmula de candidatos o candidatas a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa, conformada por propietario y suplente, integrada exclusivamente por personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, observando además el principio de paridad de género.

Asimismo, y a efecto de dar eficacia a esta representación pluricultural y combatir la subrepresentación indígena en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, es que mediante esta iniciativa proponemos que los Partidos Políticos y Coaliciones, deberán postular como candidatos



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

o candidatas a por lo menos una fórmula conformada por propietario y suplente, integrada por personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas bajo el principio de representación proporcional e incluirla dentro de los primeros seis lugares de la lista que para tal efecto se registre, observando además el principio de paridad de género.

Atendiendo al principio de progresividad, tales disposiciones no son de carácter limitativo, por lo que, incluso los partidos políticos y coaliciones podrán postular más candidatos o candidatas aún en distritos electorales no indígenas.

Tomando como base el criterio establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis XLI/2015, podemos destacar en primer lugar, que el Estado debe promover la democracia participativa indígena, entendiéndose ésta como la obligación de adoptar políticas públicas y acciones de gobierno para promover el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos de los indígenas, entre los que destacan el derecho a la participación política; y en segundo lugar, que corresponde a los partidos políticos, como entes encargados de hacer posible el acceso a los ciudadanos al poder público, promover la participación de los indígenas en observancia de las disposiciones constitucionales y convencionales que los protegen.

Por todo lo anteriormente expuesto, y a efecto de dar plena y efectiva participación y representación política a las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas se pone a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa en los términos propuestos.

Por lo que, con fundamento en los artículos 61, 62, 63, 64 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, los que suscriben sometemos a esta Asamblea Legislativa la presente Iniciativa.

PROYECTO

DE

DECRETO

ÚNICO: Se ADICIONA la creación del Artículo 292 BIS en la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

ARTÍCULO 292 BIS: Los partidos políticos o coaliciones con derecho a participar en las elecciones estatales, deberán registrar en cualquiera de los distritos electorales uninominales 13, 14 o 15 del Estado de San Luis Potosí, cuando menos una fórmula de candidatos o candidatas indígenas para el cargo de diputados de mayoría relativa conformada por propietario y suplente, observando además el principio de paridad de género.

Asimismo, los Partidos Políticos y Coaliciones, deberán postular al menos una fórmula de candidatos o candidatas de personas indígenas conformada por propietario y suplente, bajo el principio de representación proporcional e incluirla dentro de los primeros seis lugares de la lista que para tal efecto se registre ante el Consejo, observando además el principio de paridad de género.

Estas disposiciones no son limitativas, por lo que además de las candidaturas indígenas establecidas en los párrafos precedentes, los partidos políticos o coaliciones podrán postular a candidatos o candidatas indígenas en cualquiera de los demás distritos electorales.

El Consejo dará amplia difusión a las convocatorias de registro de candidatos, procurando que sean conocidas oportunamente por los ciudadanos potosinos. Asimismo, se encargará de vigilar el cumplimiento de la autoadscripción calificada para el registro de los candidatos o candidatas indígenas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto.

René Oyarvide Ibarra: gracias, con su venia Presidenta, de nueva cuenta muy buenos días a todas y a todos, hoy subimos a Tribuna a presentar esta reforma de ley electoral, que hemos presentado en conjunto por parte del Partido Verde y el Partido del Trabajo, y está dará justicia e Igualdad a nuestros hermanos de los pueblos indígenas, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2º, así como la de nuestro Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en su numeral 9º, reconocen ampliamente los derechos humanos y políticos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la composición pluétnica, pluricultural y multilingüística del país y del estado, dentro de los derechos tutelados por las normas constitucionales antes referidas, se



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

encuentra el respeto a la identidad indígena y la conciencia de la misma, la libre autodeterminación de sus pueblos y la promoción de igualdad de oportunidades, todo ello en un marco de convencionalidad de la que ha participado el estado mexicano, podemos citar como por ejemplo, artículo 1º la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, que señala el derecho de disfrute de este pleno de todos los derechos humanos y libertades, libertades fundamentales, hídole, la realidad es que se ha demostrado que para obtener una postulación para un cargo de elección popular, se ha recurrido a una simulación en perjuicio de las personas que sí pertenecen a los pueblos indígenas; por lo, que es imperante fijar reglas claras y concretas que garanticen la plena y la auténtica participación política de los pueblos, y de quien verdaderamente represente las comunidades indígenas; llevando a cabo la creación de mecanismos legales que garanticen la participación y la representación política de las personas que pertenezcan a estos pueblos.

Esto, en razón de que San Luis Potosí cuenta con una considerable población que se auto describe como indígena, de conformidad con la encuesta intercensal 2015, elaborada por el INEGI, estima que en el estado de San Luis Potosí el 23.2% de la población que se auto describe indígena, y recientemente el Censo de Población y Vivienda 2020, indica que una población de 231,213 personas en el estado de San Luis Potosí, mayores a 3 años, hablan una lengua indígena, de acuerdo con los datos que se publican los distritos electorales uninominales locales con mayor concentración de la población indígena se encuentran en los distritos XIII, con cabecera distrital en el municipio de Tamuín, XIV con cabecera distrital en el municipio de Tancanhuitz, y XV con cabecera distrital en el municipio de Tamazunchale en el Estado de San Luis Potosí; por lo que, consideramos que debe establecerse un marco jurídico con mejores discusiones legales, que favorezcan la participación política y obviamente la representación en el órgano legislativo local; en consecuencia, esta iniciativa propone que precisamente en estos distritos con mayor concentración de población indígena, los partidos políticos y coaliciones en cualquiera de los distritos electorales uninominales, XIII, XIV y XV del Estado de San Luis Potosí, deberán postular en lo menos por uno de sus distritos, una fórmula de candidatos o candidatas de diputados locales por el principio de mayoría relativa, conformada por el propietario y suplente, integrado exclusivamente por personas pertenecientes a sus pueblos y a sus comunidades indígenas, observando además, obviamente, el principio de paridad de género.

Asimismo y a efecto de dar eficacia a esta representación pluricultural y combatir la sub representación indígena del Congreso del Estado de San Luis Potosí, es que mediante esta iniciativa



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

que proponemos, los partidos políticos y coaliciones deberán postular como candidatos o candidatas, por lo menos una fórmula conformada por un propietario y suplente, integrada por personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, bajo el principio de representación proporcional, e incluirlos dentro de los primeros seis lugares de la lista, para que bajo ese efecto se registre observando además el principio de paridad de género; por lo tanto, a efecto de dar plena y efectiva participación y representación política a las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.

Es por ello que se pone a consideración de esta Soberanía, y siendo algo que realmente le viene hacer justicia a nuestros pueblos indígenas, que siempre han estado en el olvido, que nunca han tenido voz, creo que el Congreso del Estado debe de tener más gente de nuestros pueblos, que realmente vengan y que transmitan lo que ellos recolectan de las necesidades en todas y cada una de sus comunidades, porque no hay de otra manera, que ir, sentir, caminar y ver las necesidades, y quién mejor que ellos, que nos vengan y que nos digan aquí en el Congreso, cuáles son, y claro se propongan leyes que mejoren la vida y la condición de las y los indígenas en el estado de San Luis Potosí; muchísimas gracias, es cuanto Presidenta.

Presidenta: se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales; con copia a la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Interviene la legisladora Bernarda Reyes Hernández: solicitó el uso de la voz, si me lo permiten los promover, adherirme en especial y en particular a esta reforma, gracias.

Presidenta: incorpórese en el acta y en el registro la adhesión.

Primera Secretaria lea la décima iniciativa.

DÉCIMA INICIATIVA

DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

P R E S E N T E.

DIP. JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ, DIP. ELOY FRANKLIN SARABIA, DIP. DOLORES ELIZA GARCÍA ROMÁN, DIP. MARTHA PATRICIA ARADILLAS ARADILLAS, DIP. ROBERTO



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

ULISES MENDOZA PADRÓN, DIP. NADIA ESMERALDA OCHOA, DIP. EDGAR ALEJANDRO ANAYA ESCOBEDO, DIP. SALVADOR ISAÍS RODRÍGUEZ, DIP. CINTHIA VERÓNICA SEGOVIA COLUNGA, DIP. RENÉ OYARVIDE IBARRA, Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la atribución que nos confieren los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, elevamos a la consideración de esta representación de la Soberanía del pueblo potosino, la presente Iniciativa que insta a reformar la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, propuesta que planteamos al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 116 fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.

La anterior disposición Constitucional, remite a la legislación local, para la regulación de la forma y procedimientos relativos a la elección de Diputados de mayoría y a la asignación de Diputados de representación proporcional, lo cual está contenido en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Para mayor precisión, el artículo 45 de nuestra Constitución Local establece que: “Sólo serán asignados Diputados por el sistema de representación proporcional a los partidos políticos que cumplan con los requisitos que señale la Ley Electoral”.

A su vez, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, regula en su artículo 413 y demás relativos, la forma de asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, y específicamente en el artículo 413 fracción I, establece que: “Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido”.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

De esta última disposición, podemos advertir el umbral mínimo requerido para que los partidos políticos puedan participar en la asignación de diputaciones de representación proporcional, que actualmente es el tres por ciento de la votación válida emitida, porcentaje que debe aumentarse con el propósito de que los votos totales de los partidos políticos se traduzca en una representación equivalente.

Al respecto, podemos entender que los Diputados plurinominales se asignan como una proporción entre el número de votos obtenidos por cada partido y el número de sus Diputados elegidos. De tal modo que, sin duda, el voto es la conexión directa entre la representación proporcional y la ciudadanía.

La representación proporcional garantiza el pluralismo político, pero debe establecerse en condiciones de mayor equidad y aproximadas en la mayor medida posible a los porcentajes de votación de cada partido político en una elección.

El Congreso del Estado, es una institución de gran relevancia en la vida pública de los potosinos, por ello, resulta necesario generar mejores condiciones en la distribución de las representaciones políticas. Esto contribuirá a que la toma de decisiones, se desarrolle dentro de un marco de consensos, donde las minorías estén representadas en la misma proporción a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

Retomando, lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución del Estado, el Congreso del Estado, se integra con quince diputaciones electas por mayoría relativa y hasta doce diputaciones electas según el principio de representación proporcional. Y con base en ello, proponemos aumentar el umbral mínimo requerido para la asignación de Diputaciones por el principio de representación proporcional pasando al cuatro por ciento de la votación válida emitida.

Por lo anterior y para efectos de ilustrar el contenido de la iniciativa propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
---------------	-----------------

ARTÍCULO 413. Para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se atenderá a lo siguiente:

1. Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido, y

...

...

ARTÍCULO 413. Para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se atenderá a lo siguiente:

1. Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el **cuatro por ciento** de la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido, y

...

...

Por todo lo anterior expuesto, se concluye necesario aumentar el umbral mínimo requerido para la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, en los términos propuestos en la presente iniciativa.

Por lo que, con fundamento en los artículos 61, 62, 63, 64 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, los que suscriben sometemos a esta Asamblea Legislativa la presente Iniciativa.

PROYECTO

DE

DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA la fracción 1 del Artículo 413 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

ARTÍCULO 413. Para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se atenderá a lo siguiente:

1. Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el cuatro por ciento de la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido, y

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto.

Secretaria: iniciativa, que impulsa reformar el artículo 413 en su fracción 1 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; legisladores, José Luis Fernández Martínez, Eloy Franklin Sarabia, Dolores Eliza García Román, Martha Patricia Aradillas Aradillas, Roberto Ulises Mendoza Padrón, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Salvador Isais Rodríguez, Cinthia Verónica Segovia Colunga, y René Oyarvide Ibarra, 23 de marzo del año en curso, recibida el 25 del mismo mes y año.

Presidenta: se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales; con copia a la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Estado de San Luis Potosí.

La palabra para la décima primera iniciativa a la legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón.

DÉCIMA PRIMERA INICIATIVA

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

P R E S E N T E

NADIA ESMERALDA OCHOA LIMÓN, Diputada Local de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la atribución que me confieren



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, elevo a la consideración de esta representación de la Soberanía del Pueblo Potosino, la presente iniciativa para **reformular el primer párrafo al artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí**, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Derivado a lo que se estableció en el Sistema Estatal Anticorrupción y la publicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, se toma específicamente como uno de los órganos constitucionales autónomos, a las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer su buen funcionamiento del control interno, con la finalidad de prevenir, detectar y abatir lo actos de corrupción de los servidores públicos.

Es así que es necesario se modifique el artículo 41 en su párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, para que se tenga la correcta denominación que debería de ser **Órgano Interno de Control** y no **Contraloría Interna**. En la actual Ley en los artículos 38, 39 y 40 de la Ley en cita, ya se encuentra la denominación de Órgano Interno de Control, por lo que esto se presta a confusiones dentro de la misma Ley, con esta iniciativa se busca se eviten desconciertos dentro de la Ley al momento de su aplicación.

En resumen, la modificación propuesta plantea los alcances que se ilustran en el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	
Texto vigente	Propuesta de reforma
ARTÍCULO 41. En la designación la persona titular de la Contraloría Interna, el Congreso del Estado se sujetará a lo siguiente: 1 a V (...)	ARTÍCULO 41. En la elección de la persona titular del Órgano Interno de Control , el Congreso del Estado se sujetará a lo siguiente: 1 a V (...)



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

En mérito de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la honorable asamblea, el presente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Reformar el primer párrafo al artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 41. En la elección de la persona titular del Órgano Interno de Control, el Congreso del Estado se sujetará a lo siguiente:

I a V. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, "Plan de San Luis".

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nadia Esmeralda Ochoa Limón: con su venia diputada Presidenta, muy buenos días a todas y todos los presentes que nos acompañan el día de hoy, y a todos aquellos que también nos acompañan desde sus casas por redes sociales, el control interno es un instrumento de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que tiene entre sus objetivos el uso eficaz de los recursos públicos del estado, en donde el principal objetivo es mejorar la eficiencia en la capacitación, optimizar la información y comunicación sobre los recursos y operaciones institucionales, así como mejorar los procedimientos para la oportuna rendición de cuentas sobre los resultados de la gestión, debemos entender que el control interno que opera en todos los organismos gubernamentales contribuye a asegurar el logro de sus metas y objetivos en beneficio de toda la ciudadanía, al dejar las cuentas claras para demostrar que los ingresos corresponden al trabajo realizado y demostrando esto ante la población en general, recordemos que la rendición de cuentas es una obligación para nosotros los funcionarios, pero es un derecho para todos los ciudadanos, como Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y como funcionaria, me es de mucho interés impulsar estos elementos para combatir la corrupción, favoreciendo el desarrollo y mejora de la gestión interinstitucional.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

En la iniciativa que hoy presento ante ustedes compañeras y compañeros legisladores, realizó una precisión que como todos saben son imprescindibles para realizar nuestra labor legislativa a la hora de tomar decisiones; es por ello, que para evitar confusiones es necesario se modifique el artículo número 41 en su párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, para que se tenga la correcta denominación que debería de ser Órgano Interno de Control y no Contraloría Interna, es preciso mencionar que las leyes evolucionan constantemente, tanto en denominaciones como en las normas que se establecen dentro de las mismas, y una de las labores que tenemos desde el legislativo es mantener actualizadas en todo momento las normas que nos rigen, así como las herramientas de las cuales nos apoyamos día a día, por su atención muchas gracias, es cuanto Presidenta.

Presidenta: se turna a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La voz para la décima segunda iniciativa al legislador Edmundo Azael Torrescano Medina.

DÉCIMA SEGUNDA INICIATIVA

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA DIRECTIVA DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

P R E S E N T E S.

DIP. EDMUNDO AZAEL TORRESCANO MEDINA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de las facultades que me concede la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en su numeral 61; la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, en sus artículos 130; y en apego a lo establecido en los artículos 131 de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62, y 65, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, **Iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se propone adicionar la fracción XLV del artículo 6, adicionar párrafo segundo del artículo 13, reformar el artículo 244 y adicionar párrafo segundo del artículo 299 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, conforme a la siguiente:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

La reforma político electoral es un proceso de constante debate y discusión en nuestro país; representa la máxima expresión de las ideas políticas y sociales de aquellos que están en la búsqueda de la reivindicación de nuestro sistema de organización político; es la búsqueda de espacios que permitan una correcta aplicación de un sistema de contrapesos como lo es el mexicano; dicho de otra manera, esta reforma, permite garantizar que la totalidad de los sujetos involucrados en la vida política de nuestro país, tengan la posibilidad de plasmar sus ideas y el sentir de aquel grupo de ciudadanos que representan y que han depositado su confianza en ellos.

Visto desde el ámbito político, se puede definir como el proceso de identificación del territorio en función de la estructura, y la relación de poder que existe entre los diversos actores, así como la serie de elementos que compone un determinado espacio geográfico, el cual adquiere determinadas particularidades en torno a la constante y sistemática interacción entre los partidos políticos, las instituciones de gobierno, los ciudadanos de nuestro Estado, los grupos en búsqueda de su identidad, cultura política, la participación ciudadana, la historia y desarrollo político. Por lo que resulta fundamental generar las normas generales y propiciar las condiciones necesarias para un correcto desarrollo de un proceso electoral, que garantice a las y los potosinos, la seguridad y protección de su voto.

Las reformas electorales representan la constante actualización de las normas que rigen la elección de nuestros representantes en el gobierno, es la apertura democrática que exige la ciudadanía y que permitirá el pleno desarrollo de un estado de derecho, que parte de la idea de que los gobernantes verdaderamente representen las voces ciudadanas, por ello la inminente necesidad de llevar a cabo modificaciones tendientes a perfeccionar nuestras normas electorales, por ello la labor legislativa resulta de gran trascendencia para definir el rumbo y el futuro de nuestra Entidad, es decir, representa la gran oportunidad de dignificar tan importante labor.

De acuerdo con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), México es una nación que “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”. De este reconocimiento jurídico se desprenden una serie de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas de México, que son fundamentales para el modelo del Estado de derecho pluricultural que perfila la Carta Magna. El núcleo del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas está en el artículo 2º de la CPEUM.

Reconocernos pluriculturales representa un enorme paso adelante. Sin embargo, la pluriculturalidad —o multiculturalidad, que utilizamos como sinónimo— es un concepto descriptivo que se refiere a la

coexistencia de diferentes culturas en un determinado territorio. Una sociedad como la nuestra, que aspira a ser democrática y que es multicultural, tiene que transitar a la interculturalidad. La pluriculturalidad, como concepto, no se refiere a la relación entre los miembros de las diferentes culturas.

La interculturalidad, en cambio, sí indica la interrelación entre grupos y personas con culturas distintas; de hecho, califica esa relación. Supone que está fundamentada en el respeto –lo que implica que acepta que el otro distinto puede ser diferente y crecer desde su diferencia–, y que la relación entre grupos y personas con culturas distintas se da desde planos de igualdad, lo que a su vez involucra la aceptación de que todas las culturas, como todas las personas, son igualmente dignas y valiosas. La interculturalidad no admite asimetrías de ningún tipo –económicas, políticas, sociales, culturales, educativas.

Existen otros instrumentos internacionales que reconocen el principio de la diversidad cultural, que enuncian medidas para su conservación y desarrollo, que prohíben y buscan erradicar la discriminación hacia los sujetos y las colectividades portadoras de una identidad indígena.

Entre ellos, se encuentra la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. Así como las recomendaciones que se desprenden de los informes de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

De conformidad con los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2015, que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas elaboró con base en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la población nacional total de nuestro país que es de 119 530,753 personas, 25 694,928 se autoadscriben como personas indígenas, lo que representa el 21.5% de la población total, teniendo que de ese porcentaje de personas indígenas el 51.3% son mujeres y el 48.7% son hombres. Este es el instrumento, empleado por el Instituto Nacional Electoral en la determinación de la base poblacional indígena de México, para la emisión de disposiciones en torno a la postulación de candidaturas de personas indígenas, a partir de la emisión del acuerdo INE/CG508/2017, en el que se reconoce a la autoadscripción, como el elemento de identificación de las personas indígenas.

La presencia de población indígena en San Luis Potosí es significativa. Para el año 2015 el 23.2% de la población total de la entidad se auto reconocía indígena y en buen grado, su lengua materna

es distinta al español. Es decir, de cada 100 potosinos, 23.2 se reconocen como indígenas (Encuesta Intercensal, INEGI, 2015).

Esta cifra es significativa, en cuanto a su proximidad con la media nacional correspondiente al 21.5% de población autoadscrita como indígena, de acuerdo con el mismo instrumento estadístico.

El artículo 9º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí señala que: “El Estado de San Luis Potosí tiene una composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Reconoce la existencia histórica y vigente en su territorio de los pueblos Nahuas, Teének o Huastecos, y Xi’oi o Pames, así como la presencia regular de los Wirrarika o Huicholes”.

De la **autoadcripción**. Con la inclusión de los derechos indígenas a nivel constitucional. Se vuelve necesario verificar qué personas reúnen la calidad de indígenas; el concepto de identidad puede indicarnos qué elementos dan la pauta para identificarlas, y entender los medios que dichas personas tienen para reconocerse como miembro de un pueblo originario y de esta manera ser susceptible de los derechos consagrados en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 9º, segundo párrafo, fracción IV de su Constitución Política dispone que, asegurando la unidad de la Nación, la ley establecerá los derechos y obligaciones de los pueblos indígenas del estado conforme a las bases siguientes:

“La conciencia de su identidad étnica deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos y comunidades indígenas. Las propias comunidades coadyugarán en última instancia a este reconocimiento”

Puede colegirse de la anterior disposición constitucional, que la autoadcripción de las personas indígenas, para efectos de gozar de los derechos consagrados a favor de los pueblos y comunidades en el estado, será en última instancia reconocida por la propia comunidad de pertenencia.

Adicionalmente a lo antes señalado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-726/2017 antes citado, determinó en el tema de autoadcripción.

Auto adscripción calificada: deberán demostrar el vínculo de la persona postulada con la comunidad indígena a la que pertenece, y podrá acreditar la pertenencia con cualquiera de los siguientes documentos:

1. Constancias expedidas por las autoridades comunales existentes en la comunidad o población indígena, como pueden ser las autoridades elegidas de conformidad con las disposiciones de sus sistemas normativos internos, la asamblea general comunitaria o cualquier otra con representación conforme al sistema normativo vigente en la comunidad, donde podrá acreditar:

- a) Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñados cargos tradicionales en la comunidad, población o distrito por el que pretenda ser postulado;
- b) Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos que se presentaran en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito indígena por el que se pretendiera ser postulado;
- c) Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tuviera como finalidad mejorar o conservar sus instituciones;
- d) Otra cualquier otro que acredite el vínculo con la comunidad.

Adicionalmente a lo anterior, la Sala Superior ha establecido precedentes respecto a la adscripción calificada, así como los elementos mínimos para tener como acreditada una Asamblea comunitaria en los expedientes SUP-REC-28/2019, SUP-REC-876/2018, ST-JRC- 65/2018, ST-JDC-23/2017, ST-JDC-02/2017, SUP-RAP-726/2017, y SUP-RAP-71/2016, que son ilustrativos respecto a las formas en los que las deberá cumplirse dicho requisito.

En el año 2021, el Consejo Estatal Electora y de Participación Ciudadana (CEEPAC) estableció y propuso una serie de lineamientos que contemplaban acciones afirmativas para asegurar que en los distritos en donde hubiera población mayoritariamente indígena; se contemplará a personas indígenas para que participaran de los puestos de elección popular, para asegurar una pluralidad en la integración del H. Congreso del Estado.

Si bien, estos lineamientos representan un gran avance en la materia, es necesario replantearlos, aplicando el criterio de la interculturalidad. Ya que, al no hacerlo, se dejan a un lado a las personas que no forman parte de las comunidades indígenas y que quieren participar en los cargos de elección popular.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Por tal motivo, la presente iniciativa busca cambiar estos lineamientos con el fin de crear y establecer mecanismos que fomenten verdaderas acciones afirmativas, para promover, respetar y garantizar los derechos político electorales de las y los ciudadanos que tengan interés en participar en las próximas elecciones.

Así mismo, se insta replantear la normativa bajo consideraciones tendientes a garantizar con la mayor amplitud inclusiva, plural y con perspectiva de derechos humanos, la conformación en la representación de los Distritales Electorales, mediante el principio de paridad de género, la interculturalidad y la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas del Estado; a través de su participación activa en los procesos electorales.

Finalmente, cabe destacar que, la presente adecuación es una respuesta a las demandas ciudadanas, ya que, a través del proceso transformador es posible llegar a establecer los mecanismos para una competencia leal y equitativa, que más tarde incida en una participación política de coexistencia y pluralidad, buscando eliminar en todo momento la discriminación, la desigualdad, y así combatir las deficiencias del poder público, y garantizar el avance democrático de nuestro Estado.

“Democracia e interculturalidad son indispensables para la gobernabilidad, pero sobre todo por la necesidad de construir un mundo mejor para las futuras generaciones”.

Para mayor claridad se expone la reforma propuesta en el siguiente cuadro comparativo:

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
ARTÍCULO 6. (...) 1 a XLIV ...	ARTÍCULO 6. (...) 1 a XLIV ... XLV. Distritos Interculturales: la demarcación distrital que contempla una población mayoritariamente indígena y a su vez, cuenta con presencia de personas de diferente cultura.

Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

<p>ARTÍCULO 13. (...)</p> <p>Por cada año de elección se intercalará la postulación de las y los candidatos a diputados de mayoría relativa</p>	<p>ARTÍCULO 13. (...)</p> <p>Para la elección de las y los diputados de mayoría relativa, en los distritos interculturales, se aplicará el criterio de interculturalidad, atendiendo el siguiente mecanismo de participación:</p>
<p>...</p> <p>...</p> <p>ARTÍCULO 244. En la integración de fórmulas de candidatos a diputados, así como de planillas de mayoría relativa, y listas de</p>	<p>Los partidos políticos, deberán postular como candidatos propietarios y suplentes, a personas indígenas con adscripción calificada de manera intercalada por cada proceso electoral.</p> <p>Se requiere que la persona acredite su calidad de indígena, mediante la demostración del vínculo con la comunidad a la que pertenece, siguiendo los lineamientos de adscripción calificada que el Consejo haya establecido para dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>ARTÍCULO 244. En la integración de fórmulas de candidatos a diputados, así como de planillas de mayoría relativa, y listas de representación proporcional para</p>

Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

<p>representación proporcional para los ayuntamientos, los candidatos independientes deberán atender a lo dispuesto en el artículo 293 de esta Ley, relativos al principio de paridad de género en el registro de candidatos a diputados, y ayuntamientos, así como lo relativo a la inclusión de miembros de comunidades indígenas por lo que hace a los ayuntamientos, en términos del artículo 297</p>	<p>los ayuntamientos, los candidatos independientes deberán atender a lo dispuesto en el artículo 293 de esta Ley, relativos al principio de paridad de género en el registro de candidatos a diputados, y ayuntamientos, así como lo relativo a la inclusión de miembros de comunidades indígenas por lo que hace a los ayuntamientos, en términos de los artículos 297 y 299 de esta ley.</p>
<p>ARTÍCULO 299. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa, y por el principio de representación proporcional, serán consideradas fórmulas y candidatos separadamente, salvo para efectos de la votación, en la que ambas estarán incluidas en una sola boleta electoral.</p>	<p>ARTÍCULO 299. Las candidaturas a diputadas y diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa, y por el principio de representación proporcional, serán consideradas fórmulas y candidatos separadamente, salvo para efectos de la votación, en la que ambas estarán incluidas en una sola boleta electoral.</p> <p>Para la elección de las y los diputados de mayoría relativa, se aplicará el criterio de interculturalidad, establecido en el artículo 13 de la presente Ley.</p>



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Con base en lo señalado en los párrafos que anteceden, solicito a este H. Cuerpo Colegiado, tenga a bien dictar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, misma que se precisa de forma puntual de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO.

PRIMERO. Se adiciona la fracción XLV del artículo 6, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Conforme a lo anterior, se propone que el artículo discutido quede conformado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6. (...)

I a XLIV ...

XLV. Distritos Interculturales: la demarcación distrital que contempla una población mayoritariamente indígena y a su vez, cuenta con presencia de personas de diferente cultura.

SEGUNDO. Se adiciona párrafo segundo del artículo 13, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Conforme a lo anterior, se propone que el artículo discutido quede conformado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 13. (...)

Para la elección de las y los diputados de mayoría relativa, en los distritos interculturales, se aplicará el criterio de interculturalidad, atendiendo el siguiente mecanismo de participación:

Los partidos políticos, deberán postular como candidatos propietarios y suplentes, a personas indígenas con adscripción calificada de manera intercalada por cada proceso electoral.

Se requiere que la persona acredite su calidad de indígena, mediante la demostración del vínculo con la comunidad a la que pertenece, siguiendo los lineamientos de adscripción calificada que el Consejo haya establecido para dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica.

...



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

...

TERCERO. Se reforma el artículo 244 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Conforme a lo anterior, se propone que el artículo discutido quede conformado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 244. En la integración de fórmulas de candidatos a diputados, así como de planillas de mayoría relativa, y listas de representación proporcional para los ayuntamientos, los candidatos independientes deberán atender a lo dispuesto en el artículo 293 de esta Ley, relativos al principio de paridad de género en el registro de candidatos a diputados, y ayuntamientos, así como lo relativo a la inclusión de miembros de comunidades indígenas por lo que hace a los ayuntamientos, en términos de los artículos 297 y 299 de esta ley.

CUARTO. Se adiciona párrafo segundo del artículo 299 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Conforme a lo anterior, se propone que el artículo discutido quede conformado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 299. Las candidaturas a diputadas y diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa, y por el principio de representación proporcional, serán consideradas fórmulas y candidatos separadamente, salvo para efectos de la votación, en la que ambas estarán incluidas en una sola boleta electoral.

Para la elección de las y los diputados de mayoría relativa, se aplicará el criterio de interculturalidad, establecido en el artículo 13 de la presente Ley.

TRANSITORIOS

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis Potosí".

Segundo. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Edmundo Azael Torrescano Medina: con permiso de la Presidencia, nada más para presentar esta iniciativa, que tengo que reconocer que fue idea de la diputada Bernarda, que es la creación de los distritos interculturales, cada proceso electoral los distritos van cambiando de números, puede ser que probablemente los distritos XV, vaya a ser el día de mañana el distrito X o tengan un número, cuál es la idea de esta propuesta, que los tres distritos donde tenemos predominancia indígena los podemos definir como distritos intercultural, y que de manera cada vez que tengamos un proceso electoral; por ejemplo en 2024, de estos tres distritos indígenas, sea obligatorio postular en dos, y en 2027 se postulara en uno y con esto se estén intercalado, con ello vamos a garantizar que el próximo Congreso local de aprobarse esta iniciativa va a tener por lo menos la representación de dos personas indígenas en este Congreso, en 2027 por lo menos sería una, pero no sería limitante que los otros dos distritos también se postulará alguna persona indígena, creo que las acciones afirmativas tenemos que verlas como una oportunidad y no, vamos a decirlo, como uno una obligación que genere la desprotección de otros grupos, entender que la interculturalidad es la única forma que vamos a lograr una igualdad y un respeto a todos los derechos, es cuanto Presidenta.

Presidenta: se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales; con copia a la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora María Aranzazu Puente Bustindui presenta la décima tercera iniciativa.

INICIATIVA DÉCIMA TERCERA

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

P R E S E N T E S.

María Aránzazu Puente Bustindui, Diputada de esta LXIII legislatura, Representante Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 61 y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 130, 131 y 133 de la Ley Orgánica el Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62, y 65 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí; someto a la consideración de esta Soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que propone **REFORMAR** los artículos 144 y 145 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de: **prohibir la venta de emisiones de tabaco denominados “cigarros electrónicos” y/o “vapeadores” a menores de edad en el Estado**, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los cigarros electrónicos y/o conocidos como “vapeadores” tienen origen en el año 2007 específicamente en China, donde la tendencia aumentó en su población considerablemente en los últimos años, lo anterior consiste de un cartucho desechable o recargable que contiene nicotina en forma líquida, disuelta en propilenglicol y saborizantes, un filamento que se calienta hasta vaporizar este líquido, un microprocesador que controla el mecanismo de vaporización cuando se inhala, una boquilla en un sistema que administra la nicotina en un dispositivo, por lo que el consumidor tiene la facilidad de recargar sus cartuchos de nicotina en forma líquida en establecimientos sin control sanitario alguno, tal fue su éxito que en pocos años lograron su exportación a Estados Unidos y a América Latina, siendo los jóvenes los principales consumidores.

Por lo anterior expuesto, el vapor generado por el calentamiento son detectables sustancias tóxicas y compuestas carcinógenas en menor o igual cantidad que en el humo de los cigarrillos, así como diversos metales pesados como níquel, plomo y cromo. Estos dispositivos, al transformar las sustancias químicas líquidas en vapor transmiten partículas dañinas para los pulmones que, en caso de contener acetato de vitamina E, pueden provocar la enfermedad conocida como EVALI (lesión pulmonar asociadas al vapeo, por sus siglas en inglés).

En este sentido, y en consecuencia de que en muchos países donde los cigarros electrónicos son legales, y su promoción no está prohibida y la restricción en la venta a menores de edad no existe, implica un importante riesgo a la salud mayor para la juventud, desafortunadamente, las estrategias de publicidad y mercadotecnia utilizadas por los fabricantes de cigarros electrónicos son las mismas que la industria tabacalera utilizaba para promover sus productos antes de las restricciones a la publicidad.

Según información de Euromonitor International, en 2018 se estimó que había alrededor de 41 millones de usuarios de cigarros electrónicos o vaporizadores a nivel mundial. En 2021 esta cifra alcanzó los 55 millones de usuarios, lo que representa un crecimiento de casi 35% en tan solo tres años.

En nuestro país, en 2016, la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco estimó que en México existen más de 975 mil usuarios de cigarros electrónicos, mientras que más de 5

millones de personas han probado al menos una vez este tipo de dispositivos. En 2021 se contabilizaron alrededor de 1 millón 400 mil 617 usuarios.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019 (ENSANUT), en México 14.8 millones de personas son fumadores actuales y pese a estar prohibidos, 1.2% (1,023,000 personas) utilizan actualmente cigarrillos electrónicos. Adicionalmente, por lo que en el último informe de la ENSANUT reportó que 335,000 adolescentes de entre 10 y 19 años, utilizan estos productos.

La utilización de vapeadores, y/o cigarrillos electrónicos, o cualquier otro sistema electrónico de administración de nicotina o similares ha sido una práctica cada vez más habitual entre personas menores de edad y adultos jóvenes, quienes en su mayoría desconocen cuáles son las afectaciones que pudieran tener en la salud, pues muchas veces estos productos son ofertados en sitios como internet o redes sociales.

Una de las principales consecuencias a la salud, es que el uso diario tanto de cigarrillos electrónicos como de tabaco aumenta la posibilidad de sufrir un infarto al miocardio. Así también, el consumo de nicotina en adolescentes, uno de los grupos más vulnerables ante estos dispositivos, puede dañar partes del cerebro, principalmente aquellas que controlan la atención, el aprendizaje, estado de ánimo y control de impulsos.

Actualmente existen más de 460 marcas diferentes de cigarrillo electrónicos en el mercado.

En México, su consumo ha ido en aumento, los cigarrillos electrónicos y/o vapeadores, lejos de contribuir a contrarrestar el consumo de tabaco, ha incentivado a la juventud a su constante consumo, y que derivado de ello hoy tenemos el crecimiento de un mercado negro que impide dar seguimiento a los controles sanitarios y de calidad, dando pie a la manipulación de los dispositivos y a la inclusión de sustancias no reguladas altamente dañinas para la salud de las personas.

Cabe resaltar que México ratificó un convenio para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, por lo que se creó la Ley General para el Control del Tabaco. En 2013 se adhirió al Plan de Acción Mundial para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (OMS).

No obstante, los esfuerzos por parte de las autoridades no han sido suficientes, dejando en estado de vulnerabilidad al sector de la juventud en nuestro País, es fundamental regular el consumo de lo

antes mencionado y seguir generando campañas recordando a los consumidores las consecuencias que podrían dar efecto a problemas graves de salud.

JUSTIFICACIÓN

En octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, con siete votos a favor y cuatro en contra, declarar inconstitucional el artículo 16 fracción VI de la Ley General para el Control del Tabaco, que prohíbe comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, pero que contenga algún elemento que lo identifique con productos del tabaco.

La resolución fue por contradicción de tesis entre las resoluciones de la Primera Sala, que había resuelto a favor de permitir la comercialización, y la resolución de la Segunda Sala, que había resuelto en contra.

Como con las resoluciones anteriores no se solucionaba el problema de la prohibición que contempla la ley, tuvo que turnarse al Pleno de la Corte para que tomara una posición al respecto, misma que declaró la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, y de esta forma se generó una Jurisprudencia que será obligatoria para todos los jueces federales.

La resolución, si bien declaró inconstitucionales las disposiciones prohibitivas, no se pronunció claramente en permitir su comercialización, de allí la importancia de legislar en la materia, aunado a lo anterior, ***se pondera el derecho de legislar de los Estados en Materia de Salud y establecer en el marco normativo la prohibición a la venta exclusivamente a menores de edad.***

Por su parte el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la resolución de la SCJN, al señalar que la Presidencia apoya en su criterio a la Secretaría de Salud de Gobierno Federal, en considerar dañinos dichos productos, y que *“no puede estar el negocio, el mercantilismo, por encima de la salud del pueblo”*.

También es importante señalar que el poder legislativo trabaja en regular lo antes mencionado, por lo que al día de hoy se han presentado más de 26 iniciativas al respecto en el Congreso de la Unión, ya que existen muchas facilidades para comprar dichos cigarros electrónicos y/o vapeadores, por lo cual es prioridad proteger a los menores de edad; médicos de los servicios de salud a nivel federal han respaldado estas iniciativas.



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

Hoy en día, lamentablemente es sumamente fácil encontrar en nuestro Estado máquinas expendedoras de Cigarros Electrónicos y/o “Vapeadores” dentro de centros comerciales, tiendas o establecimientos dedicados totalmente a su venta, mismas que en su mayoría están cerca de centros educativos.

Es por ello y ante la preocupación que nos externa en este tema, paso a exponer la siguiente iniciativa, dejando a su consideración esta propuesta:

CUADRO COMPARATIVO

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	PROPUESTA
ARTICULO 144 En ningún caso y de ninguna forma se podrá expender o suministrar tabaco a menores de edad ARTICULO 145. Los establecimientos que expendan tabaco deberán tener a la vista del público, letreros alusivos prohibiendo la venta de tabaco a menores de edad.	ARTICULO 144. En ningún caso y de ninguna forma se podrá expender o suministrar tabaco y/o cigarros electrónicos, y/o vapeadores y/o alguna emisión a menores de edad ARTICULO 145. Los establecimientos que expendan tabaco y/o cigarros electrónicos, y/o vapeadores y/o alguna emisión Deberán tener a la vista del público, letreros alusivos prohibiendo la venta de tabaco y / o cigarros electrónicos y/o vapeadores y/o alguna emisión a menores de edad.

PROYECTO DE DECRETO



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

PRIMERO.- Se **REFORMA** el artículo 144 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 144. En ningún caso y de ninguna forma se podrá expender o suministrar tabaco y/o **cigarros electrónicos, y/o vapeadores y/o alguna emisión** a menores de edad

SEGUNDO.- Se **REFORMA** el artículo 145 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 145. Los establecimientos que expendan tabaco y/o **cigarros electrónicos, y/o vapeadores y/o alguna emisión** Deberán tener a la vista del público, letreros alusivos prohibiendo la venta de tabaco y / o **cigarros electrónicos y/ o vapeadores y/o alguna emisión** a menores de edad.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al contenido del presente Decreto.

María Aranzazu Puente Bustindui: muy buenos días tengan todas y todos ustedes, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación y público en general, presentó a la consideración de este respetable Congreso del Estado, la iniciativa con proyecto de decreto en la que propongo reformar los artículos 144, 145 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, con el firme objetivo de prohibir la venta de cigarros electrónicos, también conocidos como bateadores, a menores de edad en nuestro estado, desde el año 2007 la aparición de la tendencia de la población a consumir este tipo de productos, recargables y desechables para el consumo de nicotina líquida a través de un mecanismo vaporizador, se ha ido extendiendo en América Latina, siendo los jóvenes sus principales consumidores; sin embargo, de acuerdo a diversos estudios, en el vapor generado por estos cigarrillos electrónicos se han identificado sustancias tóxicas y compuestos cancerígenos en menor o igual cantidad que el humo de los cigarrillos; así como, diversos metales pesados como el níquel, el plomo, el cromo, que pueden ser dañinos para la salud.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Asimismo, estos dispositivos al transformar las sustancias químicas líquidas en vapor, transmiten partículas dañinas para los pulmones, que en caso de contener acetato de vitamina E, pueden provocar la enfermedad conocida como EVALI, lesión pulmonar asociada al vapeo, por sus siglas en inglés, en ese sentido y en consecuencia de que en muchos países donde los cigarrillos electrónicos son legales y su promoción no está prohibida, y la restricción de la venta a menores de edad no existe, implica un importante riesgo a la salud mayor para la juventud, desafortunadamente las estrategias de publicidad y mercadotecnia utilizadas por los fabricantes de cigarrillos electrónicos, son las mismas que la industria Tabacalera utilizaba para promover sus productos antes de las restricciones a la publicidad.

Para dimensionar de manera clara el alcance de estos productos en nuestro país, actualmente existen 460 marcas diferentes de cigarros eléctricos en el mercado, y para el año 2021 se contabilizaron alrededor de 1' 400,517 usuarios activos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019, en México 14.8 millones de personas son fumadores actuales, y pese a estar prohibido 1.2% de estas personas utilizan actualmente cigarros electrónicos, en donde desafortunadamente se identificó que 335,000 adolescentes entre 10 años, 10 años y 19 años utilizan estos productos, la utilización de vaper y cigarrillos eléctricos, o cualquier otro sistema electrónico de administración de nicotina o similares, ha sido una práctica cada vez más habitual entre personas menores de edad y adultos jóvenes, quienes en su mayoría desconocen cuáles son las afectaciones que pudiera tener en su salud, pues muchas veces estos productos son ofertados en sitios como internet o redes sociales, sin información complementaria sobre los posibles riesgos de salud, en nuestro país y en nuestro estado, el uso y consumo de estos aparatos ha ido en aumento, los cigarros eléctricos y los vaper lejos de contribuir a contrarrestar el consumo de tabaco, ha incentivado a la juventud a su constante consumo y derivado de ello hoy tengamos el crecimiento de un mercado negro, que impide dar seguimiento a los controles sanitarios y de calidad, dando pie a la manipulación de los dispositivos y a la inclusión de sustancias no reguladas altamente dañinas para la salud de las personas.

Ante el panorama planteado es importante señalar, que el Poder Legislativo Federal trabaja actualmente en regular lo antes mencionado, por lo que al día de hoy se han presentado más de 26 iniciativas al respecto, ya que existen muchas facilidades para comprar dichos cigarrillos electrónicos y/o vapeadores; por lo cual, es prioridad proteger a los menores de edad, hoy en día lamentablemente es sumamente fácil encontrar en nuestro estado máquinas expendedoras de cigarros eléctricos y/o vapeadores dentro de centros comerciales, tiendas o establecimientos dedicados totalmente a su venta, mismos que en su mayoría están cerca de centros educativos; es por ello, y ante la



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

preocupación que nos genera este tema, que pongo a su consideración esta propuesta, como un primer paso para salvaguardar la salud de nuestros menores de edad, y con ello, iniciar una inclusión necesaria para reglamentar y establecer la normatividad que requiere para el uso, distribución y consumo de estos aparatos en nuestro estado, es cuanto.

Presidenta: se turna a la Comisión de Salud y Asistencia Social

La legisladora Emma Idalia Saldaña Guerrero, impulsa la décima cuarta iniciativa.

INICIATIVA DÉCIMA CUARTA

Diputadas y diputados secretarios de la Sexagésima Tercera Legislatura Del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Presentes.

Quienes suscriben, **EMMA IDALIA SALDAÑA GUERRERO**, diputada integrante de la Expresión Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano y el diputado **HECTOR MAURICIO RAMIREZ KONISHI**, con fundamento en los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promueven **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE BUSCA CREAR LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

Lo anterior con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que es facultad del Congreso del Estado de San Luis Potosí en términos de lo dispuesto por el artículo 61 de la Constitución Política del Estado, legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de la Unión conforme al Pacto Federal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Además, que es facultad de los diputados del Congreso presentar iniciativas de Ley o Decreto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política y 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de San Luis Potosí

En virtud del fundamento invocado, se presenta la presente iniciativa de Ley atendiendo un reclamo y exigencia de la sociedad, y en un problema de salud pública.

Con esta propuesta se busca establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, así como coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren todos y cada uno de los menores con el padecimiento de acuerdo a su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez ya la vida.

Como es del conocimiento de esta honorable asamblea, el párrafo tercero del Artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, luego entonces el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De igual manera, el precepto citado, prevé que los derechos humanos contemplados en los Tratados internacionales de los cuales México es parte, fungen como marco normativo nacional, por lo que deben ser no solo garantizados y respetados por las autoridades del país, sino que, tal y como lo marca el artículo 2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados firmantes deben comprometerse a adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho pacto, en particular la adopción de medidas legislativas que apoyen este objetivo, por lo que leyes como la que se plantea en la presente iniciativa, abonan al deber del Estado de velar y asegurar la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes.

La protección del derecho a la salud, se encuentra prevista no solo en ordenamientos nacionales, sino en diversos tratados internacionales, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales, (PIDESC), mismo que dentro de su artículo 12 establece como objetivos y medidas para lograr la reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, el sano desarrollo



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

de los niños, prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otro índole, y la lucha contra ellas; así como la creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud.

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 19, señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

En concordancia con lo anterior, la Convención de los Derechos del Niño, de igual manera, señala que los y las niñas deben disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a servicios que permitan prevenir y tratar tanto las enfermedades como el proceso de rehabilitación posterior, por lo que es preciso que el país adopte las medidas necesarias para brindar atención integral y se creen los instrumentos legales correspondientes para tal efecto.

Es importante subrayar que las disposiciones no se limitan únicamente a gestionar los tratamientos que le garanticen al niño o niña el acceso a la salud una vez que ya se ha detectado la enfermedad o padecimiento, sino que también se busca tutelar este derecho de manera preventiva para la detección temprana, es decir, que tengan acceso a servicios de salud de calidad con el objetivo de realizar revisiones constantes que eviten llegar a diagnósticos tardíos con proyecciones negativas y poco rango de acción para un tratamiento exitoso.

En nuestro país toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así lo establece el párrafo cuarto del artículo 4 de nuestra Carta Magna, al tiempo que en su artículo 73 fracción XVI dispone que la Ley debe definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, considerando en ella la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

A su vez, la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí en su artículo 124 establece el Registro Estatal de Cáncer a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí en coordinación con el Registro Nacional de Cáncer a fin de fortalecer las acciones que se llevan a cabo para la prevención y atención oportuna, de conformidad con la Ley General de Salud, mismo que deberá informar cada año al registro nacional el número de personas enfermas que se reportaron en ese periodo de tiempo en el estado.

También, con fecha 07 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la infancia y la Adolescencia misma que, con el objetivo de disminuir la mortalidad en niñas, niños y adolescentes con cáncer, establece en su



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

artículo 3º. que las dependencias de la Administración Pública del Sistema Nacional de Salud, deben considerar como prioritarias las siguientes estrategias:

Artículo 3.

- I. Diagnóstico temprano;
- II. Acceso efectivo;
- III. Tratamiento oportuno, integral y de calidad;
- IV. Capacitación continua al personal de salud;
- V. Disminuir el abandono al tratamiento; y
- VI. Contar con un registro fidedigno y completo de los casos, y
- VII. Implementar campañas de comunicación masiva para crear conciencia social sobre el cáncer en la infancia y la adolescencia.

En este orden de ideas, el artículo 9 de dicha ley dispone lo siguiente:

Artículo 9.- Las entidades federativas y el instituto de Salud para el Bienestar, en coordinación con la Secretaría se asegurarán de implementar en su territorio las medidas necesarias para el funcionamiento de:

- I. La coordinación estatal del Centro y el Consejo;
- II. La Red de Apoyo contra el Cáncer en la infancia y Adolescencia, y
- III. El Registro Nacional de Cáncer en la infancia y Adolescencia.

Eso se concatena con que en los artículos transitorios de la Ley anteriormente referida, se estableció un término de seis meses para que el Ejecutivo Federal expidiera los reglamentos y elaborara guías de atención para el correcto funcionamiento de la ley expedida, así como un plazo de ciento ochenta días para que la Secretaría de Salud en coordinación con el Sistema Nacional de Salud, estableciera las reglas de carácter general para la operación de los mecanismos de la Red de Apoyo contra el Cáncer en la Infancia y la Adolescencia; aunado a un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la ley, el 8 de enero del 2021, para realizar las modificaciones necesarias al Reglamento del Registro Nacional de Cáncer.

Dentro de los transitorios también se estableció que la Secretaría de Salud deba realizar modificaciones a la Norma Oficial Mexicana y demás disposiciones administrativas relativas al Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud que permitan la recopilación, integración y disposición de la información necesaria, además de considerar que las erogaciones con motivo de la Ley se cubrirán de manera progresiva con cargo a los presupuestos autorizados para el ejercicio fiscal del 2019 y los subsecuentes.

No obstante, a más de un año de la entrada en vigor de la Ley General para la Detección oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, no se tiene noticia de los avances en su implementación para atender la grave problemática de los menores con cáncer y sus familias, al día de hoy no se cuenta con accesibilidad a los tratamientos y atención requerida, cada minuto sin tratamiento les disminuye su expectativa de vida y las posibilidades de salir adelante en este padecimiento.

No podemos dejar de mencionar que el cáncer infantil debe ser una prioridad en los temas de salud pública en el país, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer resulta ser una de las principales causas de mortalidad en niñas, niños y adolescentes, a diferencia del cáncer en personas adultas, es complicado conocer los motivos, no obstante en los países de ingresos bajos o medianos, un gran número de defunciones por cáncer infantil pueden ser evitables ya que se derivan de la falta de diagnóstico, diagnósticos incorrectos y principalmente, diagnósticos tardíos, he aquí la relevancia de obtener un diagnóstico precoz, de actuar de manera preventiva y de regular dicha actuación en los órganos correspondientes.

Dada la dificultad para prevenir dicha enfermedad, los esfuerzos deben ir enfocados a facilitar de revisiones constantes, a brindar concientización y educación en el tema y con ello lograr diagnósticos tempranos que faciliten acceder a tratamientos exitosos, sin dejar de lado todo el andamiaje legal necesario para que, una vez detectada la enfermedad en el menor, se le pueda brindar un tratamiento adecuado, amplio e integral que abone a una recuperación progresiva con calidad de vida.

La importancia de un diagnóstico que detecte el cáncer en fases tempranas, es tan grande que de ello puede depender la vida o la muerte del menor, el éxito o el fracaso en un tratamiento, lamentablemente, según datos de la Organización Mundial de la Salud en México un aproximado del 75% de los casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes, se diagnostican en etapas avanzadas, lo cual no solo incrementa los costos y dificultades en el tratamiento, si no que reduce las posibilidades de cura, lo que quiere decir que una temprana detección y tratamiento pueden reducir los índices de mortalidad en un porcentaje relevante.

De ahí que se derive la importancia de un registro y protocolos aplicables a San Luis Potosí de cómo la Ley General es aplicable en el tratamiento y proceso de niños que sufren esta enfermedad y cómo esto ayudara a tener una efectividad cuantificable de los niñas y niños con cáncer, una adecuada atención y un seguimiento que les brinde la mejor calidad de vida posible.

Mediante el registro nominal y las diferentes estructuras planteadas en la presente Ley, se pretende tener un impacto regulatorio que permita medir anualmente los resultados, cuantificables en virtud de la atención que todos y cada uno de los niños están recibiendo de manera integral.

Se requieren resultados, trabajo colaborativo entre las instituciones y cobertura amplia para todas y todos los niños, con especial atención a aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, es lamentable ver indiferencia a la situación de los menores con cáncer y la cantidad de pretextos, así como la ausencia de voluntad para querer dar solución.

El cáncer infantil debe ser una enfermedad de atención prioritaria, el sufrimiento de los menores y contemplar cómo avanza la enfermedad en su hijo sin medicamento debe ser de las peores experiencias de vida para un padre o una madre, de ahí que el desabasto de medicamentos oncológicos sea tan indignante.

Afortunadamente, existen personas y asociaciones que luchan día a día de forma altruista por cambiar el panorama para la infancia y adolescencia con el padecimiento, pero sus esfuerzos, debido a los costos de los tratamientos, no alcanzan a cubrir el universo de requerimientos de cada paciente, es por ello que en alcance y observancia a la expedición de la Ley General en la materia, se propone expedir la propia en San Luis Potosí, con lo que se atenderá lo establecido en su artículo 9 en sentido de asegurar la implementación de las medidas necesarias para el funcionamiento de la coordinación estatal del Centro y el Consejo, de la Red de Apoyo contra el Cáncer en la infancia y Adolescencia, y contribuir en el Registro Nacional de Cáncer en la infancia y Adolescencia.

Sirve de antecedente importante referir, que en enero del 2016, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se expidió la Ley 848, misma que crea la Ley Para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dicho ordenamiento tiene entre sus objetivos disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad, contribuir en la detección oportuna del cáncer de mama, brindar atención complementaria a quienes no cuenten con seguridad social, ofrecer acompañamiento psicológico e implementar acciones encaminadas a la atención y rehabilitación, definiendo las atribuciones del Sistema Estatal de Salud, para prevenir y atender el cáncer de mama,

lo que pauta la estrategia de una atención integral, de manera colaborativa y en beneficio de todas y todos.

Como queda de manifiesto, la presente iniciativa, nace no solo de la necesidad jurídica de adecuación normativa, sino que nace también de una queja social, de una constante violación a los derechos humanos de las y los niños que no han podido acceder a tratamientos oportunos y de calidad, que no cuentan con la protección suficiente para que le sean garantizados sus derechos inherentes y puedan gozar de una calidad de vida digna.

Las repercusiones que en el aspecto económico, presupuestal, social y jurídico tendría la propuesta de reforma en caso de llegar a aprobarse serían las siguientes:

a) En el aspecto social se pretende garantizar el derecho a la salud con relación al principio del interés superior de la niñez, que de manera coordinada con la federación y con la participación de asociaciones, empresas y personas que de manera altruista contribuyen a mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer en cualquier etapa y en cualquiera de sus tipos.

b) En el aspecto económico se presupone existirán repercusiones positivas, puesto que se busca fortalecer las estrategias para contar con recursos suficientes y de manera progresiva dotar del tratamiento necesario a las instituciones de salud para que sea aplicado de forma oportuna, continua y suficiente a los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer.

c) En el aspecto presupuestal se estima que la Ley no implica la creación de nuevas instancias públicas o la creación de nuevas plazas que requieran incorporarse al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, toda vez que el dinero destinado a las estrategias que contiene esta ley, así como el gasto que implicaría ya se encuentra presupuestado en el Proyecto de Egresos. Ahora bien, se celebrarían convenios de participación de sectores social y privado; al respecto de los donativos en especie y monetarios realizados a las organizaciones y asociaciones civiles, se realizarán en torno a los ordenamientos legales y las atribuciones existentes, recalcando que podrán ser por parte de agentes de ayuda y colaboradores actuando en pro del desarrollo del programa y/o sus objetivos.

d) En el aspecto jurídico la propuesta se apega a los lineamientos de la Ley General para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia, además de establecer las bases para atender una problemática social, real y recurrente, por lo que se pretende en la esfera estatal contar con el andamiaje legal que coordine, promueva y defina las atribuciones de los actores involucrados



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

en el diseño de políticas públicas, programas y estrategias para acceder a los insumos requeridos, así como para el cumplimiento de los objetivos planteados en esta ley en los plazos indicados.

Considerando todo lo anterior, se eleva a la distinguida consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se aprueba la creación de la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la infancia y en la Adolescencia del Estado de San Luis Potosí, para quedar de la siguiente manera:

LEY PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el estado de San Luis Potosí, tiene por objeto establecer lineamientos para la oportuna prevención, diagnóstico, registro, atención integral, tratamiento, rehabilitación, control y seguimiento así como la vigilancia epidemiológica del cáncer en la infancia y la adolescencia, para contribuir en la disminución de la mortalidad, con estándares de calidad, seguridad y control que garanticen el derecho a la salud consagrado en el artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones generales en materia de salud y detección oportuna del cáncer.

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general obligatoria para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de las instituciones de salud pública, prestadores de servicios de asistencia social del Estado de San Luis Potosí, así como para personas físicas o morales que coadyuven en la prestación de servicios en los términos y modalidades establecidas en la presente Ley.

Artículo 3. Son principios rectores de esta Ley:

- I. El derecho a la vida;
- II. El derecho a la salud;
- III. El interés superior del menor;
- IV. El derecho a la supervivencia y de sano desarrollo;
- V. La oportunidad, la eficiencia y la eficacia;
- VI. Continuidad asistencial y de tratamiento;
- VII. La no discriminación;
- VIII. La progresividad;
- IX. La interdependencia e indivisibilidad;
- X. El derecho a la información y la transparencia;
- XI. La centralidad en las personas; y
- XII. La universalidad y gratuidad.

Artículo 4. La Secretaría de Desarrollo Social y Regional y la Secretaría de Salud en el ámbito de sus competencias serán las autoridades encargadas de la instrumentación de la presente Ley, para lo cual impulsarán la participación de los sectores social y privado, así como de la sociedad en general, con el fin de fortalecer los servicios integrales en la materia.

Para tal efecto, promoverá la creación de la Red de Apoyo, y del Frente de Colaboración, con la finalidad de facilitar el acceso a los pacientes y sus familiares a la información relativa a la cobertura de servicios de atención médica y asistencial.

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

- I. Agentes de Ayuda. Asociaciones civiles, Organismos no gubernamentales, personas Físicas y Jurídicas, estatales, nacionales o internacionales, que de manera voluntaria ejercen de forma honorífica y altruista, acciones que contribuyen económica, académica, material o humanamente en la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer;
- II. Centro hospitalario. Hospital que brinde la atención o prevención del cáncer, prioritariamente el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”.
- III. Detección y tratamiento oportuno. Las acciones realizadas en el menor tiempo posible por el personal de salud al que hace referencia este ordenamiento, en las circunstancias apremiantes para producir el efecto deseado y buscado por la ley, tomando en cuenta la disponibilidad y capacidad de recursos técnicos y humanos;
- IV. Estrella dorada. Reconocimiento anual que se otorga a las personas físicas y jurídicas que de manera sobresaliente contribuyen a fortalecer acciones de prevención, atención, tratamiento, acompañamiento, de intercambio de conocimientos, investigación, o la obtención de insumos, materiales y recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias;
- V. Frente de colaboración. El frente de colaboración contra el cáncer infantil y la adolescencia del Estado de San Luis Potosí;
- VI. Programa. Programa Estatal de Cobertura Universal para la infancia y adolescencia con cáncer;
- VII. Red Estatal. Red Estatal de Apoyo;
- VIII. Registro. El Registro Nominal del Cáncer en la infancia y en la Adolescencia del Estado de San Luis Potosí;
- IX. Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí;
- X. Secretaría de Asistencia. Secretaría del Desarrollo social y Regional (SEDESORE);
- XI. Secretaría de Educación. Secretaría de Educación del Estado de San Luis Potosí;

XII. DIF San Luis Potosí. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia San Luis Potosí

XIII. DIF Municipales. Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí;

XIV. Menores. Niñas, niños y adolescentes menores de 18 años; y

XV. Usuarios del Programa. Los menores y sus familiares en tratamiento activo acreditados en el registro.

Artículo 6. Son sujetos de la protección de la presente ley las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que tengan residencia en el Estado de San Luis Potosí; que no cuenten con los servicios de seguridad social y que se encuentren dentro de alguna de las siguientes circunstancias:

I. Cuando el menor presente sintomatología, historial clínico o cualquier otro dato que motive la sospecha del padecimiento de cáncer en cualquiera de sus etapas, así determinado por un médico general o con especialidad, por lo que se requiera la aplicación de exámenes y procedimientos diagnósticos para descartar o confirmar el padecimiento;

II. Cuando se confirme el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades y se requiera la atención, tratamiento, cirugía, terapia, seguimiento o vigilancia epidemiológica; y

III. Cuando el usuario del programa este recibiendo tratamiento, hasta que este se concluya, adquiera la mayoría de edad y se haya diagnosticado el padecimiento de cáncer e iniciado su tratamiento previo a los 18 años de edad.

Capítulo Segundo

De las Autoridades

Artículo 7. Son autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, en el ámbito de su competencia, las siguientes:

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí;

II. La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDEDORE);

III. La Secretaría de Educación;

IV. La Secretaría de Salud;

V. La Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí;

VI. DIF San Luis Potosí;

VII. DIF Municipales;

VIII. El Organismo Público Descentralizado Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”

IX. El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud San Luis Potosí; y

X. Las demás que establezca la presente Ley, la Ley General de Salud, la Ley General para la detección oportuna del cáncer en la infancia y en la adolescencia, y disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 8. Es atribución del Titular de Poder Ejecutivo:

I. Establecer las directrices que garanticen el programa para los usuarios que establece esta ley;

II. Celebrar convenios para dar cumplimiento a los objetos de las Leyes Generales y Estatales en materia de salud y asistencia social; y

III. Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 9. Es atribución de la Secretaría de Salud, lo siguiente:

I. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para el acceso a los servicios médicos para la infancia y la adolescencia con cáncer proporcionados por el Estado;

II. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente ley, en los términos de la Ley General de Salud, La Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, así como en las disposiciones legales y normativas aplicables;

III. Coordinar la forma en que los Municipios coadyuvarán en la aplicación de la presente ley; y

IV. Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 10. Es atribución de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, lo siguiente:

- I. Elaborar y aplicar el Programa para la infancia y adolescencia con cáncer, para la aprobación del Sistema;
- II. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para la prestación de los servicios integrales a que se refiere la legislación general y estatal normativa y reglamentaria aplicable;
- III. Celebrar convenios de colaboración para el cumplimiento del objeto de la presente ley;
- IV. Coordinar y promover las acciones de los organismos en el Estado que presten los servicios asistenciales;
- V. Promover la concurrencia y colaboración de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la participación del sector privado, en la prestación de los servicios de asistencia social;
- VI. Regular el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que presten servicios asistenciales;
- VII. Implementar acciones para disminuir el abandono y favorecer el tratamiento;
- VIII. Establecer los lineamientos para apoyar a los usuarios del programa señalado en este ordenamiento; y
- IX. Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 11. Es atribución de la Secretaría de Educación, lo siguiente:

- I. Contribuir en las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer infantil y en la adolescencia en los centros educativos;
- II. Celebrar convenios de coordinación y participación, a fin de que los Centros hospitalarios cuenten con personal educativo del sistema de educación básica que brinden atención escolar conforme al horario que acuerden padres o tutores; con el propósito de otorgar especial apoyo académico a los usuarios del programa, para que las ausencias escolares por motivo del tratamiento y consecuencias de la enfermedad no afecten de manera significativa su rendimiento académico;
- III. Otorgar facilidades a las niñas, niños y adolescentes que padezcan cáncer para no afectar su desempeño académico y evitar la deserción escolar;



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

IV. Sensibilizar al personal docente y alumnos en la no discriminación y apego al respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con cáncer;

V. Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 12. Es atribución de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí;

I. Colaborar con las autoridades involucradas en la aplicación de la presente Ley, velando en todo momento por el interés superior de la niñez en los términos establecidos en las disposiciones legales e instrumentos internacionales en el que México es parte;

II. Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 13. El DIF San Luis Potosí; así como los Municipios del Estado de San Luis Potosí; a través de los DIF municipales, en coordinación con las Secretarías se asegurará de implementar en su territorio las medidas necesarias, para la debida aplicación de la presente ley y su reglamento, así como promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.

Artículo 14. Es atribución del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud de San Luis Potosí;

I. Realizar las acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de las niñas, niños y adolescentes en los términos de la presente ley;

II. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente ley, en los términos de la Ley General de Salud, La Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, así como en las disposiciones legales y normativas aplicables; y

III. Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 15. Es atribución del Organismo Público Descentralizado Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”:

I. Coordinar las acciones y adecuaciones necesarias para el establecimiento y operación como Centro hospitalario en los términos de la presente Ley y su Reglamento;

II. Coordinarse con las Secretarías de Salud y la Secretaría de Asistencia para brindar la atención integral en los términos del programa, la presente Ley y su Reglamento;



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

- III. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente ley, en los términos de la Ley General de Salud, La Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, así como en las disposiciones legales y normativas aplicables; y
- IV. Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Capítulo Tercero

De los derechos de las niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Artículo 16. Son Derechos de niñas, niños y adolescentes con cáncer los siguientes:

- I. Que le sean practicados los exámenes diagnósticos necesarios;
- II. Recibir atención medica integral y multidisciplinaria, en cualquiera de sus tipos o modalidades, en términos de la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
- III. Recibir las prestaciones de los servicios de salud correspondientes de conformidad a su condición de aseguramiento;
- IV. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, adecuada a su edad, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen;
- V. Recibir facilidades en materia educativa para no afectar su desempeño académico y evitar la deserción escolar; y
- VI. Los demás que esta ley, su reglamento y disposiciones legales aplicables establezcan.

TITULO SEGUNDO

DE LA COORDINACIÓN

Capítulo Primera

De la Coordinación y colaboración



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Artículo 17. La coordinación y colaboración entre el Estado de San Luis Potosí, las entidades federativas y la Federación en materia de cáncer en la infancia y la adolescencia se efectuará en el ámbito de sus respectivas competencias, en apego a lo dispuesto en las Leyes Generales, Estatales y disposiciones reglamentarias y normativas aplicables.

Artículo 18. La Secretaría de Desarrollo Social y Regional encabezara la coordinación entre las autoridades Estatales y Municipales y los Agentes de Ayuda en el ámbito de su competencia, lo anterior con la finalidad de garantizar la cobertura universal, gratuita e integral a los usuarios establecida en la presente Ley y su reglamento.

Capítulo Segundo

De la Red Estatal

Artículo 19. La Red Estatal, se constituye por las autoridades establecidas en el artículo 7 de la presente ley y el titular del Frente.

Artículo 20. La Red Estatal definirá los mecanismos de coordinación y colaboración para el fortalecimiento de la atención integral del cáncer infantil en el Estado de San Luis Potosí, en los términos que establece el reglamento de la presente ley.

Artículo 21. La Red Estatal será coordinada para la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.

Artículo 22. La Red Estatal tiene como objetivo mejorar la salud y calidad de vida de las niños, niñas y adolescentes con cáncer en el Estado de San Luis Potosí, brindando oportunidades a través de la coordinación de acciones en el ámbito de atribuciones de cada una de las autoridades responsables y las agentes de apoyo.

Capítulo Tercero

Del Frente

Artículo 23. El Frente se constituye como un mecanismo de colaboración, que concentra a las agentes de apoyo que coadyuvan en la lucha contra el cáncer en la infancia y adolescencia en San Luis Potosí, en los términos que establece la presente ley y su reglamento.

Se conformara por Asociaciones civiles, Organismos no gubernamentales, personas físicas y morales estatales, nacionales o internacionales, que de manera voluntaria ejercen de forma honorifica y altruista, acciones que contribuyen económica, académica, material o humanamente en la satisfacción de las requerimientos y necesidades de las niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer, de conformidad a la convocatoria que emita la Secretaría de Desarrollo Social y Regional de manera anual para su registro y acreditación;

TÍTULO TERCERO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MENORES CON CANCER

Capítulo Primero De la Atención Integral

Artículo 24. Las disposiciones contenidas en el presente Título son aplicables a los menores que no cuenten con seguridad social.

Artículo 25. La atención integral es la base de la intervención que complementa las actuaciones de salud con la atención a las múltiples repercusiones que conlleva el diagnóstico y que inciden directamente sobre el proceso de la enfermedad y la calidad de vida de los usuarios y sus familias.

Artículo 26. La atención integral de los usuarios tiene como objetivo:

- I. Contribuir al aumento de las expectativas de vida de las niñas, niños y adolescentes con cáncer;
- II. Potenciar y mejorar la Atención Medica;
- III. Crear y fomentar grupos de apoyo psicológico;
- IV. Generar planes nutricionales;
- V. Fomentar y mejorar el desarrollo educativo;
- VI. Incluir e integrar a las familias en los Planes y programas gubernamentales aplicables

VII. Promover y coordinar la participación de las instituciones encargadas de la atención de las niñas, niños, adolescentes y sus familias; y

VIII. Coadyuvar para mejorar el traslado de los niños y sus familias para su tratamiento.

Artículo 27. La atención integral debe contemplar al menos los siguientes ejes:

I. Prevención;

II. Diagnóstico;

III. Tratamiento;

IV. Oportunidades; y

V. Las demás que establezca la ley en la materia.

Capítulo Segundo

De la Prevención, Detección, Diagnóstico y Referencia Temprana

Artículo 28. En materia de Prevención, las autoridades de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán hábitos y estilos de vida saludables que incidan positivamente en el bienestar físico, mental y social de la población.

Artículo 29. Los prestadores de servicios de salud deberán atender las guías y protocolos de atención establecidos para lograr identificar oportunamente signos y síntomas de cáncer en la infancia y la adolescencia.

Las autoridades de la presente ley deberán establecer y fomentar programas de formación, capacitación y educación continua, con el objetivo de que los profesionales en el área de salud de primer contacto cuenten con las herramientas necesarias para la detección oportuna.

Artículo 30. La Secretaría de Salud, impulsará con las instituciones educativas, públicas y privadas, que imparten la licenciatura de medicina, enfermería y carreras afines, la inclusión en sus planes de estudios de la capacitación especializada sobre la sintomatología principal, sintomatología de sospecha y factores de riesgo, de los tipos más prevalentes de cáncer en la infancia y la adolescencia.

Artículo 31. En caso de sospecha fundada de cáncer, el personal del centro de salud, deberá referir al paciente a la unidad de segundo nivel de atención más cercana para realizar el diagnóstico oportuno, dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles, sin perjuicio de ordenar todos los exámenes paraclínicos y procedimientos especializados que se consideren indispensables para tener un diagnóstico.

En caso de que el primer contacto se realice en una unidad de segundo nivel de atención, o bien derivado de la referencia anterior no pueda ser obtenido un diagnóstico deberá ser referido al Centro hospitalario para la atención correspondiente.

Artículo 32. Los diagnósticos en los que se presume la existencia de cáncer deberán basarse en los protocolos y guías especializadas establecidas.

Artículo 33. Una vez que se cuente con un diagnóstico confirmatorio de cáncer, en cualquiera de sus tipos o modalidades, el establecimiento de salud deberá referenciar al menor al Centro a efecto de iniciar de forma oportuna con su atención y tratamiento.

Capítulo Tercero

De la Atención y Tratamiento

Artículo 34. La atención que se otorgue par las autoridades establecidas en la presente ley, se constituye como un Eje prioritario en la prestación de servicios de salud en el Estado, misma que debe brindarse de forma, gratuita, informada, multidisciplinaria, continua, integral, y coordinadamente en cada una de las etapas de la enfermedad que curse el usuario, y en apego a los estándares de seguridad y calidad que para tal efecto dispongan las Normas Oficiales Mexicanas, las guías y protocolos establecidos para tal efecto y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 35. Los pacientes que sean referidos al Centro hospitalario, deberán iniciar su proceso de incorporación al programa de acuerdo a los lineamientos que establezca la Secretaría de Asistencia para tal efecto.

Artículo 36. Los médicos tratantes deberán informar a la familia en que consiste cada uno de los tratamientos, sus implicaciones y efectos secundarios, y en su caso, de ser procedente pueda considerar las posibles opciones de tratamiento a seguir de acuerdo a los requerimientos del paciente, a fin de que dicha información coadyuve en la toma de decisiones.

Artículo 37. El tratamiento multidisciplinario prescrito por el médico tratante dependerá del estado del avance y del tipo de cáncer, por lo que el Centro hospitalario deberá contar con los insumos, materiales, y medicamentos necesarios para su administración al paciente.

En casos de causa de fuerza mayor, entendida esta como la imposibilidad material de adquisición de medicamentos o insumos por situaciones ajenas a las autoridades de la presente ley, se realizarán las gestiones necesarias a efecto de buscar la colaboración de los agentes de ayuda para contar con los insumos y medicamentos necesarios.

Capítulo Cuarto

Oportunidades de los usuarios del programa

Artículo 38. Los usuarios del programa contarán con apoyos asistenciales que serán coordinados y otorgados en las formas y modalidades que determine la Secretaría de Asistencia.

Artículo 39. La Secretaría de Educación determinará las facilidades y lineamientos en materia educativa a efecto de garantizar el derecho a la educación de los usuarios.

TÍTULO CUARTO

DEL REGISTRO ESTATAL DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 40. El Registro es el mecanismo que permite tener control y registro de los usuarios que se benefician del programa.

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional, en coordinación con la Secretaría de Salud y el DIF Estatal, establecerán los lineamientos para implementar el formato de inscripción en el Registro, de conformidad con la Ley de Asistencia Social y la Ley de Salud ambas del Estado de San Luis Potosí y las demás normas aplicables.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Los datos personales de los beneficiarios que se integren en la base de datos del Registro, serán preservados en los términos de la ley aplicable en la materia, protegiendo aquellos de carácter confidencial y haciendo públicos los que constituyan información fundamental.

La información del Registro no puede ser usada para fines comerciales, electorales, ni para otra de índole distinta a la consulta ciudadana y a los fines establecidos de políticas públicas.

Artículo 41. La Secretaría de Asistencia determinara las medidas y lineamientos a que se sujetara el sistema electrónico a fin de garantizar la operación, procesamiento, interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes electrónicos, que garantice la confidencialidad, integridad, resiliencia, seguridad en el acceso y transmisión de la información.

Se preferirán los sistemas de soporte que admitan la interoperabilidad con otros registros o sistemas de información que se vinculen al cáncer infantil y adolescente, y que resulten útiles a las finalidades del Registro.

TÍTULO QUINTO

Capítulo Único

De la información estadística

Artículo 42. Las entidades públicas y privadas que brinden atención médica de niñas, niños y adolescentes con cáncer deberán proporcionar los datos nominales e información estadística de manera periódica a la Secretaría de Salud a efecto de alimentar el Registro Estatal de Enfermedades Crónicas no Transmisibles apartado Registro Estatal de Cáncer, contemplado en la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 43. La información estadística del Registro Estatal de Enfermedades Crónicas no Transmisibles en el apartado Registro Estatal de Cáncer coadyuvara en la toma de decisiones, proyecciones y evaluaciones de las políticas públicas en materia de detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil, así como orientar la canalización de recursos para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad en menores con cáncer, aumentar la supervivencia e identificar los casos de deserción en el tratamiento.

TÍTULO SEXTO

DE LA AYUDA Y COLABORACIÓN

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 44. Los mecanismos de intervención y colaboración de los agentes de ayuda deberán definirse por la Secretaría de Asistencia, quien establecerá las políticas de la intervención, colaboración y aportaciones para el beneficio de los objetivos del programa, de la presente ley y su reglamento.

Capítulo Segundo

Del Reconocimiento Estrella Dorada

Artículo 45. Con el objeto de promover la participación y contribución de los sectores de la sociedad, así como de las instituciones, profesionistas y ciudadanos en general, La Secretaría de Asistencia reconocerá de manera anual con el reconocimiento de la Estrella Dorada a los agentes de ayuda que se hayan distinguido de manera relevante por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar a favor del estado, del país o de la humanidad en el tema del cáncer infantil. Esta entrega refleja lo destacado en el año previo a la entrega del reconocimiento público.

La Secretaría de Asistencia, procurará llevar a cabo un evento protocolario para la entrega del reconocimiento en el marco de la conmemoración del día 15 de febrero "Día Internacional de Cáncer Infantil".

Artículo 46. El acreedor del reconocimiento podrá recibir incentivos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a lo que establezca el reglamento de la presente ley.

Artículo 47. Para el otorgamiento del reconocimiento referido en este capítulo, la Secretaría de Asistencia, determinara las bases o lineamientos a través de la convocatoria correspondiente aprobada por dicha Secretaría.

CAPÍTULO SÉPTIMO



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

DE LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Capítulo Único

Investigación

Artículo 48. La Secretaría de Salud, fomentara la investigación científica biomédica, clínica y de salud pública en cáncer en la infancia y la adolescencia. Para ello potenciara la vinculación para la cooperación técnica y financiera, a nivel nacional e internacional, tanto pública como privada, generara instancias de dialogo y coordinación con la comunidad científica, las universidades e instituciones públicas o privadas que realizan investigación en cáncer en la infancia y la adolescencia.

Se fomentarán especialmente aquellas investigaciones que provean evidencia local, y que sirvan de insumo para la toma de decisiones y la planificación en salud en el ámbito del cáncer en la infancia y la adolescencia.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luís”

Segundo. La Secretaría de Asistencia en un plazo de 120 ciento veinte días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá iniciar las acciones encaminadas al establecimiento del Registro que se establece en el presente decreto.

Tercero. El Poder Ejecutivo contara con un plazo de 120 ciento veinte días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones reglamentarias y presupuestarias, así como emitir el reglamento de la presente ley.

Emma Idalia Saldaña Guerrero: “si la ayuda y la salvación han de llegar, sólo puede ser a través de los niños, porque los niños son los creadores de la humanidad” María Montessori, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, ciudadanos, muy buen día, estoy en la más alta Tribuna del estado, para presentar una iniciativa que impulsamos en conjunto mi compañero Mauricio Ramírez Konishi y su servidora, para proponer la creación de la nueva Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

de San Luis Potosí, legislación de gran impacto social, porque la detección oportuna del cáncer en fases tempranas es muy importante, ya que de ello puede depender la vida o la muerte de un menor potosino; es decir, el éxito o el fracaso en su tratamiento, en San Luis Potosí según cálculos de la Secretaría de Salud en la entidad, cada año se detectan 60 nuevos casos, por lo que es fundamental que la ciudadanía y el sistema de salud estén atentos a la manifestación de sus síntomas, como son: fiebre recurrente o persistente, palidez, puntos rojos o moretones sin ninguna causa, sangrados en encías y nariz, debilidad, pérdida de peso, dolor de cabeza intenso, ausencia de reflejo rojo en el ojo, presencia de estrabismo, hinchazón en los ojos, presencia de bolitas en cuello, axilas, ingles, presencia de masas en abdomen o dolor intenso de huesos, acudan de manera inmediata a su médico de confianza, a una unidad médica más cercana para la revisión médica de su menor.

Porque lamentablemente, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en México un aproximado del 75% de los casos de cáncer en niñas y niños y adolescentes, se diagnostican en etapas avanzadas, lo cual no sólo incrementa los costos y dificultades en el tratamiento; sino que, reduce las posibilidades de cura, lo que quiere decir, que en una temprana detección y tratamiento pueden reducir los índices de mortalidad en un porcentaje relevante, de ahí que se derive la importancia de un registro y protocolos aplicables a San Luis Potosí de cómo la Ley General es aplicable en el tratamiento y proceso de niños que sufren esta enfermedad, y cómo esto ayudará a tener una efectividad cuantificable de las niñas y niños con cáncer, una adecuada atención y un seguimiento que les brinda la mejor calidad de vida posible, mediante el registro nominal y las diferentes estructuras planteadas en la presente ley, se pretende tener un impacto regulatorio, que permita medir anualmente los resultados cuantificables en virtud de la atención que todos y cada uno de los niños están recibiendo de manera integral.

Como pueden apreciar, esta iniciativa que propone la bancada Naranja, nace no sólo de la necesidad jurídica, de adecuación normativa, sino que nace también de una queja social y de una constante violación a los derechos humanos de las y los niños, que no han podido acceder a tratamientos oportunos y de calidad, que no cuentan con la protección suficiente para que les sean garantizados sus derechos inherentes y puedan gozar de una calidad de vida digna, les agradezco su atención, pero sobre todo su apoyo, para que esta propuesta pueda ser aprobada y asumamos compromisos y acciones contundentes en beneficio de las niñas, niños y adolescentes potosinos, que padecen esa enfermedad curable que es el cáncer, siempre que las instituciones pongan el mejor de sus esfuerzos en su detección y tratamientos oportunos, por mi parte es cuanto diputada Presidenta.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Presidenta: se turna a las comisiones de, Salud y Asistencia Social; Derechos Humanos, Igualdad y Género; y Puntos Constitucionales.

Diputada Nadie Esmeralda Ochoa, diputada Bernarda Reyes

Bernarda Reyes Hernández: si, de igual manera a los promover, a los diputados, si me permiten adherirme por la importancia del tema, muchas gracias.

Presidenta: diputada Ma. Elena Ramírez, diputado Roberto Ulises, diputada Dolores, diputada Liliana Guadalupe, diputado René Oyarvide, diputada Martha Patricia, diputado Salvador Isais, diputado Edgar, ¿alguien más?; diputado Alejandro Leal Tovías, diputado Edmundo Torrescano, diputada Lidia, ¿alguien más?; diputado José Antonio Lorca, diputada Gabriela, diputado José Ramón Torres, diputada María Aránzazu, Yolanda Cepeda, pregunto a los promoventes, si aceptan la adhesiones, incorpórese en el acta y en el registro las adhesiones, por favor.

A tribuna el legislador José Antonio Lorca Valle, para exponer la décima quinta iniciativa.

INICIATIVA DÉCIMA QUINTA

CIUDADANAS Y CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Presentes.

Con fundamento en lo que disponen los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; el 130 y el 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de nuestro Estado; y 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, **José Antonio Lorca Valle, Diputado Local en la Sexagésima Tercera Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional**, me permito elevar a la distinguida consideración de esta Asamblea, la presente **Iniciativa de con Proyecto de Decreto que busca ADICIONAR nueva fracción XVI, con lo que el contenido de la actual XVI, pasa la XVII, de y al artículo 14 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí.**

La finalidad del instrumento parlamentario es:



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Establecer que la Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, pueda establecer convenios con instituciones educativas, tanto estatales como federales, para implementar programas educativos para beneficiar a las personas privadas de su libertad en el estado.

Sustentada en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación de las personas internadas en los centros de readaptación social, se encuentra fundamentada en el artículo 18 de la Constitución, el que, en su segundo párrafo, establece la educación en la reinserción social.

Siguiendo la pirámide Normativa, tenemos que esta modalidad de educación, también se sustenta en los instrumentos internacionales signados por México; ya que de acuerdo al artículo 77 de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, adoptadas por el Congreso de las Naciones Unidas Sobre Prevención,

“La educación de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de enseñanza pública a fin de que al ser puestos en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación.”⁽¹⁾

⁽¹⁾<https://www.corteidh.or.cr/tablas/r06835-11.pdf>

En cuanto a las Leyes estatales, en el año 2017, se llevó a cabo una reforma para armonizar la normativa con la Ley Nacional de Ejecución Penal, a raíz de eso la materia penal y la de reinserción social se adicionaron a la Ley del Sistema de Seguridad Pública, al Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí.

Con esos cambios, la Ley del Sistema Penitenciario de San Luis Potosí se deroga, y con ello, las disposiciones en materia de educación para personas privadas de su libertad, que contemplaba esa Ley, directamente en el Marco Legal estatal.

Entonces, el martes 30 de julio del 2019, se publicó en el Periódico Oficial del estado, el Reglamento de los Centros Penitenciarios Estatales de San Luis Potosí, para concluir las labores de armonización con la Ley Nacional de Ejecución Penal, y el contenido en materia de educación queda en dicho



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Reglamento, sobre todo en los artículos 3, 23, y 113 a 120, que respectivamente confieren a la Secretaría de Seguridad Pública la responsabilidad en materia de educación para los internos, y regulan lo relacionado al área de pedagogía y la naturaleza y condiciones de la educación.

Sin embargo, ante la carencia de disposiciones en el nivel de la Ley estatal sobre educación para las personas en proceso de readaptación social, se vuelve necesario adicionarlas, para reforzar el contenido y las acciones derivadas del Reglamento citado.

Primeramente, vale la pena resaltar el valor de la educación en la readaptación social, y el porqué es necesario sustentarla en la Ley. Reconociendo que los derechos básicos como la educación, el trabajo, alimentación y servicio de salud no pueden ser suspendidos a las personas privadas de su libertad y que, de hecho:

“La educación, por ser un derecho (...) es inherente a la naturaleza de cada persona, (...) viene a ser una prerrogativa del ser humano.”⁽²⁾

La función de la educación en estas condiciones, para los internos, es *“prepararlos para la participación social al quedar en libertad, en función de la EDH.”*, y se pueden ubicar tres objetivos también:

“En primer lugar, mantener a los presos o internos ocupados provechosamente; en segundo lugar, mejorar la calidad de la vida en la cárcel; y en tercer lugar, conseguir un resultado útil (oficio, conocimientos, comprensión, actitudes sociales y comportamiento) que perdure más allá de la cárcel y permita el acceso al empleo o a una capacitación superior.”⁽³⁾

⁽²⁾<http://200.23.113.51/pdf/30365.pdf>

⁽³⁾<https://www.corteidh.or.cr/tablas/r06835-11.pdf>

Entre los antecedentes, podemos contar al programa de educación para la reinserción social de la Ciudad de México, comenzado en el 2004, para el cual el gobierno de la ciudad realizó un convenio con la UNAM, y con otras instituciones y ha producido los siguientes resultados:

“De los estudiantes que han obtenido su libertad, 242 han gestionado su ingreso a los planteles de la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM) para continuar sus estudios. 166 en la licenciatura en Derecho (88 en el plantel Centro Histórico, 62 en Cuauhtémoc y 16 en el de San Lorenzo Tezonco). De la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana, 6 continúan

sus estudios en el Plantel Casa Libertad y 11 en el Plantel Del Valle. Cabe señalar que, de los 16 estudiantes de Derecho titulados, 13 son internos y 3 lograron su titulación ya siendo externados, 11 de éstos, con Mención Honorífica.”

De hecho, las investigaciones han señalado que la educación al interior de los centros de reinserción social tiende a aminorar la reincidencia en conductas delictivas, por lo que es una acción pública que tiene grandes beneficios tanto para los internos como para la sociedad:

“Estudios que han demostrado una reducción en la tasa de reincidencia en PPL que han iniciado y terminado sus estudios universitarios en las prisiones. Es decir, la persona que estudia una carrera universitaria en prisión no regresa al centro. Entendemos por ello que la formación universitaria puede ser un elemento clave que hay que fomentar para reducir la reincidencia y facilitar la inclusión social. Dada la carencia de estudios existentes en el seguimiento de los egresados en centros penitenciarios sería interesante desarrollar investigaciones que analizaran las tasas de reincidencia, la incorporación laboral y la situación familiar.”⁽⁴⁾

⁽⁴⁾http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632021000100487

En vista de sus impactos positivos, esta iniciativa busca establecer como atribuciones del secretario de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en lo general realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la educación en las personas privadas de su libertad, y para lo cual podrá atribución establecer convenios con instituciones educativas, esto en términos más específicos.

El aspecto general que se plantea, es en virtud de la laguna en las Leyes estatales que se comentó, que causa una ausencia formal de responsabilidad por parte de las autoridades estatales, en materia de este tipo de educación.

Por otro lado, la disposición de tipo específico, busca tomar como referencia los modelos de éxito como el referido en la Ciudad de México, y motivar la cooperación con otros organismos como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación estatal y el Instituto Nacional de Educación de los Adultos, para lograr una meta de beneficio social.

Con base en lo anterior, se propone el siguiente:



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA nueva fracción XVI, con lo que el contenido de la actual XVI, pasa la XVII, de y al artículo 14 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y SUS ATRIBUCIONES

Capítulo II

De las Atribuciones de las Autoridades

ARTICULO 14. El titular de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, tiene las siguientes atribuciones:

1. a XV. ... ;

XVI. A través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la educación en las personas privadas de su libertad, y para lo cual podrá establecer convenios con instituciones educativas, tanto estatales como federales, para implementar programas educativos para beneficiar a las personas privadas de su libertad en el estado, y

XVII. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas y reglamentos aplicables

TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en la presente Ley.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

José Antonio Lorca Valle: buenos días, con su permiso Presidenta, buenos días a todos los que nos acompañan, y a los compañeros y compañeras, con su permiso, hago uso de la voz para exponer la iniciativa en la que propone adicionar nueva fracción XVI al artículo 14 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de nuestro estado, con la finalidad de establecer que la Secretaría de Seguridad a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social puede establecer convenios con instituciones educativas, tanto estatales como federales, para implementar programas educativos para beneficiar a las personas privadas de su libertad en el estado, la educación de las personas internadas en los centros de readaptación social se encuentra fundamental en el artículo 18 de la Constitución y se reconoce su valor en la reinserción social; a nivel local, en el año 2017, el marco legal se armonizó con la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley del Sistema Penitenciario de San Luis Potosí se derogó, y con ella también las disposiciones en materia de educación para personas privadas de su libertad que contemplaba esa ley.

Las regulaciones sobre educación para los internos en la actualidad, están contenidas en los reglamentos de los centros penitenciarios estatales de San Luis Potosí, pero ante la carencia de exposiciones en el nivel en la ley estatal sobre educación para las personas en proceso de readaptación social se vuelve necesario adicionar las para fundamentar el contenido y las acciones derivadas del reglamento citado; en primer término, se debe reforzar el derecho a la educación como parte de las garantías básicas de las que los internos no deben ser privados; en segundo lugar, la educación brinda conocimientos que perduran más allá de la cárcel, y pueden permitir el acceso al empleo o una capacitación superior, contribuyendo invaluablemente a la reintegración social.

Finalmente, las investigaciones han verificado que la educación al interior de los centros de reinserción social tiende a aminorar la reincidencia en conductas delictivas, por lo que es una acción pública que tiene grandes beneficios, tanto para los internos como para la sociedad, esta iniciativa busca establecer como atribución del Secretario de Seguridad Pública a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la educación en las personas privadas de su libertad, y para lo cual podrá establecer convenios con instituciones educativas con la finalidad de subsanar la laguna legislativa producida por las reformas de años atrás, y fundamentar y apoyar las acciones que las autoridades realicen en este rubro, de esta forma se podrá motivar la cooperación con otros organismos, como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación Estatal y el Instituto Nacional de la Educación de los Adultos, para lograr una meta que apoye la rehabilitación, reduce la incidencia en actos criminales y benefician a toda la sociedad, muchas gracias.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Presidenta: se turna a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

Primera secretaria lea la décima sexta iniciativa.

INICIATIVA DÉCIMA SEXTA

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

P r e s e n t e s .

Con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Rubén Guajardo Barrera, diputado local integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIII Legislatura, elevo a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone REFORMAR artículo 93 BIS de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 27 de mayo del 2019, se reformó el último párrafo del artículo 110 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, para establecer la clasificación de información en las bases de datos del Sistema Nacional de Información, así como que su consulta sea exclusiva de las instituciones de Seguridad Pública con las facultades indicadas y para efectos de impedir el acceso público.

La porción normativa quedó en los siguientes términos:

Art 110.

...

Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares,

teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga. Sin embargo, el 30 de junio del 2021, la Suprema Corte de la Justicia, emitió una Acción de Inconstitucionalidad que invalida la última parte del párrafo, en lo tocante a las restricciones de consulta de los datos:

“Cuya consulta es exclusiva de las instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga.”

La raíz de esa determinación fue una impugnación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la disposición referida, alegando una violación a los principios de disponibilidad pública de información:

“En esencia, que el cuarto párrafo del artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vulnera los derechos de acceso a la información y máxima publicidad al prever una reserva absoluta, indeterminada y previa de toda la información contenida en las bases de datos del Sistema Nacional de Información, así como por la prohibición para que el público acceda a dicha información, lo cual imposibilita de manera indiscriminada el suministro de cualquier tipo de información al público, pues bajo ninguna circunstancia los gobernados podrán solicitar datos respecto a los registros nacionales.”

“Tal restricción se traduce en una medida absoluta de carácter desproporcional, que no permite analizar qué información deberá ser catalogada como reservada y cual tendrá el carácter de pública, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”

Entrando al análisis de la cuestión, los razonamientos de la Suprema Corte de Justicia, consideran que la seguridad pública, de hecho, constituye un criterio objetivo para instaurar reservas de información por motivos de interés público inherentes a ella; sin embargo, refiriéndose a la existencia de reservas absolutas de información en la Ley, previene lo siguiente:

“De conformidad con el artículo 6o. constitucional, no es posible establecer reservas de información ex ante de carácter absoluto, sino que, atendiendo al principio de máxima publicidad,

la reserva será válida, siempre y cuando atienda a las finalidades previstas en la Constitución y sea proporcional y congruente con los principios que se intentan proteger.”

“La actualización de una reserva por comprometer la seguridad pública, como supuesto válido para limitar el acceso a la información, no implica que se pueda establecer a nivel legislativo de manera automática que toda información contenida en los expedientes y bases de datos se tenga como reservada, sino que debe hacerse atendiendo al daño que se pueda generar, sin olvidar que ésta debe ser debidamente fundada, motivada y en ella debe establecerse el nexo probable, presente o específico entre la revelación de la información y el menoscabo de un derecho o riesgo que representa. Ello, pues puede existir información que, a pesar de estar relacionada con la seguridad pública, no deba ser reservada, ya que su divulgación no es susceptible de ocasionar algún daño.”

Las consideraciones anteriores llevan a concluir que:

“La reserva previa resulta contraria al principio de máxima publicidad y es sobreinclusiva, toda vez que presupone categorías de información que no debe ser entregada sin que se lleve a cabo una prueba de daño.”

En lo tocante a la prueba de daño, se refiere que la normatividad de Transparencia colma los lineamientos para establecerla:

“En efecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en sus artículos 100, 103, 104, 108 y 114, exige para poder configurar información como reservada, además de la realización de un examen casuístico y de justificación fundado y motivado, se desarrolle la aplicación de una prueba de daño; entendido esto como el estándar que implica ponderar la divulgación de la información frente a la actualización de un posible daño al interés o principio que se busca proteger.”

Al analizar de forma interrelacionada a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley General de Transparencia, se concluye que:

“Esa clasificación de información como reservada sólo será válida en la medida en que la autoridad verifique la prueba de daño a que se refiere el artículo 114 de la referida Ley General de Transparencia, el cual señala que “Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.””

Por lo tanto, el citado artículo 110 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, si reúne las condiciones para establecer los supuestos bajo los que la autoridad podrá clasificar como reservada cierta información; sin embargo, las autoridades en materia de seguridad pública, no están exentas de respetar los principios de acceso a la información y máxima publicidad contenidos en el artículo 6º Constitucional. Razones por las cuales se resolvió declarar inconstitucional la porción normativa aludida.⁽¹⁾

⁽¹⁾Citas de: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 66/2019. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Junio 2021. En: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622593&fecha=30/06/2021

Se debe observar entonces, que esa misma disposición se encuentra en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, ya que fue adicionada el 24 de mayo del 2018, con motivos de armonización en el uso de información de las bases de datos de seguridad:

ARTICULO 93 Bis. Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las bases de datos del sistema, y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternativas y formas de terminación anticipada, sentenciados, y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga. (énfasis añadido)

Por lo tanto, se impone como necesario ajustar la Ley local a lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia, y realizar así una nueva adecuación que garantice la observación del marco constitucional.

No es óbice señalar que dicha reforma debe de realizarse a la brevedad para estar en condiciones de cumplir con lo mandado por la Suprema Corte de Justicia, y procurar que nuestras Leyes se apeguen a los principios Constitucionales. Por todo ello, se propone derogar la última parte del citado artículo 93 Bis de la Ley del Sistema de Seguridad del Estado, referida a la consulta exclusiva de las bases de datos.

Con base en los motivos expuestos, presento a consideración de este honorable pleno el siguiente:



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el artículo 93 BIS de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

TITULO NOVENO

DE LA INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA

Capítulo I

Disposiciones Preliminares

ARTICULO 93 Bis. Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las bases de datos del sistema, y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados, y las demás necesarias para la operación del Sistema. **DEROGADO**

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Plan de San Luis” del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Secretaria: iniciativa, que impulsa reformar el artículo 93 BIS de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; legislador Rubén Guajardo Barrera, 25 de marzo del presente año.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Presidenta: se turna a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

El legislador Rubén Guajardo Barrera presenta la décima séptima iniciativa.

INICIATIVA DÉCIMA SÉPTIMA

CC. DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ LXIII LEGISLATURA.

PRESENTES.

Rubén Guajardo Barrera, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Sexagésima Tercera Legislatura, con fundamento en los artículos, 131 fracción IV, y 133, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 61, y 71, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa iniciativa con Proyecto de Decreto que propone diversas reformar los artículos 6º y 20 de la Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. Asimismo, establece que, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes señalen para permanecer en dichas instituciones.

En los procesos de evaluación y en su caso, de procedimientos sancionadores por no acreditar de manera satisfactoria dichas evaluaciones, deben observarse por supuesto, los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, además de verificar que se cumplan principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.

La autoridad en todo momento debe actuar bajo las condiciones y en observancia de lo que la Ley dispone. Es por ello que, es importante establecer la temporalidad dentro de la que de manera razonable, la autoridad competente de cada una de las instituciones deben en su caso, instaurar el inicio de los procedimientos sancionadores en contra de los elementos que no acrediten alguno de

los exámenes de control de confianza. Es así que se propone la adición al vigente artículo 20 de la Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí, de tal forma que se determine un plazo perentorio que será de la más estricta responsabilidad de los titulares de las instituciones de seguridad, para que den inicio al procedimiento, evitando con ello excepciones de prescripción que en la práctica tienen como resultado dejar sin efecto los procedimientos de separación de elementos que no cumplieron con la evaluación.

Por otra parte, y en aras de dar seguridad jurídica a quienes intervienen en estos procesos, tanto instituciones como elementos de seguridad, se propone adicionar un párrafo al artículo 6º del mismo ordenamiento legal, con el fin de precisar que en todos los casos, en los resultados de las pruebas practicadas, se identifique al personal que lleva a cabo dada una de ellas, de tal forma que, ante la controversia derivada de la separación, y en el evento de que una o más de las pruebas sean impugnadas, éstas puedan ser ratificadas por quien las llevó a cabo. Lo anterior en virtud de que actualmente al no identificarse al personal que las aplica, los procedimientos sancionadores son anulados.

A continuación, se expresa el sentido de la iniciativa a manera de cuadro comparativo

Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí

Vigente	Propuesta
<p>ARTÍCULO 6º. El proceso de evaluación y control de confianza es aquel que se aplica a los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privada del Estado, con fines de ingreso, permanencia, promoción y periódicas, para la identificación de fortalezas y riesgos que incidan en el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	<p>ARTÍCULO 6º. ...</p>

<p>Los procesos de evaluación, de forma general, tendrán por objeto acreditar que los servidores públicos y elementos de empresas de seguridad privada, cumplen con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, y son los siguientes:</p> <p>I...</p> <p>II...</p> <p>III...</p> <p>IV...</p> <p>ARTÍCULO 20. Una vez que las instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privadas, reciban los resultados de las evaluaciones practicadas a su personal, y cuando en el caso resulte procedente aplicar alguna sanción derivada del resultado de las mismas, atenderán a lo dispuesto en el numeral 11 de la presente Ley, e iniciarán los procedimientos administrativos</p>	<p>...</p> <p>I...</p> <p>II...</p> <p>III...</p> <p>IV...</p> <p>En cada uno de los resultados de las pruebas practicadas, deberá asentarse los datos de identificación del personal que las aplique.</p> <p>ARTÍCULO 20. Una vez que las instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privadas, reciban los resultados de las evaluaciones practicadas a su personal, y cuando en el caso resulte procedente aplicar alguna sanción derivada del resultado de las mismas, atenderán a lo dispuesto en el numeral 11 de la presente Ley, e iniciarán bajo su más estricta responsabilidad los procedimientos administrativos</p>
---	---



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

correspondientes dentro de los términos establecidos en la legislación aplicables.

correspondientes dentro de los siguientes tres meses contados a partir de la recepción de los resultados.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esa Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se ADICIONA párrafo al artículo 6º y se REFORMA el artículo 20 de la Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 6º. ...

...

I...

II...

III...

IV...

En cada uno de los resultados de las pruebas practicadas, deberá asentarse los datos de identificación del personal que las aplique.

ARTÍCULO 20. Una vez que las instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privadas, reciban los resultados de las evaluaciones practicadas a su personal, y cuando en el caso resulte procedente aplicar alguna sanción derivada del resultado de las mismas, atenderán a lo dispuesto en el numeral 11 de la presente Ley, e iniciarán bajo su más estricta responsabilidad los procedimientos administrativos correspondientes dentro de los siguientes tres meses contados a partir de la recepción de los resultados.

TRANSITORIOS



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

Rubén Guajardo Barrera: muchísimas gracias Presidenta, amigas y amigos compañeros diputados, los medios de comunicación y todos los que nos dan seguimiento, estoy presentando una iniciativa que busca reformar el artículo 6º y 20 de la Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí, la finalidad de establecer que para que el proceso de evaluación y control y confianza en cada uno de los resultados de las pruebas practicadas, deberán colocarse los datos de identificación del personal que aplique, y que una vez que se reciben los resultados las autoridades iniciarán bajo su más estricta responsabilidad, los procedimientos administrativos correspondientes dentro de los siguientes tres meses, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de Seguridad Pública, si no ha sido debidamente certificado, de igual manera se establece que podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes señalen para permanecer en dicha instituciones, actualmente los procesos de evaluación y en su caso de procedimientos sancionadores, por no acreditar de manera satisfactoria dichas evaluaciones, deben observarse los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación; además de verificar que se cumplan principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, la autoridad por su parte, en todo momento debe actuar bajo las condiciones de observancia de lo que la ley dispone.

Es por ello, que es importante establecer la temporalidad dentro de la que de manera razonable, la autoridad competente de cada una de instituciones debe en su caso instaurar el inicio de procedimiento sancionador en contra de los elementos que no acrediten alguno de los exámenes de control y confianza, puesto que actualmente la ley carece de disposiciones expresas sobre los plazos para realizar tales actos, esta iniciativa busca determinar un plazo definitivo, que será de la más estricta responsabilidad de los titulares de las instituciones de seguridad, para que den inicio al procedimiento evitando con ello excepciones de prescripción que en la práctica tienen como resultado dejar sin efecto los procedimientos de separación de elementos que no cumplieron con la evalúe.

Por otra parte, en aras de dar seguridad jurídica a quienes intervienen en estos procesos, tanto instituciones como elementos de seguridad, se propone adicionar un párrafo en el artículo 6º del mismo ordenamiento legal, con el fin de precisar que en todos los casos en los resultados de las



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

pruebas practicadas, se identifiquen al personal que lleve a cabo una de ellas, de tal forma que ante la controversia derivada de la separación y en el evento de que una o más de las pruebas sean impugnadas, éstas puedan ser ratificadas, por su atención muchísimas.

Presidenta: se turna a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

Formula la décima octava iniciativa la legisladora Liliana Guadalupe Flores Almazán.

INICIATIVA DÉCIMA OCTAVA

CIUDADANAS Y CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Presentes.

Teniendo como fundamento lo que establecen los artículos 61 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; el 130 y el 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de nuestro Estado; y el 61, 62, y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de nuestro Estado, **Liliana Guadalupe Flores Almazán, Diputada Local por el Décimo Tercer Distrito local en la Sexagésima Tercera Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional**, me permito presentar a la digna consideración de esta Honorable Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que plantea **ADICIONAR segundo párrafo al artículo 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, REFORMAR último párrafo del artículo 99 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, y REFORMAR último párrafo del artículo 27 de la Ley de Servicios de Seguridad Privada para el Estado de San Luis Potosí.** Con el objeto de:

Retirar el arma de cargo y/o aquellas que tenga registradas, a la persona agresora de mujeres, cuando pertenezca a una corporación de seguridad en el estado, sea pública o privada.

Lo anterior se justifica con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Lamentablemente las agresiones a mujeres en nuestro estado, se han incrementado en los últimos años, según la Auditoría Superior de la Federación entre 2010 y 2019, San Luis Potosí está en el sexto sitio de casos de mujeres víctimas de agresiones entre las entidades federativas, con un total de 28 mil 001 denuncias.

Respecto al número de personas que han sido denunciadas por cometer agresiones a mujeres en nuestro estado, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) tiene contabilizado en la Entidad a 28 mil 578 personas identificadas como agresoras de mujeres, y el ocupa el quinto lugar más alto entre las entidades federativas; en entre los agresores 2 mil 379 son hombres, mil 522 mujeres y cuatro mil 677 no fueron identificados.⁽¹⁾

Sobre los feminicidios, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, San Luis Potosí contabilizó el año 2021, 24 feminicidios, ubicándose en el lugar 15 de las Entidades del país, y por encima de la media estadística; mientras que San Luis Potosí capital, se encuentra en el lugar número 16 de los Municipios con más feminicidios de todo el país.⁽²⁾

Como se puede apreciar, San Luis Potosí es un estado que tiene una alta incidencia de agresiones contra las mujeres, que en casos llega hasta el feminicidio; estamos en condiciones de afirmar que nuestra entidad, tiene mucho por hacer para mejorar las condiciones de las mujeres y garantizar su vida y su integridad física.

De entre todos los elementos que forman el complejo entramado de la violencia contra las mujeres en nuestro país, en este instrumento legislativo se busca resaltar las armas, ya que según el informe Violencia de género con armas de fuego en México, publicado en octubre de 2021, y realizado por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, la violencia con armas de fuego contra mujeres ha escalado en los últimos años, y *“pasó de 3 de cada 10 mujeres asesinadas por esta vía a seis”*, argumentan también que estos hechos traen, *“no sólo es para la mujer asesinada, sino para el entorno familiar, pues los menores que quedan huérfanos y en condiciones de vulnerabilidad.”*⁽³⁾

⁽¹⁾Con información de: <https://pulsoslp.com.mx/slp/san-luis-sexto-en-agresiones-vs-mujeres/1270078>

⁽²⁾Estadísticas en: <https://drive.google.com/file/d/1btj0rWQjln3mlUKXcKrAxxhSHPoOe58T6/view>

⁽³⁾Con información de: <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/19/politica/se-duplico-el-numero-de-feminicidios-con-arma-de-fuego/>

La disponibilidad de armas ilegales que pudieran usarse en hechos de este tipo, es una materia de seguridad pública, que por su naturaleza ofrece distintos retos, sin embargo, lo que se puede hacer es prevenir las agresiones contra mujeres, que por su naturaleza son potencialmente letales, realizadas con armas legales.

Con este mismo sentido, en el año 2021, se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para fijar que las autoridades tendrían la obligación de retirar las armas de cargo, a los elementos del ejército y corporaciones de seguridad, que cometieran agresiones contra las mujeres; una medida que sin duda puede prevenir feminicidios, y que se pretende replicar en la Legislación local, pero con nuevas adiciones.

Primeramente, la medida aplicaría sobre los elementos de las corporaciones de seguridad, estatales o municipales, elementos de seguridad privada, y personas que cuenten con licencia particular individual de portación de arma de fuego para personas físicas, y la autoridad facultada para el decomiso, sería la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En cuanto a la naturaleza legal de esta atribución, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, en su artículo 99 crea el Registro de Personal de Seguridad Pública que contiene información relevante:

ARTICULO 99. El Registro de Personal de Seguridad Pública contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado y municipios; así como el perteneciente a empresas de seguridad privada; el cual contendrá, por lo menos:

- I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, huellas digitales, fotografía, escolaridad, y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública;*
- II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, y*
- III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que los motivaron.*

Por lo que es la autoridad competente para el control de los elementos; así mismo vale la pena señalar el último párrafo de ese artículo referente a la inclusión de diversos elementos en el registro de los elementos de seguridad:



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Cuando a los integrantes de las instituciones de seguridad pública se les dicte cualquier auto de sujeción a proceso, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se actualizará inmediatamente en el Registro.

En virtud de que las incidencias que afecten a los elementos de seguridad tienen que registrarse, se propone que se tenga que registrar también el retiro del arma de cargo, a causa de agresión contra mujeres.

En lo tocante a los elementos de seguridad privada, la Ley de Servicios de Seguridad Privada para el Estado de San Luis Potosí, contempla atribuciones de vigilancia y sanciones para este personal, por parte de la Secretaría de Seguridad, en su artículo 12 fracciones diversas, que también le confieren autoridad sobre el equipo utilizado:

ARTICULO 12. La Secretaría, además de las facultades que señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, tendrá las siguientes facultades en materia de seguridad privada:

V. Comprobar que el personal operativo se encuentre debidamente capacitado, así como concertar con el prestador de servicios, la instrumentación y modificación de sus planes y programas de capacitación y adiestramiento;

V. Determinar las sanciones que procedan, por el incumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley y su Reglamento;

XII. Vigilar y verificar las acciones de las personas físicas o morales que presten servicios de seguridad privada; sus sistemas de operación; programas de selección, formación, capacitación y adiestramiento de personal; uso apropiado de arma de fuego, equipo y vehículos;

Por tanto la Secretaría de Seguridad es la autoridad aplicable para realizar el retiro de armas que mandata la Ley General. Además, al igual que para los elementos de seguridad pública, existe un registro para los miembros de seguridad privada, según el artículo 24 de la Ley correspondiente, y que en el último párrafo del numeral 27, debe incluir sanciones y otras incidencias:

ARTICULO 27. El Registro deberá contemplar los apartados siguientes:

...

Cuando al personal directivo, administrativo u operativo se le dicte cualquier auto de sujeción a proceso, sentencia condenatoria o absolutoria, la autoridad que conozca del caso respectivo lo



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

notificará de inmediato al Registro. En el caso de que sea dictado un auto de procesamiento con motivo de sus funciones, se procederá de inmediato a la suspensión laboral.

De manera que se propone que, igualmente que a los agentes de seguridad pública, se tenga que registrar el retiro del arma por agresión a mujeres. Esas disposiciones, se posibilitarían con adiciones a cada Ley respectiva.

Es necesario reforzar las medidas en lo necesario para prevenir más hechos lamentables y acompañar los esfuerzos que las autoridades en materias de seguridad y de política social realizan para que nuestro estado pueda abatir la alta incidencia de violencia contra las mujeres.

Con base en los motivos expuestos, presento a consideración de este honorable Pleno, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se ADICIONA segundo párrafo al artículo 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí; para quedar como sigue:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

TÍTULO SÉPTIMO

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO I

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 35. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes, valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior, con motivo de los juicios o procesos que, en materia civil, familiar, penal o electoral, se estén ventilando en los tribunales competentes.

Corresponderá a la Secretaría de Seguridad del Estado, retirar el arma de cargo y/o aquellas que tenga registradas, a la persona agresora, cuando pertenezca a una corporación de seguridad en el estado, sea pública o privada. Así mismo, le corresponde retirar el arma o armas que pudieran estar en posesión de individuos que cuenten con licencia particular individual de portación de arma de fuego para personas físicas.

SEGUNDO. Se REFORMA último párrafo del artículo 99 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, para quedar de la siguiente manera:

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

TITULO NOVENO

DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA

Capítulo III

Del Registro de Personal de Seguridad Pública

ARTICULO 99. El Registro de Personal de Seguridad Pública contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado y municipios; así como el perteneciente a empresas de seguridad privada; el cual contendrá, por lo menos:

1. a III. ... ;

Cuando a los integrantes de las instituciones de seguridad pública se les dicte cualquier auto de sujeción a proceso, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se actualizará inmediatamente en el Registro; **incluyendo el retiro del arma de cargo, bajo los términos previstos por el artículo 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.**

TERCERO. Se REFORMA último párrafo del artículo 27 de la Ley de Servicios de Seguridad Privada para el Estado de San Luis Potosí, para quedar de la siguiente manera:



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

LEY DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Capítulo IV

Del Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada

ARTICULO 27. El Registro deberá contemplar los apartados siguientes:

I. a XII. ... ;

Cuando al personal directivo, administrativo u operativo se le dicte cualquier auto de sujeción a proceso, sentencia condenatoria o absolutoria, la autoridad que conozca del caso respectivo lo notificará de inmediato al Registro. En el caso de que sea dictado un auto de procesamiento con motivo de sus funciones, se procederá de inmediato a la suspensión laboral; **incluyendo el retiro del arma de cargo, bajo los términos previstos por el artículo 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.**

TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en la presente Ley.

Liliana Guadalupe Flores Almazán: muchas gracias, con su venia diputada Presidenta, con el permiso de mis compañeros diputados y diputadas, y los presentes en este día, presentó ante este Honorable Pleno la iniciativa que busca adicionar un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de retirar el arma de cargo y/o aquellas que tengan registradas a la persona agresora de mujeres, cuando pertenezca a una corporación de seguridad en el estado, sea pública o privada, lamentablemente las agresiones a mujeres en nuestro estado se han incrementado en los últimos años, según la Auditoría Superior de la Federación, entre 2010 y el año 2019, San Luis Potosí se



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

encontró en el sexto sitio de casos de mujeres víctimas de agresiones, entre las entidades federativas con más de 28,000 denuncias, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, San Luis Potosí contabilizó en el año 2021, 24 feminicidios, ubicándose en el lugar 15 de las entidades del país y por encima de la media estadística, mientras que San Luis Potosí, Capital, se encuentra en el lugar número 16 de los municipios con más feminicidios en todo el país, cifras alarmantes.

Respecto a la violencia con armas de fuego, según el informe, Violencia de Género con Armas de Fuego en México, el cual fue publicado en octubre del año 2021, y realizado por varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos, la violencia con armas de fuego pasó de 3 de cada 10 mujeres asesinadas por esta vía, a 6 de cada 10, la disponibilidad de armas ilegales que pudiera usarse en hechos de este tipo, es una materia de Seguridad Pública, pero también es urgente prevenir los ataques con armas legales; por ello, en 2021 se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para fijar que las autoridades tendrían la obligación de retirar las armas de cargo a los elementos del ejército y corporaciones de seguridad, que cometieran agresiones contra las mujeres, el propósito de esta iniciativa es replicar esta disposición, además de adicionar elementos nuevos, se propone por tanto, que esta medida aplique sobre los elementos de las corporaciones de seguridad estatales o municipales, elementos de seguridad privada y personas que cuenten con licencia particular individual de portación de armas de fuego para personas físicas, y la autoridad facultada para el decomiso sería la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Además de lo anterior, se propone que se tenga que registrar también el retiro del arma de cargo a causa de agresión contra mujeres, tanto en el registro de personal de Seguridad Pública, como en el correspondiente a los elementos de seguridad privada, en virtud de que estas bases de datos tienen que dar cuenta de las incidencias relativas a los elementos, frente a la violencia contra las mujeres es necesario reforzar las medidas legislativas, para prevenir más hechos lamentables y acompañar los esfuerzos que las autoridades en materia de seguridad y en política social realizan, para que nuestro estado pueda abatir la alta incidencia de violencia contra las mujeres, es cuanto.

Entra en funciones la Segunda Vicepresidenta legisladora Cinthia Verónica Segovia Colunga: se turna a la comisiones de, Derechos Humanos, Igualdad y Género; y Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

Segunda Secretaria lea la última iniciativa de esta Sesión Ordinaria.



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

INICIATIVA DÉCIMA NOVENA

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

PRESENTES.

LIC. JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con fundamento en los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 61, 62, 64 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, propongo a consideración de esa Soberanía, **la iniciativa con proyecto de decreto que propone adicionar el inciso t) a la fracción III del artículo 12 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí**, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, expedida por el Congreso del Estado, a través del Decreto Legislativo 202, tiene por objeto establecer en dicha materia, las acciones de concurrencia que corresponden al Estado y Municipios.

La vigente Ley de las Personas Adultas, en su numeral 12, contempla que el Estado, debe contar con un Consejo Interinstitucional Gerontológico, conformado por diversas instituciones de la administración pública, a saber:

I. Presidente: Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Presidente;

II. Secretaria Técnica: cuya designación es determinada por los miembros del Consejo;

III. Los siguientes vocales:

Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

<i>a) Titular de la Secretaría de Salud.</i>	<i>b) Titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.</i>	<i>c) Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.</i>
<i>d) Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.</i>	<i>e) Titular de la Delegación del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores.</i>	<i>f) Titular de la Dirección del Instituto Estatal de Educación para Adultos.</i>
<i>g) Titular de la Secretaría de Finanzas.</i>	<i>h) Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado.</i>	<i>i) Las presidencias de las comisiones de grupos vulnerables de los ayuntamientos, que representen a cada una de las cuatro regiones del Estado.</i>
<i>(j) Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humano.</i>	<i>k) Titular del Instituto de las Mujeres del Estado.</i>	<i>l) Titular del Consejo Estatal de Población.</i>
<i>(m) Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.</i>	<i>n) titular de la Secretaria de Cultura</i>	<i>o) titular de la Secretaria del Trabajo</i>
<i>p) titular del Instituto Potosino del Deporte</i>	<i>q) Tres personas adultas mayores, conforme a lo establecido en el reglamento de la presente Ley, y avaladas por del</i>	<i>(r) Dos representantes de organismos no gubernamentales dedicados a la atención de las personas adultas mayores, que serán designadas entre ellos</i>

Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

	<p><i>Delegado del INAPAM; y el Presidente del Consejo.</i></p>	<p><i>mismos. Las vocalías a que se refiere los incisos q) y r) de esta fracción, durarán en su encargo tres años, contados a partir de la fecha de su designación; y podrán ser reelectas para un solo periodo.</i></p>
<p><i>s) Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado.</i></p>		

(sic).

El citado Consejo, tiene como objetivo aglutinar y dar seguimiento a las acciones que las diversas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado realicen en materia geronto geriátrica, así como plantear y analizar la problemática que exista en cada uno de los municipios del Estado, con la finalidad de proponer coordinadamente políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores.

Ahora bien, a criterio del Poder Ejecutivo del Estado, se considera necesaria la inclusión como vocal en dicho Consejo, a la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, ello, por estimar que vendría a coadyuvar en la toma colegiada de decisiones, sin detrimento de los servicios de orientación, asesoría, información y gestión jurídica a las personas adultas mayores que actualmente brinda la aludida Procuraduría.

Lo anterior permitirá que la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, quien, al tener con motivo de sus funciones, conocimiento e intervención de las problemáticas que se



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

presentan con los adultos mayores, puede aportar al Consejo, sus experiencias y conocimientos para fortalecer las políticas públicas que se originan en el seno del mencionado Consejo.

El artículo 19, párrafo tercero, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, establece que las iniciativas de ley o de Decreto que se presenten a la consideración del Congreso del Estado, deberán de ir acompañadas por una evaluación del impacto presupuestario, al respecto, les comunico que esta iniciativa no implica costos para su implementación, pues versa únicamente en la inclusión de un organismo público ya existente al multicitado Consejo, cuyos miembros no perciben remuneración, emolumento o gratificación alguna, por el ejercicio de su cargo, como lo prevé el vigente numeral 13 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en sus artículos 61, 137, 138 y 130 respectivamente, le confieren al Gobernador Constitucional del Estado, la facultad para iniciar o modificar Leyes ante el Congreso Local, en ese tenor, se somete a la consideración, discusión y en su caso aprobación de la Honorable Legislatura del Estado, la presente iniciativa para adicionar el inciso t) a la fracción III del artículo 12 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, con base en el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se adiciona un inciso t) a la fracción III del artículo 12 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 12. ...

I a II ...

III. ...

a) a s) ...

t) Titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

SEGUNDO. El Consejo Interinstitucional Gerontológico, de considerarse necesario, deberá modificar su Reglamento Interno de conformidad con el numeral 14, fracción VIII de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado.

TERCERO. Se entenderán derogadas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Secretaria: iniciativa, que pretende adicionar el inciso t) a la fracción III del artículo 12 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí; Gobernador Constitucional del Estado, sin fecha, recibida el 28 de marzo del año en curso.

Vicepresidenta: se turna a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género.

Proseguimos esta sesión ordinaria; disposiciones reglamentarias de esta Soberanía permiten no leer los cuatro dictámenes enlistados; Primera Secretaria por favor consulte si se dispensa la lectura de éstos.

Secretaria: consulto si se dispensa la lectura de los dictámenes; quienes estén por la afirmativa, ponerse de pie; quienes estén por la negativa, ponerse de pie; MAYORÍA por la afirmativa.

Vicepresidenta: se dispensa la lectura de los cuatro dictámenes por MAYORÍA.

Entra en funciones la Presidenta legisladora Yolanda Josefina Cepeda Echavarría: el dictamen número uno con Proyecto de Decreto de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, tiene la palabra alguno de sus integrantes para presentarlo; ¿quién lo hará?; tiene la palabra el diputado José Antonio Lorca Valle.

DICTAMEN UNO

CC. DIPUTADAS SECRETARIAS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

PRESENTES.

A la Comisión de Desarrollo Económico y Social, se dio cuenta en Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre del año 2021, de la iniciativa con el número de **turno 702**, que busca reformar el artículo



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

102 de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí; presentada por la Legisladora María Aranzazu Puente Bustindui.

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión que suscribe el presente, verificaron la viabilidad y legalidad de la Iniciativa referida para llegar a los siguientes

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades que no están expresamente concedidas por ésta a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

En ese tenor, las disposiciones contenidas en los artículos, 73, 74 y 76, de la Constitución de la República, no se desprende facultad exclusiva del Congreso de la Unión o de sus respectivas Cámaras, para legislar en la materia y en los términos que se refieren en la iniciativa citada.

SEGUNDO. Que en el ámbito local los artículos, 57 fracciones, I, y XLVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y 15 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, establecen como atribuciones del Congreso del Estado, las de dictar, abrogar y derogar leyes en el ámbito de su competencia, así como las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local y las leyes que de ellas emanen le atribuyan.

TERCERO. Que con base en los artículos, 1º, y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, fracciones, I, y XLVIII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 98 fracción VI, y 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, compete al Congreso del Estado, por conducto de estas comisiones legislativas, resolver y dictaminar lo que de forma superviniente surja respecto de la Convocatoria precitada.

CUARTO. Que con base el artículo 86 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, se transcriben los argumentos que el promovente manifiesta en la exposición de motivos de su iniciativa y que a la letra dice:

Exposición de Motivos

“México y San Luis Potosí poseen una diversidad de ecosistemas, especies animales y vegetales, tradiciones, historia, monumentos, prodigios naturales y una genuina vocación hospitalaria en su gente, que los distinguen como lugares de los que sus habitantes podemos sentirnos profundamente orgullosos y, justamente por ello, el turismo es una fuente inmejorable para propiciar la divulgación de nuestra cultura, favorecer las inversiones, y detonar el desarrollo de nuestras regiones.

La política de promoción turística del Estado ha venido modificándose a través del tiempo. No sólo porque cada vez más existe mayor sensibilidad sobre la importancia de destinar cada vez más recursos a tan noble ramo, sino porque con el transcurrir de los años, hemos aprendido que si queremos aprovechar de forma estratégica y sostenible nuestros recursos, es necesario diseñar desde el Gobierno, en colaboración con la sociedad civil, las instituciones, los esquemas de operación, los programas y las acciones que permitan atender y vitalizar la oferta a México y el mundo, de San Luis Potosí como uno de los más importantes destinos turísticos.⁽¹⁾

⁽¹⁾Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, [Exposición de motivos], Mayo, 2021.
<https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2021/10/Ley de Turismo 08 May 2021.pdf>

En ese orden de ideas, resulta de suma importancia que la ley comentada se perfeccione conforme a los diversos acontecimientos suscitados día con día, desde la visión global que refiere la agenda 2030 en relación al turismo sustentable, hasta la parte normativa que regula la vida activa de todos los actores involucrados en el sector turístico, tanto autoridades, cómo prestadores de servicios y personas que tienen a bien visitar nuestro Estado.

Tomando en cuando lo señalado, es nuestra obligación como legisladores proporcionar a la sociedad potosina un marco legal que permita atender adecuadamente cada uno de los tópicos involucrados con el tema comentado, pues solo así se marcarán directrices puntuales que permitan atender puntual y adecuadamente la vida turística del Estado, lo anterior partiendo desde una base jurídica sólida y actualizada.

Bajo dicho contexto, la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, es el marco legal responsable de regular dentro de nuestro Estado la temática comentada en líneas que anteceden, ordenamiento jurídico que al día de hoy se encuentra desfasado en relación a las modificaciones que han acontecido dentro del marco legal que regula la vida jurídica de San Luis Potosí.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Si observamos el artículo 102 de la Ley comentada, podemos observar que esta hace alusión a la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, ordenamiento jurídico que hoy se encuentra sin vigencia.

En efecto, desde el 18 de julio de 2017, la última ley referida dejó de tener vigencia y dio paso en su lugar al Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, ordenamiento que sustituyó a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y la Ley de Justicia Administrativa del Estado, ello a razón de atender al principio de economía y simplificación administrativa, por lo cual se llegó a la conveniencia de unificar esos procedimientos tanto administrativos como contenciosos en un solo cuerpo normativo en la figura de un Código Procesal Administrativo que les revista mayor congruencia y homogeneidad; simplifique términos y etapas, y facilite la aplicación de los mismos.

En ese orden de ideas, resulta evidente la necesidad de actualizar la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, ello mediante la modificación de su artículo 102, añadiendo al mismo, en sustitución de los ordenamientos sin vigencia previamente señalados, al Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, lo cual evitará lagunas jurídicas en cuanto a la aplicación de la materia administrativa contemplada en el marco normativo comentado”.

QUINTO. Que para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 86 fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, es que se transcribe el contenido íntegro de la iniciativa, además de la propuesta de proyecto de Decreto, que a la letra dice:

Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí (Texto normativo actual)	Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí (Texto normativo propuesto)
<p>ARTICULO 102. Contra los actos y resoluciones dictados por la Secretaría, procederán el recurso de revisión previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p>	<p>ARTICULO 102. Contra los actos y resoluciones dictados por la Secretaría, procederán el recurso de revisión previsto en el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.</p>

SEXTO. La Comisión dictaminadora considera importante señalar lo siguiente:

1. Que efectivamente la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, es el marco legal responsable de regular dentro de nuestro Estado la divulgación de nuestra cultura, favorecer las inversiones y detonar el desarrollo de nuestras regiones en el ámbito turístico.
2. Que el artículo 102 de la Ley comentada, se observa que esta hace alusión a la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, ordenamiento jurídico que hoy se encuentra sin vigencia.

Concatenado a lo anterior, es dable mencionar que el 18 de julio de 2017, la última ley referida dejó de tener vigencia y dio paso en su lugar al Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, ordenamiento que sustituyó a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y la Ley de Justicia Administrativa del Estado, ello a razón de atender al principio de economía y simplificación administrativa, por lo cual se llegó a la conveniencia de unificar esos procedimientos tanto administrativos como contenciosos en un solo cuerpo normativo en la figura de un Código Procesal Administrativo que les revista mayor congruencia y homogeneidad ; simplifique términos y etapas, y facilite la aplicación de los mismos.

En tal sentido, es menester de esta Comisión, establecer coherencia legislativa al realizar la modificación que propone la que argumenta, pues con ello no sólo se da lugar a la armonización legislativa, sino además se le da mayor certeza jurídica a quienes son los operadores de la norma jurídica en nuestra Entidad.

Con fundamento en lo establecido por los artículos, 75, 85, 86, 143 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, elevamos a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

D I C T A M E N

ÚNICO. Es de aprobarse y, se aprueba la iniciativa descrita en el preámbulo.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México y San Luis Potosí poseen una diversidad de ecosistemas, especies animales y vegetales, tradiciones, historia, monumentos, prodigios naturales y una genuina vocación hospitalaria en su gente, que los distinguen como lugares de los que sus habitantes podemos sentirnos profundamente orgullosos y, justamente por ello, el turismo es una fuente inmejorable para propiciar la divulgación de nuestra cultura, favorecer las inversiones, y detonar el desarrollo de nuestras regiones.

La política de promoción turística del Estado ha venido modificándose a través del tiempo. No sólo porque cada vez más existe mayor sensibilidad sobre la importancia de destinar cada vez más recursos a tan noble ramo, sino porque con el transcurrir de los años, hemos aprendido que si queremos aprovechar de forma estratégica y sostenible nuestros recursos, es necesario diseñar desde el Gobierno, en colaboración con la sociedad civil, las instituciones, los esquemas de operación, los programas y las acciones que permitan atender y vitalizar la oferta a México y el mundo, de San Luis Potosí como uno de los más importantes destinos turísticos.⁽²⁾

⁽²⁾Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, [Exposición de motivos], Mayo, 2021.
https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2021/10/Ley_de_Turismo_08_May_2021.pdf

En ese orden de ideas, resulta de suma importancia que la ley comentada se perfeccione conforme a los diversos acontecimientos suscitados día con día, desde la visión global que refiere la agenda 2030 en relación al turismo sustentable, hasta la parte normativa que regula la vida activa de todos los actores involucrados en el sector turístico, tanto autoridades, como prestadores de servicios y personas que tienen a bien visitar nuestro Estado.

Tomando en cuando lo señalado, es nuestra obligación como legisladores proporcionar a la sociedad potosina un marco legal que permita atender adecuadamente cada uno de los tópicos involucrados con el tema comentado, pues solo así se marcarán directrices puntuales que permitan atender puntual y adecuadamente la vida turística del Estado, lo anterior partiendo desde una base jurídica sólida y actualizada.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Bajo dicho contexto, la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, es el marco legal responsable de regular dentro de nuestro Estado la temática comentada en líneas que anteceden, ordenamiento jurídico que al día de hoy se encuentra desfasado en relación a las modificaciones que han acontecido dentro del marco legal que regula la vida jurídica de San Luis Potosí.

Si observamos el artículo 102 de la Ley comentada, podemos observar que esta hace alusión a la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, ordenamiento jurídico que hoy se encuentra sin vigencia.

En efecto, desde el 18 de julio de 2017, la última ley referida dejó de tener vigencia y dio paso en su lugar al Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, ordenamiento que sustituyó a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y la Ley de Justicia Administrativa del Estado, ello a razón de atender al principio de economía y simplificación administrativa, por lo cual se llegó a la conveniencia de unificar esos procedimientos tanto administrativos como contenciosos en un solo cuerpo normativo en la figura de un Código Procesal Administrativo que les revista mayor congruencia y homogeneidad; simplifique términos y etapas, y facilite la aplicación de los mismos.

En ese orden de ideas, resulta evidente la necesidad de actualizar la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, ello mediante la presente reforma al artículo 102, sustituyéndolo por el ordenamiento vigente, lo cual evitará lagunas jurídicas en cuanto a la aplicación de la materia administrativa contemplada en el marco normativo comentado.

PROYECTO

DE

DECRETO

ÚNICO. Se **REFORMA** el artículo 102 de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí; para quedar como sigue

ARTÍCULO 102. Contra los actos y resoluciones dictados por la Secretaría, procederán el recurso de revisión previsto en el **Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí**.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Plan de San Luis” del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

DADO EN LA SALA “LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA” DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

José Antonio Lorca Valle: gracias, con su permiso otra vez, esta iniciativa la presento la legisladora María Aránzazu Puentes Bustindui, y me pidió hacer el favor de presentarla, nada más el objetivo es armonizar el artículo 102 de la Ley de Turismo del Estado San Luis Potosí, lo anterior tiene la finalidad de establecer coherencia legislativa al realizar la modificación que propone, la que argumenta, pues con ello no sólo se da lugar a la armonización legislativa, sino además, se le da mayor certeza jurídica a quienes son los operadores de la norma jurídica en nuestra sociedad, por eso que vamos a favor de ella, es una armonización, es todo, muchas gracias.

Presidenta: enseguida los grupos parlamentarios y representaciones parlamentarias, fijar posturas en cuanto al dictamen número uno, ¿alguien más participara?; Primera Secretaria haga el favor de inscribir a quienes vayan a intervenir en el debate.

Secretaria: dictamen número uno ¿alguien intervendrá?; no hay participaciones Presidenta.

Presidenta: sin discusión a votación nominal.

Secretaria: diputado Juan Francisco Aguilar Hernández; Edgar Alejandro Anaya Escobedo; Martha Patricia Aradillas Aradillas; José Luis Fernández Martínez; Lilita Guadalupe Flores Almazán;...;(continúa la lista); 25 votos a favor.

Presidenta: contabilizados 25 votos a favor; por UNANIMIDAD aprobado el Decreto que reforma el artículo 102 de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí; remítase al Ejecutivo del Estado para sus efectos constitucionales.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

En el dictamen número dos con Proyecto de Decreto de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, tiene la palabra alguno de sus integrantes para presentarlo; ¿quién lo hará?

Para fijar postura, se concede la palabra a los grupos parlamentarios y representaciones parlamentarias, por el Partido Verde Ecologista de México, interviene la legisladora Dolores Eliza García Román.

DICTAMEN DOS

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTES.

A la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, mediante TURNO 993, le fue enviada para su estudio y dictamen en Sesión Ordinaria del 11 de febrero de 2022, iniciativa que plantea REFORMAR la fracción III al artículo 62 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí, presentada por los Legisladores José Luis Fernández Martínez, Eloy Franklin Sarabia, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Roberto Ulises Mendoza Padrón, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Dolores Eliza García Román, Martha Patricia Aradillas Aradillas, René Oyarvide Ibarra, Cinthia Verónica Segovia Colunga y Salvador Isaías Rodríguez.

En tal virtud, al entrar al estudio y análisis del asunto planteado, los diputados que integran esta comisión, llegaron a los siguientes

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades que no están expresamente concedidas por dicha Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. En esa línea podemos advertir que de las disposiciones contenidas en los artículos 73, 74 y 76, de la referida Constitución de la República, no



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

se desprende facultad exclusiva del Congreso de la Unión o de sus respectivas Cámaras, para legislar en la materia de la iniciativa de cuenta.

Por su parte, la fracción I del artículo 57 de la Constitución Política Local, le confiere atribuciones al Congreso del Estado para dictar, derogar y abrogar leyes; en consecuencia, éste es competente para conocer y resolver sobre la propuesta que se describe en el preámbulo, a fin de resolver aprobando o desechando la misma.

SEGUNDO. Que los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado; y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, les conceden facultad de iniciativa a los diputados; por lo que, quienes promueven esta pieza legislativa tienen ese carácter y, por ende, con base en los preceptos citados están legitimados para hacerlo.

TERCERO. Que los numerales, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, establecen los requisitos que deben contener las iniciativas; por tanto, la propuesta de modificación que nos ocupa cumple tales requerimientos.

CUARTO. Que con fundamento en el artículo 115, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el órgano parlamentario a quien se le turnó esta propuesta, es competente para conocerla y resolver lo procedente sobre la misma.

QUINTO. Que, con el propósito de entender y comprender mejor el contenido de la iniciativa, disposiciones reglamentarias disponen incluir en el dictamen un cuadro comparativo mismo que se expresa a continuación:

Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí

TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA
<p>ARTÍCULO 62. Las coordinaciones Estatal y municipales en su caso, llevarán a cabo verificaciones de las condiciones de seguridad en bienes inmuebles, instalaciones y equipos, siguientes:</p> <p>1.- ...</p>	<p>ARTÍCULO 62. ...</p> <p>1.- ...</p>

<p>II.- ...</p> <p>III. Hospitales, maternidades, centros médicos, clínicas, puestos de socorro;</p> <p>IV. a XXIX ...</p>	<p>II.- ...</p> <p>III. Hospitales, maternidades, centros médicos, clínicas, Puestos de socorro, instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de adicciones;</p> <p>IV. a XXIX ...</p>
--	---

SEXTO. Que el promovente en su iniciativa hace valer la siguiente exposición de motivos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección civil es importante, debe de tener planes de acción ante alguna contingencia o siniestro, que ayuden a salir bien librada a la población ante alguna situación adversa. La protección civil o defensa civil se originó en el Tratado de Ginebra de 1949 para proteger a las víctimas de conflictos armados internacionales, complementando con ello el trabajo de la Cruz Roja.

Se llama protección civil a las actividades humanitarias que están dirigidas a proteger a la población ante el peligro de siniestros, para ayudarla en su preservación, recuperación y supervivencia.

La Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2000, define a la Protección Civil como: “Conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre”.

La Ley Estatal de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí, considera que la prevención en situación normal y el auxilio a la población en caso de emergencia, es responsabilidad del Estado, y corresponde atenderlos al Poder Ejecutivo a través del Sistema Estatal de Protección Civil y de la Coordinación Estatal, con la participación de los ayuntamientos y de las organizaciones de la sociedad civil, en los términos de esta Ley y de los reglamentos que de ella se deriven.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Los poderes, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, los organismos descentralizados, los sectores, privado y social, los grupos voluntarios y las personas residentes o en tránsito en el Estado, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.

En el citado ordenamiento estatal, en el artículo 62, del capítulo I denominado “De las verificaciones y medidas de seguridad”, se establece que las coordinaciones estatal y municipales e en su caso, llevarán a cabo verificaciones de las condiciones de seguridad en bienes inmuebles, instalaciones y equipos en búsqueda de la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y el entorno.

Para lo anterior, se enlistan los lugares susceptibles de supervisión, pero no contempla a las instituciones y organismos públicos y privados que atienden a personas que enfrentan problemas de adicción a las drogas, ya que en dichos centros se realizan actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de adicciones, es decir, se refiere a los llamados anexos públicos y privados. Que se encuentran reconocidos en la Ley Estatal de Salud en su artículo 13 fracción XI, el incluirlos en dicho listado es importante, ya que se tienen múltiples casos desafortunados de incendios, tales incendios pueden ser accidentes o provocados por los internos que intentan escapar; ocasionando con ello pérdidas humanas, de ahí que sea necesario la verificación de medidas de seguridad de estos lugares

SÉPTIMO. Quienes integramos esta dictaminadora, coincidimos en la trascendencia que tienen la verificación respecto de las condiciones de seguridad para efectos de prevenir hechos que puedan dañar a las personas, en este caso, de quienes son usuarios de centros privados o públicos destinados al tratamiento y atención en materia de adicciones, y aun y cuando ya el artículo 62 en su fracción I contempla que tanto la Coordinación de Protección Civil del Estado como las de los municipios deben llevar a cabo verificaciones en edificios con habitaciones colectivas como lo son asilos, conventos, internados, fraternidades, hoteles moteles, campamentos y centros vacacionales, no señalan a los centros de tratamiento y rehabilitación, que por su propia naturaleza generalmente se encuentra restringido el libre acceso tanto para familiares como para pacientes-usuarios. Por ello consideramos pertinente llevar a cabo la adición propuesta por los impulsores de la iniciativa en la fracción I de ese mismo artículo.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta a esta Asamblea Legislativa, el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Por los argumentos contenidos en el presente dictamen, se aprueba con modificaciones la iniciativa citada en el proemio, en los siguientes términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los agentes perturbadores de origen humano o natural se traducen en un fenómeno antropogénico, que causa daño a las personas, por eso es importante que el Estado lleve a cabo acciones de verificación de los inmuebles a que se refiere la ley, respecto de su equipamiento y condiciones, buscando evitar la presencia de agentes perturbadores de origen humano.

En el caso de los inmuebles que tienen como uso servicios de orientación, prevención, tratamiento, rehabilitación, control, y reinserción social de personas con problemas de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, y que son materia de regulación de la Ley de Prevención y Control de Adicciones es necesario que sean considerados en el texto de

la Ley Estatal de Protección Civil, sobre todo porque esos establecimientos deben contar con licencia expedida en términos del artículo 35 de la Ley de Prevención y Control de Adicciones, siendo el caso de que, respecto de Protección Civil, constituye la autorización relacionada con la seguridad física de la infraestructura del centro de tratamiento y rehabilitación. Además de la incorporación al texto vigente, se hace una adecuación de redacción en la fracción I del artículo 62 del presente ordenamiento legal.

Proyecto de Decreto

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 62 en su fracción I de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue

ARTÍCULO 62. ...

I.- Inmuebles que sean destinados a casa habitación y que tengan cuatro unidades de vivienda o más, así como aquellos que concentren habitaciones individuales o colectivas para veinte personas o más, como es el caso de asilos, conventos, internados, fraternidades, hoteles, moteles, campamentos turísticos, centros vacacionales y centros para el tratamiento, rehabilitación, control, y reinserción social de personas con problemas de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia;



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

II. a XXIX ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Por la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, dado en las instalaciones de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado, el 14 de marzo de dos mil veintidós

POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.

Dolores Eliza García Román: con su permiso Presidenta, buenos días compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que nos acompañan, público en general y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, el Sistema Estatal de Protección Civil tiene como finalidad la protección de la vida, así como del patrimonio de los habitantes de nuestro estado, y el objetivo principal de su existencia es la prevención para disminuir los riesgos y peligros a corto, mediano y largo plazo que puedan ser causados por fenómenos naturales y humanos, como legisladores tenemos la responsabilidad de adecuar el marco jurídico de las instituciones a fin de dotarlos de herramientas jurídicas, que les permitan a las diversas autoridades realizar sus actividades con la seguridad de que sus acciones sean apegadas a derecho y con el respaldo de una correcta legislación, el día de hoy se vota una iniciativa que clarifica y puntualiza de una mejor manera las facultades de las autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil en materia de supervisión, les permitirá sustentar sus diligencias en establecimientos, tantos públicos o privados, que al momento se encuentran fuera de regulación, con el objetivo principal de salvaguardar la integridad de las personas.

Con esta iniciativa, las autoridades podrán realizar visitas de supervisión a instituciones y organismos públicos y privados, que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de adicciones, lo que garantizará que las personas que asistan a dichos centros a rehabilitarse o a sus familias, se encuentren en un entorno seguro y protegido, de acuerdo a las necesidades de cada espacio y con la supervisión de las autoridades de Protección Civil en el estado, es cuanto Presidenta.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Presidenta: para fijar postura ¿alguien más participara?; Segunda Secretaria haga el favor de inscribir a quienes vayan a intervenir en el debate.

Secretaria: dictamen número dos, ¿alguien intervendrá?; no hay participaciones.

Presidenta: sin discusión a votación nominal.

Secretaria: diputado Juan Francisco Aguilar Hernández; Edgar Alejandro Anaya Escobedo; Martha Patricia Aradillas Aradillas; José Luis Fernández Martínez; Liliana Guadalupe Flores Almazán;...;(continúa la lista); 26 votos a favor

Presidenta: contabilizados 26 votos a favor; por UNANIMIDAD aprobado el Decreto que reforma el artículo 62 en su fracción I de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí; remítase al Ejecutivo del Estado para sus efectos constitucionales.

En el dictamen número tres con Proyecto de Decreto de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, tiene la palabra alguno de sus integrantes para presentarlo; ¿quién lo hará? tiene la palabra el diputado Rubén Guajardo Barrera.

DICTAMEN TRES

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTES

A la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, mediante TURNOS 1061 y 1146, les fue enviada para su estudio y dictamen en Sesiones Ordinarias del 3 y 10 de marzo de 2022 respectivamente, iniciativas que plantean REFORMAR los artículos 54 y 117 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, presentadas por los Legisladores José Luis Fernández Martínez y Rubén Guajardo Barrera.

En tal virtud, al entrar al estudio y análisis del asunto planteado, los diputados que integran esta comisión, llegaron a los siguientes.

CONSIDERANDOS



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades que no están expresamente concedidas por dicha Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. En esa línea podemos advertir que de las disposiciones contenidas en los artículos 73, 74 y 76, de la referida Constitución de la República, no se desprende facultad exclusiva del Congreso de la Unión o de sus respectivas Cámaras, para legislar en la materia de la iniciativa de cuenta.

Por su parte, la fracción I del artículo 57 de la Constitución Política Local, le confiere atribuciones al Congreso del Estado para dictar, derogar y abrogar leyes; en consecuencia, éste es competente para conocer y resolver sobre las propuestas que se describen en el preámbulo, a fin de resolver aprobando o desechando las mismas.

SEGUNDO. Que los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado; y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, les conceden facultad de iniciativa a los diputados; por lo que, quienes promueven las iniciativas de cuenta tienen ese carácter y, por ende, con base en los preceptos citados están legitimados para hacerlo.

TERCERO. Que los numerales, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, establecen los requisitos que deben contener las iniciativas; por tanto, las propuestas de modificación que nos ocupan cumplen tales requerimientos.

CUARTO. Que con fundamento en el artículo 115, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el órgano parlamentario a quien se le turnó estas propuestas, es competente para conocerlas y resolver lo procedente sobre la mismas.

QUINTO. Que, con el propósito de entender y comprender mejor el contenido de las iniciativas, disposiciones reglamentarias disponen incluir en el dictamen un cuadro comparativo mismo que se expresa a continuación:

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí

VIGENTE			INICIATIVA TURNO 1061	INICIATIVA TURNO 1146		
ARTICULO	54.	Los		ARTÍCULO	54.	Los
integrantes	de	las		integrantes	de	las

instituciones de seguridad podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en éstas, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación y, en su caso, sólo procederá la indemnización.

Las instituciones de seguridad pública sólo estarán obligadas a una indemnización equivalente a tres meses del último salario percibido, y al otorgamiento de las partes proporcionales de las prestaciones a que tenga derecho la persona separada o removida; tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.

instituciones de seguridad pública podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en **dichas Instituciones, sin que en ningún caso proceda su reinstalación al servicio.**

En caso de que la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación del servicio fue injustificada, las instituciones de seguridad pública deberán pagar una indemnización de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, y demás prestaciones a que tenga derecho desde que se concretó la separación y hasta por un periodo máximo de seis meses. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.

<p>ARTICULO 117. En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la remoción es injustificada, en ningún caso procederá reincorporación o reinstalación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo</p>	<p>ARTICULO 117. En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la remoción es injustificada, en ningún caso procederá reincorporación o reinstalación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en</p>	<p>Las demás prestaciones señaladas en el párrafo anterior comprenderán el sueldo base, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de su servicio.</p>
--	---	---

del Estado en ningún caso ordenará la reincorporación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.

ningún caso ordenará la reincorporación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; en este caso, sólo podrá obligar a pagar la indemnización, y las demás prestaciones a que tenga derecho en términos del artículo 54 de esta Ley, sin que en ningún caso proceda el pago de las prestaciones por un periodo mayor a seis meses posteriores a la remoción injustificada. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.

SEXTO. Que los promoventes en su iniciativa hacen valer la siguiente exposición de motivos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TURNO 1061

El artículo 116, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina la capacidad de las legislaturas locales para regular las relaciones de trabajo al interior de los estados:

ARTÍCULO 116

I. a V. ... ;

VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y

Ahora bien, en caso de que una remoción, separación, baja del puesto de los servidores públicos, o acto de efectos equivalentes, después de que la autoridad jurisdiccional resuelva que el acto fue injustificado, el artículo 123 de la Carta Magna, establece la obligación del estado de pagar la indemnización y demás prestaciones aplicables, sin posibilidad de reinstalación:

ARTÍCULO 123.

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I. a XII. ... ;

XIII. ... ;

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Dado el principio de autodeterminación en la materia, por parte de las Entidades en el citado artículo 116 Constitucional, las legislaturas locales están facultadas para regular la manera en que se integra la indemnización a que tengan derecho los servidores públicos mencionados, como consecuencia del cese arbitrario de su cargo, así como para establecer el monto a pagar del concepto "y las demás prestaciones a que tenga derecho", incluso el periodo por el que deban pagarse.

Sin embargo, se debe advertir que actualmente la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí no contiene el periodo por el que deban pagarse las demás prestaciones a que tenga derechos adicionales a la indemnización constitucional.

Esto ha provocado, que quede a juicio del Poder Judicial Federal a través de sentencias de amparo, definir en qué punto se entiende que ya se cubrió en favor de los miembros de los cuerpos policiacos cesados injustificadamente, las prestaciones a que se refiere el artículo 123 apartado B, fracción XIII citado.

En este orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, en la Tesis de jurisprudencia Tesis: 2a./J. 57/2019 (10a.)⁽¹⁾, definió que si bien la Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), de rubro:

"SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", se pronunció en cuanto al alcance del referido concepto, dicho criterio no fijó limitante alguna a la libertad configurativa del legislador local para regular los montos o la temporalidad por la que deberían cubrirse tales prestaciones. En esa tesitura, la limitante temporal al pago de las referidas prestaciones es razonable y proporcional, en virtud de que atiende a la protección de las partidas presupuestarias fijadas para el pago de las indemnizaciones; así mismo, se trata de una medida que persigue un fin justificado y que es adecuada, así como proporcional para su consecución, en tanto que no se advierten efectos desmesurados en relación con el derecho de resarcimiento del servidor público.

Luego entonces, es imperativo establecer la temporalidad por la que se deben cubrir esas prestaciones, pues la limitante temporal al pago de las referidas prestaciones es razonable y proporcional, en virtud de que atiende a la protección de las partidas presupuestarias fijadas para el pago de las indemnizaciones; así mismo, se trata de una medida que persigue un fin justificado y que es adecuada, así como proporcional para su consecución, en tanto que no se advierten efectos desmesurados en relación con el derecho de resarcimiento del servidor público.

⁽¹⁾Registro digital: 2019648. Instancia: Segunda Sala. Décima Época. Materias(s): Administrativa, Constitucional.Tesis: 2a./J. 57/2019 (10a.).Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, página 1277.Tipo: Jurisprudencia.

SEGURIDAD PÚBLICA. LA LIMITANTE TEMPORAL AL PAGO DE "Y LAS DEMÁS PRESTACIONES" QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CORRESPONDE A LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS POLICIACOS CESADOS INJUSTIFICADAMENTE, ES CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE TABASCO Y ESTADO DE MÉXICO).

En términos del artículo 116, fracción VI, en relación con el diverso precepto 123, apartado B, fracción XIII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las legislaturas locales están facultadas para regular la manera en que se integra la indemnización a que tengan derecho los servidores públicos mencionados, como consecuencia del cese arbitrario de su cargo, así como para establecer el monto a pagar del concepto "y las demás prestaciones a que tenga derecho", incluso el periodo por el que deban pagarse, respetando los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como mínimos en la indemnización correspondiente. Ahora, si bien la Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", se pronunció en cuanto al alcance del referido concepto, dicho criterio no fijó limitante alguna a la libertad configurativa del legislador local para regular los montos o la temporalidad por la que deberían cubrirse tales prestaciones. En esa tesitura, la limitante temporal al pago de las referidas prestaciones es razonable y proporcional, en virtud de que atiende a la protección de las partidas presupuestarias fijadas para el pago de las indemnizaciones; así mismo, se trata de una medida que persigue un fin justificado y que es adecuada, así como proporcional para su consecución, en tanto que no se advierten efectos desmesurados en relación con el derecho de resarcimiento del servidor público.

Contradicción de tesis 330/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimerá Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, Octavo de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y Cuarto en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 20 de febrero de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I. y José Fernando Franco González. Disidente: Javier Laynez Potisek. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz.

Por tanto, propongo que se reforme el artículo 117 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, para que se defina la limitante temporal al pago de las referidas prestaciones adicionales a la indemnización constitucional. El artículo vigente se encuentra en los siguientes términos:

ARTICULO 117. En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la remoción es injustificada, en ningún caso procederá reincorporación o reinstalación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en ningún caso ordenará la reincorporación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.

En este sentido, la propuesta es que el periodo temporal a que tenga este derecho por ningún motivo sea superior a seis meses, considerando que el juicio contencioso administrativo, tiene una duración ordinaria de tres meses aproximadamente y de un mes más para que la sentencia sea firme y ejecutoriable; se adicionaría entonces, la disposición de que en caso de remoción injustificada, sólo existirá obligación a pagar la indemnización, y las demás prestaciones a que tenga derecho en



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

términos del artículo 54 de la Ley del Sistema de Seguridad del Estado, mismo que a su vez obliga al otorgamiento de las partes proporcionales de las prestaciones a que exista derecho, estableciendo ahora que en ningún caso proceda el pago de tales prestaciones por un periodo mayor a seis meses posteriores a la remoción injustificada.

La reforma propuesta se encuentra dentro de los límites de la Tesis de Jurisprudencia referida y, en consecuencia, también dentro de los cauces de los artículos Constitucionales 116 y 123, en sus fracciones antecitadas, respecto a la capacidad de las Entidades para imponer el límite de meses por el que sean aplicables las prestaciones en estos casos.

De igual manera es posible remitirse al numeral 124 de la Constitución, que en las Previsiones Generales de la Carta, establece que:

Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Por lo que, al no haber una disposición explícita sobre los límites a los pagos de prestaciones en esos casos, se entiende que se trata de una facultad del orden estatal.

Cabe señalar también que el incumplimiento de las sentencias y laudos es causal de responsabilidades de los servidores públicos, en términos del artículo 62 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se puede alegar que este periodo restringido violenta derechos o bien, se trate de un incentivo perverso que fomentara el incumplimiento de las sentencias jurisdiccionales, pues ese incumplimiento es una falta grave, aunado a que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, tiene la facultad de destituir a los servidores públicos por incumplimiento de la sentencia dictadas.

Finalmente, esta iniciativa también da cuenta de la actualización de la denominación del Tribunal de lo Contencioso, para denominarse Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en la Ley; y se rescata la propuesta de reforma por la inclusión de la Guardia Civil Estatal, recientemente presentada ante el Congreso del Estado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TURNO 1146

El artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del estado de pagar a los miembros policiales una indemnización y demás prestaciones en caso de que una autoridad jurisdiccional resuelva que la baja, cese o remoción de su cargo fue injustificada, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio.

En correspondencia con lo anterior, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, en concreto sus artículos 60 y 74, prevén la aludida obligación.

En cuanto al contenido de la indemnización, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta debe cubrirse a razón de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, salvo que exista norma específica en el ordenamiento local que deben expedir los órganos legislativos, que establezca una indemnización mayor.⁽²⁾

Ello, al considerar que la indemnización en caso de una separación injustificada del cargo se erige como derecho de rango constitucional que no puede ser desconocido por la autoridad bajo el pretexto de que en la legislación especial no se prevea el concepto referido o no se establezcan los montos a los que se contendrá éste, ya que lo que pretende el precepto constitucional es proteger y brindar al servidor público separado de su cargo injustificadamente, una indemnización que repare los daños y perjuicios que ese acto ilegal le causaron.

En otro aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que la frase "y demás prestaciones" se refiere al deber de la autoridad administrativa de pagar al servidor público de mérito, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, las cuales necesariamente deben estar catalogadas en el presupuesto de egresos respectivo, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja, y hasta que se realice el pago correspondiente.⁽³⁾

⁽²⁾Jurisprudencia 2a./J. 198/2016 (10a.), registro digital: 2013440, de rubro: *SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)].*

⁽³⁾Jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.) registro digital: 2001770, de rubro: *SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B,*

FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) ()].*

Es importante destacar que, respecto al concepto de referencia, nuestro Máximo Tribunal especificó que no se encuentra incluido en éste el derecho al pago de salarios caídos.⁽⁴⁾

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 330/2018, en sesión de veinte de febrero de dos mil diecinueve, apuntó que corresponde a los Congresos Locales, en términos del artículo 116, fracción VI de la Constitución Federal, emitir sus propias leyes en el ámbito administrativo, para regular las relaciones con los miembros de las instituciones policiales de los estados y municipios, tomando como base las garantías mínimas de protección que el Constituyente estableció en el citado artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo.

De acuerdo con lo anterior, los Congresos Locales están facultados no solo para regular, a través de los ordenamientos administrativos correspondientes, la relación que surge entre los miembros de las instituciones policiales y cada entidad federativa, sino también para regular la manera en que se integra la indemnización a que tengan derecho como consecuencia del cese arbitrario de su cargo, así como para establecer el monto a pagar por concepto de las demás prestaciones, o algún límite razonable para su cuantificación.

Ahora bien, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de marzo de 2012, en concreto en su artículo 54, establece que las instituciones de seguridad pública únicamente estarán obligadas a pagar a los miembros policiales una indemnización equivalente a tres meses del último salario percibido y las partes proporcionales de las prestaciones a que tengan derecho.

⁽⁴⁾Jurisprudencia 2a./J. 109/2012 (10a.), registro digital: 2001768, de rubro: *SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS.*

Por lo anterior, se propone modificar el artículo en cita, para armonizar su contenido con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como también con los criterios que ha emitido nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en relación con los conceptos de indemnización y de las demás prestaciones a que tienen derecho los miembros de las instituciones policiales del estado y municipios, en caso de ser separados, cesados o removidos de su cargo de manera injustificada.

Asimismo, la medida que se propone atiende a la protección de las partidas presupuestarias fijadas para el pago de las indemnizaciones, acorde con los artículos 126 Constitucional y 19, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que prohíben hacer cualquier pago que no esté comprendido en el presupuesto.

SÉPTIMO. Los promoventes coinciden en que a partir de que la norma vigente establece que ante la determinación de una separación injustificada, dictada por parte de la autoridad jurisdiccional competente, respecto de los integrantes de las instituciones de seguridad, es procedente únicamente la indemnización. Norma que ha sido confirmada respecto de su constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y adicionalmente ese máximo tribunal ha determinado que, no existe *limitante alguna a la libertad configurativa del legislador local para regular los montos o la temporalidad por la que deberían cubrirse tales prestaciones.*

Asimismo se ha establecido que, es factible que las legislaturas locales, determinen límites de temporalidad respecto del pago de las prestaciones relacionadas con la obligación del pago de la indemnización, concluyendo que ello *es razonable y proporcional, en virtud de que atiende a la protección de las partidas presupuestarias fijadas para el pago de las indemnizaciones; así mismo, se trata de una medida que persigue un fin justificado y que es adecuada, así como proporcional para su consecución, en tanto que no se advierten efectos desmesurados en relación con el derecho de resarcimiento del servidor público.*

Atendiendo lo anterior, los promoventes proponen tres y seis meses, como plazo máximo respecto del pago de la indemnización. Al respecto quienes integramos esta dictaminadora consideramos que en atención a los tiempos que deben considerarse respecto del proceso ventilado ante el Tribunal de Justicia Administrativa, determinar seis meses es un plazo que garantiza el derecho de quien fue separado, y por otra parte contribuye a la proporcionalidad determinada por la Corte; sin embargo, consideramos también que en aras de contribuir a una equidad en los derechos de las personas que prestan sus servicios al Estado, en este caso, elementos de seguridad pública, es necesario homologar el plazo que ha de establecerse como límite en doce meses, tal y como se dispone en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones del Estado.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Por lo anteriormente expuesto, se presenta a esta Asamblea Legislativa, el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Por los argumentos contenidos en el presente dictamen, se aprueba con modificaciones las iniciativas citadas en el proemio, en los siguientes términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Congreso del Estado de San Luis Potosí, atendiendo a las conclusiones vertidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el presente Decreto, fija los límites de la temporalidad en relación con la obligación de pagar los conceptos relacionados con la indemnización a que tienen derecho en su caso, los integrantes de las instituciones de seguridad, con lo que se atiende por una parte el derecho de esas personas a recibir un pago justo, y por otra parte se atiende el cuidado de las partidas presupuestales a cargo del Estado en sus diferentes órdenes de gobierno.

Proyecto de Decreto

ÚNICO. Se REFORMA los artículos 54 y 117 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue

ARTÍCULO 54. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en **dichas Instituciones, sin que en ningún caso proceda su reinstalación al servicio.**

En caso de que la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación del servicio fue injustificada, las instituciones de seguridad pública deberán pagar una indemnización de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, y demás prestaciones a que tenga derecho, entendidas estas como el sueldo base, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de su servicio.

ARTICULO 117. En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la remoción es injustificada, en ningún caso procederá reincorporación o reinstalación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa** en ningún caso ordenará la reincorporación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; **en este caso, sólo podrá obligar a pagar la indemnización, y las demás prestaciones a que tenga derecho en términos del artículo 54 de esta Ley y hasta por un periodo no mayor a doce meses posteriores a la remoción injustificada. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.**

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Por la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, dado en las instalaciones de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado el 14 de marzo de dos mil veintidós.

POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.

Rubén Guajardo Barrera: hago un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que ya pongan las pantallas, esta iniciativa la presenta un servidor, y luego también el diputado José Luis Fernández presenta una iniciativa muy parecida, lo que hicimos en la Comisión de Seguridad Pública fue unir los dos dictámenes y sacaron un mismo acuerdo, lo que buscamos es la reforma a los artículos 54 y 117 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado San Luis Potosí, el fin es establecer que en el caso de que la autoridad jurisdiccional resolviera la separación, remoción, baja o cese de cualquier forma de la terminación del servicio, que en este caso fuera injustificada, la ley fije una indemnización de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio y además prestaciones, y fijar la obligación de pago de indemnización y demás prestaciones, hasta por un periodo no mayor a 12 meses posteriormente a la remoción injustificada, la indeterminación en la ley de los plazos aludidos es el origen de la incertidumbre al momento de definir los criterios para las determinaciones



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

que aplican los derechos laborales, en este caso de los elementos del sistema de seguridad que han sido dados de bajas en esta circunstancia específica.

Ahora bien, uno de los determinaciones de este dictamen, es que ante la determinación de una separación injustificada dictada por parte de la autoridad jurisdiccional competente, respecto de los integrantes de las instituciones de seguridad, es procedente únicamente la indemnización y lo anterior ha sido confirmado respecto de su constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y adicionalmente ese máximo Tribunal ha determinado que no existe limitante alguna a los congresos locales, para poder regular los montos o la temporalidad por la que deberían cubrirse tales prestaciones, lo anterior de acuerdo a la Suprema Corte es razonable y proporcional, en virtud de que atiende a la protección de las partidas presupuestarias y con ello el interés público fijadas para el pago de la indemnizaciones.

Asimismo, se trata de una medida que persigue un fin justificado y que es adecuada, así como proporcional, para que su consecuencia en tanto no se advierten efectos desmesurados en relación con el derecho del resarcimiento del servidor público, esas consideraciones son el fundamento de la iniciativa planteada, que tras el trabajo de la comisión se somete a la consideración del Pleno, este dictamen para determinar que en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviera la separación, remoción, baja o cese de cualquier forma de terminación del servicio, fue injustificada, las instituciones de Seguridad Pública deberán pagar una indemnización de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, y además prestaciones que tengan derecho entendidas éstas como el sueldo base, así como los beneficios, recompensas, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, saberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servicio público por la prestación de su servicio.

Además de que, en aras de contribuir a una equidad en los derechos de las personas que prestan sus servicios al estado, que son en este caso elementos de Seguridad Pública, aquí quiero mencionar que a petición del diputado Alejandro Leal Tovías en la Comisión de Seguridad Pública, se homologa el plazo que establece como límite los 12 meses tal como lo dispone la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones del Estado, solicitó entonces el apoyo para la aprobación de este dictamen para fijar en la ley con toda claridad y certidumbre, las obligaciones del estado y una protección razonable del erario público, que respete en toda medida los derechos laborales, muchísimas gracias.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Presidenta: enseguida los grupos parlamentarios y representaciones parlamentarias, fijan postura en cuanto al dictamen número tres, ¿alguien participará?; Primera Secretaria haga el favor de inscribir a quienes vayan a intervenir en el debate.

Secretaria: dictamen número tres, ¿alguien intervendrá?; no hay participaciones Presidenta.

Presidenta: sin discusión; consulte si hay reserva de artículos.

Secretaria: consulto, ¿hay reserva de artículos en lo particular?; sin reserva.

Presidenta: al no haber reserva de artículos, a votación nominal en lo general.

Secretaria: diputado Juan Francisco Aguilar Hernández; Edgar Alejandro Anaya Escobedo; Martha Patricia Aradillas Aradillas; José Luis Fernández Martínez; Liliana Guadalupe Flores Almazán;...; *(continúa la lista)*; 27 votos a favor.

Presidenta: con fundamento en el artículo 100 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, al no haber reserva en lo particular, contabilizados 27 votos a favor; por UNANIMIDAD aprobado el Decreto que reforma los artículos, 54, y 117 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; remítase al Ejecutivo del Estado para sus efectos constitucionales.

En el dictamen número cuatro con Proyecto de Resolución de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, tiene la palabra alguno de sus integrantes para presentarlo; ¿quién lo hará?; tiene la palabra el diputado Rubén Guajardo Barrera.

DICTAMEN CUATRO

Diputadas Secretarias LXIII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Presentes.

En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado celebrada el 3 de marzo del año 2022, se consignó a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, bajo el **TURNO 1115** punto de acuerdo que impulsa el Legislador Rubén Guajardo Barrera, que insta al licenciado Ricardo Gallardo Cardona, Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, en el proyecto de rehabilitación integral de los parques Tangamanga I y II se incluyan los siguientes aspectos de seguridad ciudadana, que

en mucho contribuirían a proteger a las familias potosinas y prevenir la comisión de conductas ilícitas en su interior.

En virtud de lo anterior, los integrantes de esta comisión verificaron la viabilidad y legalidad, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; así como los artículos 75, 85, 86 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, y se llegó a los siguientes

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, el promovente en su calidad de diputado, tiene la atribución de proponer al Pleno, puntos de acuerdo.

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 92, 115 y 132 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, compete al Congreso del Estado por conducto de esta comisión de dictamen legislativo, conocer y dictaminar el punto de acuerdo citado en el proemio.

TERCERO. Que con el fin de conocer los argumentos que sustentan el punto de acuerdo propuesto, a continuación, se inserta en sus términos:

ANTECEDENTES

Los parques Tangamanga I y II, ubicados en la capital del estado, tienen una gran importancia debido a su rol de áreas verdes al interior de zonas de desarrollo urbano, así como lugares de esparcimiento y de actividad física para los habitantes, donde es posible practicar deportes, y realizar actividades culturales.

El parque Tangamanga I se encuentra ubicado en la zona sur de la ciudad, fue creado por el Decreto número 270, publicado el 9 de septiembre de 1983, como "Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga".

Tiene una extensión de 420 hectáreas de longitud, destinadas a áreas verdes con pastizales y distintas especies de árboles endémicos, cuenta con instalaciones deportivas, vivero, lago, un

auditorio, un museo, una unidad de manejo ambiental, entre otras facilidades, e incluso se conserva parte del casco de la hacienda de la Tenería, de origen virreinal.

Se calcula que con el volumen de árboles con los que cuenta, un millón 800 mil, aporta aproximadamente 800 toneladas de oxígeno a la capital potosina.⁽¹⁾ Además de que para su riego se utiliza agua tratada proveniente de sus propias instalaciones.

Respecto al parque Tangamanga II, fue creado en 1985, se encuentra ubicado en la parte norte de la ciudad, y fue pensado como una alternativa para los habitantes de esa zona; cuenta con 189 hectáreas, y debido a su ubicación y las características de su suelo, su tipo de vegetación guarda algunas diferencias.

Ese parque, además de tener con áreas verdes y lugares para prácticas de deportes, como canchas techadas, cuenta además con instalaciones diferentes orientadas a otros fines específicos, como por ejemplo campo de tiro con arco, y pista de carreras automovilísticas.⁽²⁾

Además del valor ambiental para la ciudad, existen otros elementos por los que debemos valorar estos parques. Por ejemplo, en el área del urbanismo se ha estudiado la relación de las áreas verdes con la calidad de vida, señalando que:

“Las zonas verdes cumplen funciones de gran interés ciudadano como son: ornamental, recreativa y perceptual-paisajística; pero otras están en relación con el bienestar de los ciudadanos jugando un papel muy importante como reguladores del intercambio de aire y temperatura y en el control o reducción de la contaminación acústica y en la alteración de la composición de la atmósfera urbana.”⁽³⁾

Razones por las cuales, debemos de fomentar el uso, el cuidado y la valoración de estas áreas de la ciudad capital.

⁽¹⁾<https://sanluis.eluniversal.com.mx/metropoli/lo-que-no-sabias-del-parque-tangamanga-en-slp-el-central-park-potosino>

⁽²⁾<http://www.cecurt.com.mx/acerca%20de.htm#:~:text=Carlos%20Jonguitud%20Barrios%2C%20quien%20lo,tiro%20con%20arco%20y%20la>

⁽³⁾Alexander Peña Morales. Áreas Verdes como medio para mejorar la calidad de vida. En: <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24534/1/ARTICULO%20ALEXANDER%20%283%29.pdf>

JUSTIFICACIÓN

Sin embargo, en detrimento del alto valor que estos lugares tienen para los potosinos durante los últimos años se han presentado casos de asaltos, acoso contra mujeres y consumo de sustancias ilícitas, al interior de los parques; hechos que atentan contra la seguridad de las personas, y que en muchos casos son menores de edad, que esperaban poder hacer uso de un espacio apto para el esparcimiento, el deporte y la salud, en condiciones de seguridad.

Ahora bien, con la entrada del nuevo gobierno del estado, de forma acertada se iniciaron obras para la rehabilitación de ambos parques, entre las que destaca la construcción de una puerta para el parque Tangamanga I; y la expectativa es lograr una mejora integral en las condiciones y en el impacto positivo de estos lugares para los habitantes.

Dentro de la comunicación social del gobierno del estado, en materia de seguridad, vale la pena resaltar un anuncio sobre acciones en esa materia dentro de la rehabilitación. De acuerdo al vocero de seguridad, como parte de esta obra pública, se pondrán en funcionamiento al interior de los parques Tangamanga, más botones de pánico y se tiene planeado un refuerzo en la presencia de elementos de seguridad pública, y la realización de patrullajes.

Además de lo anterior, se planea mejorar la infraestructura para la iluminación, en vista de que se tiene planeado extender los horarios de acceso en ambos lugares.⁽⁴⁾

⁽⁴⁾<https://pulsoslp.com.mx/slp/con-botones-de-panico-y-mas-patrullajes-pretenden-evitar-hechos-delictivos-durante-horario-nocturno-en-el-tangamanga/1446049>

CONCLUSIONES

Las acciones de rehabilitación que se tienen contempladas, resultan oportunas para poder maximizar los beneficios que los parques Tangamanga, aportan a la calidad de vida de las y los potosinos; y con un ánimo colaborativo este instrumento Legislativo propone incluir más elementos de seguridad a los trabajos de rehabilitación de los parques.

Los elementos mencionados, como los botones de pánico y la mayor presencia de elementos de seguridad pública, sin duda ayudarán a mejorar las condiciones de seguridad, y de manera complementaria, se sugiere someter a análisis la adición de los siguientes elementos.

En primer término, un protocolo de seguridad, una serie de procedimientos completos, tendientes a prevenir y remediar las incidencias que de forma más común se pudieran presentar en los parques, agilizando la respuesta y aumentando la certidumbre de los asistentes.

En segundo lugar, un filtro de acceso al parque, con la finalidad de evitar el ingreso de sustancias ilícitas y armas, lo que contribuiría a la seguridad integral de los asistentes y la prevención de delitos como asaltos.

Finalmente, analizar la implementación de un sistema de videovigilancia, que por su puesto operaría bajo los términos establecidos por las Leyes estatales, que resultaría útil para la prevención y la detección, no solamente de delitos como atracos, sino para actos como acoso en contra de las mujeres, contribuyendo a la creación de un espacio seguro.

Con motivo de la remodelación, estas mejoras de seguridad, podrían implementarse antes de que se vuelva abrir al público, para ofrecer parques renovados y con medidas y estructura de seguridad integrales.

Se trata de una oportunidad para crear un espacio que reúna características que garanticen la seguridad de quienes acudan, para así poder favorecer la salud, y la calidad de vida de habitantes de la capital.

Con base en los motivos expuestos, presento a consideración de este honorable pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, exhorta de manera institucional y respetuosa, al licenciado Ricardo Gallardo Cardona, Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, en el proyecto de rehabilitación integral de los parques Tangamanga I y II se incluyan los siguientes aspectos de seguridad ciudadana, que en mucho contribuirían a proteger a las familias potosinas y prevenir la comisión de conductas ilícitas en su interior:

a) Implementación de un protocolo de seguridad que contemple la prevención y la reacción ante hechos en materia de seguridad de los elementos encargados de la seguridad ciudadana en los Parques Tangamanga I y II.

b) Creación de un filtro de acceso al parque que permita identificar a quienes ingresan y que pudieran ser eventuales perpetradores de conductas ilícitas, evitar el ingreso de sustancias ilegales y armas y en general para la mejor seguridad de las personas que acuden a estos espacios.

c) Implementación de un sistema de iluminación permanente, suficiente y amplio, así como uno de videovigilancia, con la finalidad de prevenir y detectar delitos, así como actos de acoso contra las mujeres; con la finalidad de crear un espacio seguro para las potosinas y los potosinos.

CUARTO. Que en su justificación, la promovente expone que en los parques Tangamanga I y II, espacios que además de funcionar como pulmones de nuestra ciudad capital, cuenta con espacios para la práctica del deporte y del esparcimiento de familias completas. Sin embargo, debido a su amplia extensión, ha presentado casos de asaltos, acoso en contra de mujeres y consumo de sustancias prohibidas.

Por otra parte, expone que aun y cuando el gobierno del Estado ha comunicado que se pondrán en funcionamiento más botones de pánico, y mayor presencia de elementos de seguridad pública, es necesario que se implementen protocolos de seguridad con énfasis en la prevención, la puesta en marcha de un filtro de acceso que permita controlar a eventuales perpetradores, y apoyar al nuevo sistema de iluminación con video vigilancia. Todo ello en aras de que las renovadas instalaciones y la ampliación de los horarios de servicio, tengan el respaldo de acciones planeadas y efectivas para prevenir y en su caso sancionar a quienes lleven a cabo conductas en perjuicio de los usuarios y de las instalaciones de los parques.

Quienes integramos la comisión de dictamen, compartimos la visión de contribuir al esfuerzo que ha llevado a cabo el Ejecutivo del Estado en esos espacios públicos, por lo que resulta pertinente el punto de acuerdo propuesto con algunas modificaciones considerando que el sistema de iluminación ya es una realidad.

Sin embargo, y tomando en consideración que esos centros recreativos cuentan con un Consejo de Administración que es presidido por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y un director general, es que se arriba a la conclusión de que el exhorto debe ser direccionado a ellos.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos, 92 párrafo segundo, y 94, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 85, y 86, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, se presenta a esta Asamblea Legislativa, el siguiente:



Diario de los Debates
Sesión Ordinaria No. 24
marzo 31, 2022

DICTAMEN

Se RESUELVE aprobar con modificaciones el punto de acuerdo a que se refiere el presente dictamen, en los siguientes términos

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, exhorta de manera institucional y respetuosa, al Consejo de Administración de los Parques Tangamanga I y II, así como al Director General de los mismos, Lic. Enrique Alfonso Obregón, para que, en el proyecto de rehabilitación integral de los parques Tangamanga I y II y operación de los mismos, se incluyan los siguientes aspectos de seguridad ciudadana, que en mucho contribuirían a proteger a las familias potosinas y prevenir la comisión de conductas ilícitas en su interior:

- a) Implementación de un protocolo de seguridad que contemple la prevención y la reacción ante hechos en materia de seguridad de los elementos encargados de la seguridad ciudadana en los Parques Tangamanga I y II.
- b) Creación de un filtro de acceso al parque que permita identificar a quienes ingresan y que pudieran ser eventuales perpetradores de conductas ilícitas, evitar el ingreso de sustancias ilegales y armas y en general para la mejor seguridad de las personas que acudan a estos espacios.
- c) Implementación de un sistema videovigilancia, con la finalidad de prevenir y detectar delitos, así como actos de acoso contra las mujeres; con la finalidad de crear un espacio seguro para las potosinas y los potosinos.

Notifíquese.

Por la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, dado en las instalaciones de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado el 14 de marzo de dos mil veintidós.

POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.

Rubén Guajardo Barrera: muchísimas gracias Presidenta, esto es un punto de acuerdo, sobre todo para en específico poder ver el tema de seguridad más preventiva en el parque Tangamanga uno y



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

dos, como ustedes saben hubo una gran inversión por parte del gobierno del estado, en el parque Tangamanga uno se aumentaron los horarios, hoy cierran a las 10:30 de la noche y hasta donde tengo entendido también se hará una gran inversión en el parque Tangamanga 2, qué bueno, nada más que también, pues creo que los dos parques, a mí me gusta ir mucho a los dos, ha incrementado el flujo y pues esto puede generar algunos problemas de Seguridad Pública y creo que vale la pena el poder hacer algunas inversiones para poder tener las herramientas para poder prevenir cualquier problema que en su momento suceda en el parque Tangamanga uno y dos, en específico, bueno el punto de acuerdo, se exhorta de manera institucional y respetuosa al consejo de administración de los parques Tangamanga uno y dos, así como el director general de los mismos, que es el licenciado Enrique Alfonso Obregón, para que en el proyecto que se tuvo de rehabilitación integral de los parques Tangamanga uno y dos, y de operación de los mismos, se incluyen los siguientes aspectos de seguridad ciudadana, que mucho pueden contribuir a proteger a las familias potosinas y prevenir la comisión de conductas ilícitas en su interior.

Voy a leer los tres incisos; a) implementación de un protocolo de seguridad que contemple la prevención y la reacción ante hechos de materia de seguridad de los elementos encargados de seguridad ciudadana en los parques Tangamanga uno y dos; b) la creación de un filtro de acceso al parque, que permite identificar a quienes ingresan y quienes pudieran ser eventuales perpetradores de conductas ilícitas, evitar el ingreso de sustancias ilegales y armas en general, para la mejor seguridad de las personas que acudan a estos espacios; c) la implementación de un sistema de video vigilancia, que aquí creo que esto puede ayudar mucho con la finalidad de prevenir y detectar delitos, así como actos de acoso contra las mujeres, con la finalidad de crear un espacio seguro para las y los potos; es por eso, que les pido su respaldo para que toda la inversión que se ha hecho por parte del gobierno del estado, pues se pueda generar una inversión en este aspecto en específico, que puede ayudar a tener un parque seguro a donde todos asistimos, gracias.

Presidenta: Segunda Secretaria, además del registro previo de un legislador, haga el favor de inscribir a quienes vayan a intervenir en el debate.

Secretaria: dictamen número cuatro, ¿alguien intervendrá?;

Presidenta: tiene la palabra el legislador Eloy Franklin Sarabia.

Eloy Franklin Sarabia: con su permiso señora Presidenta, buenos días, saludo a todos mis compañeros con mucho respeto, sin temor a equivocarme puedo decir a nombre de mis compañeros



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

y compañeras de bancada, que la remodelación y adaptación del parque Tangamanga es uno de los muchos proyectos de esta actual administración, en donde el gobernador ha cumplido cabalmente lo que se prometió, está de sobra mencionar que las anteriores administraciones no se encargaron de dejar más que cosas a medias o simplemente de no hacerlas, pero desde hace algunos meses acá, es claro que las cosas han cambiado para San Luis Potosí, nuestro gobernador electo José Ricardo Gallardo Cardona, anticipó y detalló algunas de las modificaciones que incluía justamente la remodelación del parque Tangamanga uno y parque Tangamanga dos, dentro de estas nuevas acciones podemos enlistar los espacios exclusivos para llevar a nuestros niños y a nuestras niñas a pasar un rato agradable en familia, y también la limpieza y remodelación del parque general, o algo que ha destacado mucho que es este espacio para pasear a nuestras mascotas, hago mención de estos compañeros, porque me gustaría también recalcar, que todas las modificaciones realizadas al parque, así como las que están por realizarse, fueron en todo momento pensadas con una bendición de progresividad, en donde en todo momento fue contemplada la seguridad, desde el primer momento fue contemplado este detalle de cada uno de los espacios, ya sea con el alumbrado, reforzar la seguridad, así también como ampliar el número de elementos encargados de mantener un estado de derecho para todos los potosinos.

con esto, quiero señalar que desde el principio de la nueva administración, hoy el Director General de Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga, hizo énfasis justamente acerca de lo implementado en un nuevo modelo de seguridad que brindará protección a las y los visitantes, y los exhortó justamente a evitar quebrantar las reglas, atendiendo esta disposición también mencionó que se contará con más patrullas, que el día de hoy están circulando mientras el parque está abierto, más motocicletas que en continuo revisión están dando justamente estos operativos de vigilancia y mayor personal dedicado a la vigilancia de las normas establecidas, desde la apertura en esta remodelación se tiene esto ya integrado, el director del parque también ya anunció que se integraron 20 nuevos elementos de seguridad, por lo que se suman un 75 más de guarda parques que darán seguridad y atención inmediata a todos los usuarios, de entre las muchas propuestas también se mencionó que ya se instalaron botones de pánico, cámaras de vigilancia con reconocimiento facial para quienes ingresen al parque por los accesos peatonales, además de tener un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, lo anterior lo explicó para que todos puedan disfrutar de este parque y de todo este espacio, incluso de quienes trabajan por la tarde, ya que en la noche también tendrán, como ustedes lo saben, un parque iluminado, seguro y vigilado.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Esta rehabilitación es un admirable esfuerzo, que buscará también integrar en las 420 hectáreas que se comprende en el parque, todas las condiciones necesarias de seguridad y de garantías para que los potosinos estén seguros, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya en estos momentos y desde que se apertura tiene desplegado acciones de prevención y de vigilancia al interior del parque y al exterior también del parque Tangamanga, para dar protección a los asistentes que han realizado también estos operativos de patrullaje y de vigilancia, así como los recorridos a pie a tierra por parte de este personal, a fin termina salvaguardar la integridad y patrimonio de todos, ante la gran afluencia de personas en este centro recreativo, también se dispondrá de un esquema permanente de seguridad, a efecto de lograr saldo blanco, sin incidencias; con ello, se refrenda el compromiso de prevenir hechos delictivos y brindarle apoyo a todos los ciudadanos que así lo requieran.

Con esto quiere decir que si bien en la bancada del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor, por supuesto de este dictamen, ya que estamos a favor de la seguridad de los potosinos, pero también es importante precisar que todas las disposiciones propuestas en este presente exhorto, ya son acciones propuestas por el Ejecutivo y puestas ya en este momento en marcha, gradualmente este proyecto avanza desde que se anunció la remodelación del parque, doy totalmente mi voto a confianza de éste y todos los proyectos de la administración actual, que no han demostrado otra cosa, que es mejor cumplir con acciones y no con discursos, es cuantos gracias.

Presidenta: tiene la palabra el diputado Amilcar Loyde Villalobos

Amilcar Loyde Villalobos: con su venia Presidenta, el parque Tangamanga fundado en 1985, es un patrimonio de nuestro estado, que representa un inestimable valor ambiental, es un espacio recreativo, deportivo y cultural, que recibe a millones de visitantes quienes realizan actividades que favorecen a su desarrollo integral, y donde converge la sana convivencia y el fortalecimiento de los vínculos sociales tan importante en nuestros días, muchas familias han sido beneficiadas con esta nueva remodelación que se ha realizado, la amplitud del horario ha permitido a muchos trabajadores asistir cuando en otro momento no lo podían hacer, dadas las cargadas jornadas laborales donde no deja mucho tiempo a la recreación y al esparcimiento; sin embargo, una preocupación natural de la población es la seguridad, la cual también es cierto que bajo los tiempos actuales es un tema que se tiene que tomar, en ese sentido creo que lo que se propone como un exhorto y ante la cual se ha mencionado ya están las acciones realizándose, lo cual es bastante alegre y contento, escuchar que ya están en acciones pertinentes sobre ese tema.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Pero es importante mencionar, que tanto los protocolos, como los filtros que se están planeando desarrollar, deben ser bajo los derechos humanos y deben ser considerados en ese sentido, para que no pueda ocurrirse o cambiarse el sentido de este parque, que siempre ha sido un orgullo para el estado; por lo demás, celebramos los cambios y las mejoras, y también apoyo totalmente este exhorto, porque la seguridad siempre será una prioridad para todos los potosinos, es cuanto Presidenta.

Presidenta: tiene la palabra la diputada Gabriela Martínez Lárraga.

Gabriela Martínez Lárraga: gracias Presidenta, coincido con el presente exhorto en cuanto a seguridad, pero bueno ya que estamos hablando del parque Tangamanga, nada más comentarle a mi compañero diputado Eloy, que nadie está en contra del progreso y del desarrollo, y de infraestructura para el estado, pero a nombre de los potosinos y potosinas y de esta representación, lo que sí exigimos des la rendición de cuentas, yo estuve solicitando información respecto a las obras del parque Tangamanga y es fecha que no han podido recibir la información; entonces, pues si me pudieran hablar del tema de rendición de cuentas y dónde está la licitación de dicha obra, yo creo que los potosinos y las potosinas lo que sí exigimos es transparencia en el uso de los recursos de todos ellos, gracias.

Presidenta: ¿alguien más desea intervenir en el debate?; concluido el debate Segunda Secretaria, por favor pregunte si el dictamen está discutido.

Secretaria: consulto si está discutido el dictamen; quienes estén por la afirmativa, ponerse de pie; UNANIMIDAD por la afirmativa.

Presidenta: suficientemente discutido el dictamen por UNANIMIDAD; a votación nominal.

Secretaria: diputado Juan Francisco Aguilar Hernández; Edgar Alejandro Anaya Escobedo; Martha Patricia Aradillas Aradillas; José Luis Fernández Martínez; Liliana Guadalupe Flores Almazán;...; *(continúa la lista)*; 27 votos a favor.

Presidenta: contabilizados 27 votos a favor; por UNANIMIDAD aprobado que la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, exhorta al consejo de administración de los parques Tangamanga I y II; y al director general de los mismos, incluir dentro de rehabilitación y operación de éstos, aspectos de seguridad ciudadana que contribuirán a proteger a familias potosinas y prevenir comisión de conductas ilícitas en su interior; notifíquese.

En el rubro de Puntos de Acuerdo, la expresión al legislador Héctor Mauricio Ramírez Konishi, para exponer el primero en agenda.

PUNTO DE ACUERDO UNO



DIPUTADOS Y DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA LXIII LEGISLATURA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

PRESENTES.-

Quienes suscriben, **Diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero** del Partido Movimiento Ciudadano, y el **Diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, 73 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, correlativo al numeral 132 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, sometemos a consideración de esta honorable Legislatura, el presente **Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, a dictaminar en positivo la iniciativa que adiciona los artículos 239-A, a la Ley del Seguro Social, y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de pensión rural universal.**

ANTECEDENTES

I. Las personas trabajadoras del sector rural se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad a causa de los bajos ingresos que obtienen y de las carencias sociales que padecen, y que reproducen una dinámica de pobreza y falta de acceso a derechos fundamentales. De acuerdo con el INEGI, los trabajadores agrícolas conforman el 4.17 por ciento de la distribución de la fuerza laboral en México. No obstante, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, las actividades de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza fueron de las industrias con mayor tasa de informalidad laboral¹ con 86.1 por ciento al segundo trimestre de 2021, 30 puntos porcentuales superior al promedio nacional.

De acuerdo con esa misma autoridad federal, con un 93.1 por ciento de trabajadores, San Luis Potosí se encuentra en el tercer lugar entre las entidades con mayor índice de informalidad

¹ De acuerdo con INEGI, la población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a los que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Fuente: Indicadores de ocupación y empleo cifras oportunas durante noviembre de 2021, Instituto Nacional De Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 794/21, 23 de diciembre de 2021. Página 9. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/iooe/iooe2021_12.pdf



laboral en la industria agrícola, únicamente por detrás de la Ciudad de México que tiene un 100 por ciento, e Hidalgo con 94.6 por ciento. Colima y Jalisco con un 74 por ciento, son de los más bajos.

Adicionalmente, es fundamental destacar que el 45 por ciento de los trabajadores del campo son subordinados y remunerados, el 37.1 por ciento trabaja por cuenta propia, el 12.6 por ciento son trabajadores sin sueldo y tan solo el 5.3 por ciento son empleadores, de acuerdo con las “Estadísticas a propósito del día del trabajador agrícola (15 de mayo)” elaborado por el INEGI en 2016.

Distribución nacional de las personas trabajadoras del campo



La precariedad del sector agrícola también se ilustra en los ingresos que perciben. Al segundo trimestre de 2021, se estimó que más de 2 millones 940 mil personas en México eran trabajadoras del sector agrícola, cuyo salario promediaba los 2,160 pesos en una jornada de 38.1 horas a la semana. Esta percepción mensual era casi dos mil pesos inferior al salario mínimo nacional equivalente a 4,251 pesos.

En el caso de San Luis Potosí, esa percepción salarial mensual se encuentra 2103 pesos, que es por debajo del promedio nacional. No obstante, la situación es mucho peor en otras entidades, como es el caso de Guerrero, cuyos trabajadores agrícolas perciben 187 pesos mensuales; Morelos con 233 pesos, Oaxaca con 560 pesos, Puebla con 647 pesos y Quintana Roo con 849 pesos mensuales. El ingreso mensual más alto se da en Sinaloa, con un salario mensual de 4783 pesos.



Además de la precariedad salarial, también preocupa la edad de la mayoría de las personas trabajadores agrícolas, quienes ostentan, en promedio, 48.3 años de edad; por lo que están más cerca de la edad de jubilación, lo que complica la percepción de una pensión o retiro digno. También vale la pena destacar que los trabajadores del campo son el grupo económicamente activo de mayor edad, es decir se mantienen trabajando hasta los 70 años, lo que se explica en gran medida por la falta de un sistema de pensiones adecuado para el campo.

Los sueldos que se pagan son de aproximadamente 18.5 pesos por hora trabajada, y tan solo 7 de cada 100 trabajadores obtienen un aguinaldo y la mayoría de los trabajadores no son afiliados a las instituciones de seguridad social a pesar de que la Ley del Seguro Social lo establece en el artículo 237-B de la manera siguiente:

“Artículo 237-B.- Los patrones del campo tendrán las obligaciones inherentes que establezca la presente Ley y sus reglamentos, adicionalmente, deberán cumplir lo siguiente:

I. [...]

II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores, así como las modificaciones de su salario y los demás datos, en los términos del reglamento correspondiente, dentro de plazos no mayores de siete días hábiles; y

III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos.”

La realidad es que, de acuerdo con datos del Informe 2019 por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para el cierre de enero de 2019 tan solo existen 275 mil 646 trabajadores eventuales del campo afiliados a este sistema, y en el régimen obligatorio como trabajadores eventuales se ubican 35 mil 255 y tan solo 18 mil 809 en el régimen voluntario.² Adicionalmente, se estima que casi 500 mil adultos mayores del campo reciben el apoyo del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores, no obstante, persiste un gran rezago en la cobertura de servicios de seguridad social y pensión para todos los trabajadores del campo.

² <https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/entrevistas/518#gsc.tab=0>



Por ello, no sorprende que de acuerdo con la última Encuesta de Jornaleros Agrícolas 2019, "La población jornalera agrícola está entre los sectores más desprotegidos en materia de seguridad social, sin acceso generalizado a los servicios de salud ni a los sistemas de seguridad social".³ En el mismo sentido, Coneval destaca que, entre 2018 y 2020, el porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social presentó una disminución de 1.4 puntos porcentuales, pasando de 53.5 por ciento a 52.0 por ciento de la población en general.⁴

Por otro lado, es importante resaltar la importancia del sector rural en México. Tan sólo el sector Agricultura, Cría y Explotación de Animales, Pesca y Caza registró en el segundo trimestre de 2021⁵ un producto interno bruto de \$1.02 billones de pesos, un aumento del 17 por ciento con respecto al trimestre anterior. Asimismo, según datos del Censo Económico 2019, la producción bruta total del sector equivale a \$44,564 millones de pesos, con un agregado de fuerza laboral en toda la cadena productiva por más de 9.1 millones de personas, de las cuales se estima laboran de 700 mil niñas, niños y adolescentes, siendo un 19 por ciento de los hogares mexicanos dependientes económicamente de manera directa o indirecta del sector.⁶

JUSTIFICACIÓN

II. Dada la importancia del sector rural, así como las condiciones actuales de los jornaleros, es preciso recordar el marco jurídico que regula las condiciones de acceso a la seguridad social de las personas trabajadoras, reconocido y consagrado como derecho en primer lugar en el artículo 123 apartado A fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

"XXIX . Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección, y

³ Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. "Jornaleros Agrícolas en México", junio 2019. Recuperado de: http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/21Jornaleros_agricolas.pdf

⁴ Coneval, 2021, Nota técnica sobre la carencia por acceso a la seguridad social, 2018 - 2020, https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Notas_pobreza_2020/Nota_tecnica_sobre_la_carencia_por_acceso_a_la_seguridad_social_2018_2020.pdf

⁵ Data México, 2021, <https://datamexico.org/es/profile/industry/agriculture-animal-production-forestry-fishing-and-hunting?occupationMetrics2=salaryOption#about>

⁶ Ibidem.



bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.”

Mientras que en el artículo 27 fracción XX de la misma Constitución se señala lo siguiente:

“Artículo 27. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”

Es dentro de la Ley del Seguro Social en su capítulo X, “De la Seguridad Social en el Campo”, en sus artículos del 234 al 239 la seguridad social para los jornaleros agrícolas de la siguiente manera:

- Que las mujeres y los hombres del campo tengan el carácter de trabajadores independientes, respecto de quienes no medie ninguna relación de subordinación laboral, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios.
- Los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma.
- El Instituto podrá verificar que los patrones del campo se encuentran al corriente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de esta ley, previamente al otorgamiento de los subsidios, apoyos o beneficios, derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación, que dichos patrones del campo soliciten al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
- A solicitud del Instituto, y de acuerdo con el convenio que éste firme con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sader) para este fin,



esta última suspenderá la entrega de subsidios, apoyos, o beneficios que, con cargo a su presupuesto provengan del Presupuesto de Egresos de la Federación, a patrones del campo que no cumplan las disposiciones en materia de seguridad social establecidas en esta ley.

- Los indígenas, campesinos temporaleros de zonas de alta marginalidad y todas aquellas familias campesinas, cuya condición económica se ubique en pobreza extrema, tendrán acceso a las prestaciones de solidaridad social, bajo la forma y términos que establecen los artículos 214 a 217 de esta ley.

El reconocimiento de los trabajadores del sector rural en el sistema de seguridad social se ubica en la Ley de Seguridad Social en su artículo 5 fracción XIX, de la siguiente manera:

“XIX. Trabajador eventual del campo: persona que es contratada para labores de siembra, deshierbe, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho período por patrón será considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto en la ley y en el reglamento respectivo.”

Asimismo, tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada el DOF el 1 de mayo de 2019 en el artículo 279 Quáter, se señala que:

“El patrón llevará un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades, para registrar la acumulación de éstas a fin de establecer la antigüedad en el trabajo y, con base en la suma de éstas, calcular las prestaciones y derechos derivados del tiempo sumado de trabajo”.

Es importante señalar que el trabajo de las personas que se dedican a las actividades agrícolas y del campo tiene la necesidad de promover, proteger y preservar la salud, la dignidad humana, los derechos fundamentales del trabajo tanto a nivel personal como colectivo y de sus familias, en aras de ampliar su bienestar social y condición de vida. Al respecto, la fracción IV del artículo 154 y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, señala que:



"Artículo 154. Los programas del gobierno federal impulsarán una adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura y la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad.

[...]

IV. Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros y discapacitados, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, mediante actividades económicas conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica a cargo de las dependencias competentes, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas".

Otro aspecto para considerar en materia internacional son las reglas del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que disponen diversas herramientas en el sector laboral para el sector agrícola, autoridades y productores, entre ellas el de fortalecer la autoevaluación, reglas y cumplir con las legislaciones sobre el trabajo digno, y buenas prácticas (prohibir el trabajo infantil, trabajo forzado) que garanticen los derechos de los trabajadores del campo.

CONCLUSIONES

III. Con todo lo anterior, la iniciativa a la que hoy nos referimos, **presentada el 12 de octubre de 2021 por las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados**, continúa con una de las luchas más representativas de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, para crear el Fondo de Pensión Rural Digna, que buscaría garantizar que las personas trabajadoras del sector tengan acceso a un retiro con dignidad.

Cabe destacar que, desde el 28 de septiembre de 2017, durante la LXIII Legislatura federal fue **presentada por primera vez una iniciativa que buscaba crear una pensión rural digna por el**



entonces diputado Clemente Castañeda. Posteriormente, el 18 de septiembre de 2018, en sesión ordinaria de la LXIV Legislatura, el Diputado Eduardo Ron Ramos presentó la iniciativa que tiene por objeto establecer el Fondo de Pensión Rural para los Trabajadores. Más adelante, el 11 de octubre de 2018, la Senadora Patricia presentó la iniciativa que propone que los trabajadores del campo tengan derecho a una pensión para el retiro otorgada a través del Fondo de Pensión Rural, con fondos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

IV. En este sentido, es preciso destacar que a causa de la pandemia de Covid-19 debemos considerar la fragilidad económica en la que se encuentra este sector, especialmente a los pequeños productores rurales que vieron disminuidos sus ingresos en diversas regiones. Por ello, es responsabilidad del Poder Legislativo, incluidos los **Congresos Estatales**, constituir políticas públicas que apoyen el crecimiento de este sector y que redunde en sus derechos laborales que permitan contar con una mejor vida para sus familias y un retiro digno mediante la creación de un Fondo de Pensión Rural.

Este panorama obliga al Estado mexicano a tomar acciones concretas para garantizar el acceso de todos los trabajadores del campo a un retiro digno, lo que constituye un derecho fundamental de todos los trabajadores. Por ello, la iniciativa que está por dictaminarse en las **Comisiones Unidas de Seguridad Social y Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados** atendía parte de la problemática al proponer lo siguiente:

- La creación de un Fondo de Pensión Rural financiado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para el beneficio de todos los trabajadores del campo que cumplan con los requisitos de retiro por edad o cesantía en edad avanzada en los términos de la Ley de Seguridad Social. Este Fondo de Pensión Rural será independiente de otros programas sociales a cargo del Ejecutivo Federal, las entidades federativas y los municipios.
- La obligación de realizar inspecciones periódicas por parte de las autoridades facultadas para asegurarse de que los trabajadores del campo se adscriban a los servicios de seguridad social.



- Mediante una disposición transitoria, se plantea el ordenamiento de todos los programas en materia de política de seguridad social para el campo, ya que se estima que hay al menos 6 programas distintos que buscan atender este tema.
- Mediante este Fondo de Pensión Rural, se proveerá de manera vitalicia a los trabajadores del campo retirados un ingreso que se ajustará de conformidad con el salario mínimo vigente que así determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). actualmente sería de \$4,300 pesos mensuales.
- Con esta medida se contribuirá a garantizar el acceso a la seguridad social, un derecho fundamental que permitirá reducir la pobreza y las carencias en el sector rural mexicano, uno de los más vulnerables del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

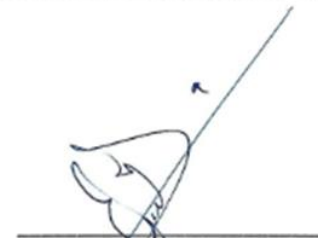
ÚNICO. El Congreso del Estado de San Luis Potosí exhorta a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, a dictaminar en sentido positivo la iniciativa que adiciona los artículos 239-A a la Ley del Seguro Social y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para la creación de una Pensión Rural Digna a nivel nacional.

Atentamente



Héctor Mauricio Ramírez Konishi

Diputado local



Emma Idalia Saldaña Guerrero

Diputada local

LXIII Legislatura | H. Congreso del Estado de San Luis Potosí

22 de marzo del 2022



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Héctor Mauricio Ramírez Konishi: con su permiso Presidenta, buenas tardes compañeros y compañeras, señoras, señores que nos acompañan, hoy del actual Gobierno Federal cuando hizo campaña dijo, primero los pobres, y los más pobres están en el campo mexicano, hay 16 millones de personas trabajando en el campo, el 87.7% de ellos no tienen ningún tipo de derecho laboral, justamente los trabajadores del campo son los que perciben menores ingresos y más padecen la informalidad; por lo tanto, no tienen acceso a prestaciones, no tienen ningún tipo de Seguridad Social y la imposibilidad que tienen los trabajadores del campo para tener ahorros de retiro, pues hace todavía más complicado salir de las condiciones de pobreza y marginación, la única iniciativa seria y propositiva que se ha planteado en los últimos años para atender esta problemática, ha sido una iniciativa del Movimiento Ciudadano, que se presentó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y a la fecha no hay respuesta, hemos insistido, en que urge en este país crear un fondo de pensión rural, con el que se garantizaría en un retiro digno a todas y a todos los trabajadores del campo con una pensión de 5,000 pesos mensuales, si este Gobierno Federal tuviera un verdadero compromiso con el campo y con los pobres de México, se estaría atendiendo esta solicitud, la iniciativa a la que hoy nos referimos se presentó en octubre del 2021 por las y los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, para crear así el Fondo de Pensión Rural Digna, que buscaría garantizar que las personas trabajadoras del sector tengan acceso a un retiro con dignidad.

Por ello, aquí en San Luis mi compañera la diputada Emma Saldaña y un servidor presentamos este punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones Unidas de Seguridad Social y Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, a dictaminar en sentido positivo la iniciativa que adiciona los artículos 239 a la Ley del Seguro Social, y 154 a la Ley del Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Pensión Rural Universal, presentada por las y los diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; sin embargo, lamento informarles a ustedes que el día de ayer en la Cámara de Diputados esta iniciativa fue rechazada por los legisladores de la cuarta transformación, por lo que respetuosamente retiramos aquí este proyecto de punto de acuerdo al no tener ya el objeto mencionado, desde hace 5 años el Movimiento Ciudadano impulsamos la iniciativa de Pensión Rural Digna, y en la bancada naranja la defenderemos, no podemos hablar de justicia social cuando millones de personas trabajadoras del campo, llegan a la vejez sin un sustento que les permita vivir dignamente, Dante Delgado, muchas gracias, es cuanto Presidenta.

Presidenta: se obsequia petición por quedar sin materia.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Interviene el legislador Amilcar Loyde Villalobos, para presentar el segundo Punto de Acuerdo.

PUNTO DE ACUERDO DOS

DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE S

El que suscribe, **Amilcar Loyde Villalobos** diputado, integrante del grupo parlamentario MORENA de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos, 132 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 72, 73 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, ambos, de San Luis Potosí, presento a esta Soberanía **PUNTO DE ACUERDO** a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

En cualquier proceso educativo intervienen diferentes actores, el niño desde antes de su nacimiento, aún con su sistema nervioso en formación, inicia su aprendizaje del entorno que le rodea. Cuando nace, los encargados de la crianza, padres o tutores tienen la importante labor de formarlos, sin restarle importancia a todos aquellos que conviven con él.

Unos años después, inicia la educación sistematizada, escolar, donde el maestro es uno de los principales protagonistas en la facilitación del aprendizaje de los educandos a través de diversas estrategias pedagógicas y de darse a sí mismo en un aula de clases. Ese darse implica que él, con todo lo que representa y con sus rasgos de personalidad realiza su quehacer impactando de diversas maneras la formación y modelamiento de la percepción de aquellos que están bajo su responsabilidad y participan también, en la formación de la personalidad del educando.

El maestro es pieza clave del desarrollo individual y social, es un agente transformador y socializador cuya importancia radica en su papel constructor y representa un pilar del aprendizaje, desarrollo humano, social, económico y cultural de la sociedad.

En su función de *influencer*, motivador, constructor, transmisor de saberes, de valores, creencias y formas de percibir, es el maestro el facilitador del aprendizaje a través de las vivencias, interacciones



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

y formas de comunicación en el proceso educativo, y es esa relación bilateral en donde los procesos dinámicos de enseñanza-aprendizaje se desarrollan.

De esta manera, el maestro cumple con diferentes roles que suman un todo a la hora de educar, instruir las diferentes materias, formando al educando desde diferentes vertientes.

Sin embargo, no se puede contar, de forma incondicional con su presencia ante un grupo de niños o adolescentes, pues tienen una vida propia que también les exige atención.

Existen diferentes circunstancias válidas que los alejan de las aulas de clase: jubilación, cambios de adscripción, incapacidad, promoción, entre otras. Otra situación generadora de la falta de maestros es cuando hay un aumento en la matrícula o simplemente porque las ausencias por diversas razones no son sustituidas por otros maestros.

Antes y después de la pandemia, según los medios de comunicación, padres de familia de comunidades de diferentes estados como Tlaxcala, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Coahuila y otros han salido a las calles a manifestar su descontento por la escasez de maestros de Telesecundaria, pues saben de sobra que los principales perjudicados son sus hijos.

Todos los maestros son regulados y protegidos por la Constitución. Específicamente, los derechos y obligaciones de los trabajadores de la educación se encuentran plasmados en la Ley general de educación.

Con el fin de reconocer su mérito y vocación, mejorar sus condiciones económicas, profesionales y sociales y ofrecer diferentes incentivos, sobre todo a aquellos que trabajan en zonas de pobreza y marginación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros describen los beneficios a que tienen derecho los trabajadores de la educación a través de la promoción horizontal y vertical.

Esta Ley ya citada en su artículo 33 describe como promoción vertical aquella que da acceso a la función directiva o de supervisión, representando un ascenso a un cargo de mayor responsabilidad, con otro nivel de ingresos y otras funciones. Por otra parte, el mismo artículo describe la promoción horizontal como aquella que da acceso a un nivel de incentivo sin implicar cambios en las funciones. Estos incentivos varían de acuerdo al nivel en el que se sitúen, pudiéndose escalar 8 niveles, con una duración máxima de 4 años en cada nivel.

JUSTIFICACIÓN

La pandemia por Covid-19 trajo consigo consecuencias negativas para todos los niveles de educación en todo el mundo. Durante 14 meses, la educación de 25.4 millones de estudiantes de educación básica y 5.2 millones de educación media superior se vio suspendida de manera presencial en nuestro país.

En este sentido, la literatura sustenta que existen factores determinantes para el aprovechamiento escolar, además de los implicados directamente con los alumnos en relación a su entorno socioeconómico y cultural, se encuentran los escolares relacionados a la infraestructura y asiduidad del docente, en este último rublo destaca su ausentismo y movilidad.

Cuando se restringen las clases presenciales, por el motivo que sea, se limita el desarrollo escolar y socioemocional del educando. El aprendizaje de los contenidos se ve afectado seriamente por el ausentismo de los profesores y la falta de material adecuado. Trabajar a través de un dispositivo y a la distancia al menos rescata el aprendizaje aunque sea en mínimas proporciones, cuando el maestro no está frente a grupo simplemente no existe la facilitación del aprendizaje, no hay condiciones para la construcción del conocimiento ni para la ampliación de la cosmovisión de los educandos, que no solo se detienen sino que tiende a retroceder.

En este sentido, y refiriéndonos al desarrollo socioemocional como parte integral del aprendizaje, es en el marco de la convivencia y las interacciones sociales con iguales y profesores donde se lleva a cabo un aprendizaje integral, facilitando la socialización y la afirmación de la identidad y el desarrollo de habilidades de negociación, colaboración, adaptabilidad, iniciativa, pensamiento crítico, respeto por las reglas y normas de convivencia, etc.

Estas carencias alejan del fin de la educación a la población más necesitada, privando a los menores de la oportunidad de adquirir saberes, destrezas, habilidades y valores a los que tienen derecho para poder ejercer como ciudadanos de una sociedad.

La educación es un derecho humano, derecho que debe ser garantizado por el Estado. Cada niño, adolescente o joven debe recibir educación de manera eficiente y adecuada. Las condiciones para ejercer este derecho deben ser otorgadas y vigiladas por las autoridades competentes, pues cuando no existe el líder, el maestro, el facilitador, el que guía el aprendizaje, de deja de alfabetizar, de aprender contenidos escolares, es dejar de ir oportunidades, es dejar de relacionarse. Ante esto, la infancia y la juventud se vuelven aún más vulnerables, pues la escuela representa para muchos la

única alternativa de desarrollo. Ante la carencia de condiciones para educar, aumenta el riesgo de deserción y la falta de interés, crece la brecha en la adquisición de conocimientos y habilidades y aparece un deterioro ante un sistema nervioso carente de estímulos adecuados.

CONCLUSIÓN

La educación debe ser una prioridad de todos, especialmente de quienes depende ofrecer las condiciones adecuadas para que ésta se lleve a cabo. Está demostrado que un aprendizaje integral es aquel que toma en cuenta todas las dimensiones de los educandos: social, emocional, físico y mental y en esta dinámica los actores principales son el alumno, el maestro y el conocimiento, además de la relación multidireccional entre todos estos elementos.

La precariedad del aprendizaje y del desarrollo impacta negativamente el desarrollo de cualquier sociedad y a nivel individual las consecuencias son el origen de muchas problemáticas sociales y económicas.

Por esta razón es indispensable dar una mirada y revisión a la educación telesecundaria, especialmente al agente transformador que representa el maestro a los actores principales que son los alumnos, es visible la urgencia con la que los estudiantes necesitan educación de calidad en la medida en que las condiciones y políticas públicas lo permitan. Eso que se puede hacer es necesario mejorarlo, alentarlos y cuidarlos para sembrar las semillas del progreso en los niños y adolescentes que serán los adultos del mañana.

Los maestros no deben faltar en un aula de clases, su presencia es indispensable, más en esos lugares en que la única alternativa de educación es la Telesecundaria. Parte de nuestro quehacer como legisladores es mostrar a las autoridades competentes las problemáticas que deben ser atendidas y solicitar su solución inmediata, pues somos la voz de aquellos que no pueden estar aquí para ser escuchados.

Por las razones anteriormente expuestas, este punto de acuerdo pretende exhortar a las autoridades en materia de educación a poner énfasis en el análisis, diagnóstico y atención a las problemáticas vinculadas con la falta de docentes frente a grupo, personal administrativo y de apoyo en las escuelas en nuestra entidad.

PUNTO DE ACUERDO

Exhortamos al Titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí Lic. Juan Carlos Torres Cedillo a que:

1. Diagnostique de forma puntual las condiciones en las que se encuentran las escuelas del Estado en relación con la falta de docentes frente a grupo, personal administrativo y de apoyo.
2. Solucione los problemas encontrados en estas escuelas del Estado con respecto a la falta de docentes frente a grupo, personal administrativo y de apoyo.
3. Informe a esta Soberanía los resultados del diagnóstico y las acciones que se emprenderán para solucionar los problemas encontrados con respecto a esta problemática.

Amilcar Loyde Villalobos: con su venia Presidenta, la educación es para muchos niños, niñas y jóvenes, la única palanca para mejorar su nivel de vida, no sólo puede mejorar las condiciones materiales, sino también culturales y de valores para una mejora convivencia social, la reconstrucción del tejido social, tan dañado en nuestro estado, puede y debe fortalecerse a partir de nuestro sistema educativo, mismo que tiene como pilar fundamental al docente frente al grupo, son los maestros, quienes día con día luchan contracorriente ante los problemas de nuestras de nuestra sociedad, la violencia, desintegración familiar, pobreza, necesitamos de los maestros, que se les dignifique y fortalezca su papel, y es en este proceso fundamental, cuidar su papel frente al grupo, su correcto desarrollo de funciones, el sistema educativo a lo largo de muchos años ha sido víctima de jaloneos políticos, usado como moneda de cambio para particularidades, al tener como punto clave y de crisis plazas docentes que no son usadas donde les corresponde, el problema es amplio y complejo.

Porque hay plazas docentes de directivos, supervisores u otras funciones que no cumplen ese papel, que quizá tienen funciones administrativas, el tema no es de hoy, ni es nuevo, es un vicio viejo y de antaño, pero en tiempos de cambio como los que hoy vivimos esto no puede permanecer, para iniciar este cambio lo primero es tener un diagnóstico claro del problema, porque reiteró, el problema no es sencillo, no es posible que tengamos maestros cumpliendo funciones con pagos pendientes por razones administrativas, mientras otros realizan funciones administrativas y descuidan el aula; por ello, este punto de acuerdo pretende iniciar este proceso diagnóstico, con el cual exhortamos el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a qué; uno, diagnostique de forma puntual las condiciones en que se encuentran las escuelas del estado, en relación con la



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

falta de docentes frente a grupo, personal administrativo y de apoyo, solución de los problemas encontrados en estas escuelas del estado con respecto a la falta de docentes frente a grupo, personal administrativo y de apoyo; tres, informe a esta Soberanía los resultados del diagnóstico y las acciones que se emprenderán para solucionar los problemas encontrados con respecto a esta problemática, es cuanto Presidenta.

Presidenta: se turna a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Pasamos a Asuntos Generales, les informó que la Junta de Coordinación Política, entregó a la Presidencia de la Directiva hace unos momentos, acuerdo que propone reestructurar la segunda vocalía y agregar la sexta vocalía de la Comisión Especial para la Reforma Político Electoral del Estado de San Luis Potosí; por lo cual, no se notificó en la Gaceta Parlamentaria; no obstante, por ser asunto que debe resolverse con urgencia, se procesará en este momento; Primera Secretaria, por favor dar lectura al acuerdo.

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

QUE PROPONE REESTRUCTURAR LA SEGUNDA VOCALÍA Y AGREGAR LA SEXTA VOCALÍA DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA POLÍTICO ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

...tri+tecia masj



Recibido 31/03/2022
[Handwritten signature]

Oficio número: JUCOPO LXIII-I/0105/2022.
San Luis Potosí, S.L.P. a 28 de marzo de 2022.

DIPUTADA YOLANDA JOSEFINA CEPEDA ECHAVARRÍA.
PRESIDENTA DE LA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

PRESENTE:

Le notificamos que en Reunión con carácter de ordinaria de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, celebrada el 28 de marzo del año en curso, se tomó el siguiente:

ACUERDO JCP/LXIII-I/105/2022

- I. Con fundamento de lo dispuesto por los ordinales: 82 fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 121 fracción VIII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, esta Junta de Coordinación Política, en ejercicio de sus atribuciones, propone al Pleno de esta soberanía, la siguiente sustitución de la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral:

Sale

Cargo	Genero	Nombre
Vocal 2	H	Dip. Cuauhtli Fernando Badillo Moreno

Entra

Cargo	Genero	Nombre
Vocal 2	H	Dip. José Antonio Lorca Valle

- II. Con fundamento en los artículos 84 fracción IV, 87 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; y 145 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, en ejercicio de sus atribuciones, la Junta de Coordinación Política, propone al Pleno de esta Soberanía, se designe a la Dip Gabriela Martínez Lárraga como vocal 6, de la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Se formaliza el presente acuerdo, en observancia de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, bajo el registro que ha quedado establecido, con el propósito de que se designen por la Junta de Coordinación Política, para los efectos conducentes a que haya lugar.
Sin otro particular, reiteramos la seguridad de nuestra consideración.

ATENTAMENTE:

DIPUTADO JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
PRESIDENTE.

DIPUTADO RUBÉN GUAJARDO BARRERA.
SECRETARIO.

LXIII



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Secretaria: oficio JUCOPO LXIII-I/105/2022

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 28 de marzo 2022

Diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

Presidenta de la Directiva del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Presente.

Le notificamos que en reunión con carácter de ordinaria de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, celebrada el 28 de marzo del año en curso, se tomó el siguiente acuerdo.

Acuerdo JCP/LXIII-I/105/2022

Con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 82 fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 121 fracción VIII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, esta Junta de Coordinación Política, en ejercicio de sus atribuciones, propone al Pleno de esta Soberanía, la siguiente sustitución de la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral.

Sale:

Cargo, género y nombre.

Vocal 2, género hombre, diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno

Entra:

Cargo vocal 2, género hombre, diputado José Antonio Lorca Valle.

Con fundamento en los artículos 84, fracción IV, 87 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, y 145 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, en ejercicio de sus atribuciones, la Junta de Coordinación Política, propone al Pleno de esta Soberanía, se designa a la diputada Gabriela Martínez Lárraga, como vocal 6, de la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Se formaliza el presente acuerdo, en observancia de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, bajo el registro que ha quedado



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

establecido, con el propósito de que se designen por la Junta de Coordinación Política, para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin otro particular, reiteramos la seguridad de nuestra consideración.

Atentamente, diputado José Luis Fernández Martínez, Presidente, rúbrica; diputado Rubén Guajardo Barrera, Secretario, rúbrica.

Presidenta: está a discusión el acuerdo; Primera Secretaria haga el favor de inscribir a quienes vayan a intervenir.

Secretaria: ¿alguien intervendrá?; no hay participaciones Presidenta.

Presidenta: sin discusión, pido al personal de apoyo distribuir las cédulas a los legisladores.

Distribución de las cédulas.

Presidenta: Segunda Secretaria llame a los legisladores a depositar su cédula, por favor.

Secretaria: diputado Juan Francisco Aguilar Hernández; Edgar Alejandro Anaya Escobedo; Martha Patricia Aradillas Aradillas; José Luis Fernández Martínez; Liliana Guadalupe Flores Almazán;...;
(continúa la lista)

Presidenta: realizar la confronta y el escrutinio de las cédulas, e informarme los resultados, por favor.

Secretaria: a favor, a favor, a favor, a favor, a favor; a favor;...;(continúa el escrutinio)

Secretaria: 27 votos a favor.

Presidenta: contabilizados 27 votos a favor; por tanto, por UNANIMIDAD se aprueba reestructurar la segunda vocalía; y agregar sexta vocalía, de la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Estado de San Luis Potosí; hágase la anotación en el registro correspondiente.

Derivado de lo anterior, pido respetuosamente a todos ponerse de pie; y a los legisladores: Gabriela Martínez Lárraga; y José Antonio Lorca Valle, ubicarse frente a la tribuna.

Legislador José Antonio Lorca Valle; y legisladora Gabriela Martínez Lárraga, les pregunto:



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

¿Protestan sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ambas emanen, y desempeñar fielmente los cargos de: segundo; y sexta, vocales, en la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Estado de San Luis Potosí, para el que han sido electos?

Los interpellados: sí, protesto.

Presidenta: si así no lo hacen, que el pueblo de San Luis Potosí se los demande

Pido a los legisladores: Gabriela Martínez Lárraga; y José Antonio Lorca Valle ocupar sus curules, y a todos favor de tomar asiento.

Toca el turno en Asuntos Generales al legislador Juan Francisco Aguilar Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Juan Francisco Aguilar Hernández: muy buenas tardes, con el permiso de la Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, público que hoy nos acompaña y que nos siguen a través de las redes sociales de la plataforma digital, “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”, a partir del derecho romano es que se estableció un principio básico de legalidad, no hay delito, ni hay pena sin ley, y que en tiempos modernos se traduce en la máxima que reza, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o infracción administrativa de acuerdo con la legislación vigente en aquel momento.

Asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948, se estableció que, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional, el 28 de marzo, hace apenas 3 días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al llevar a cabo el análisis en el fondo de 2 causas penales, determinó que la orden de aprehensión y el auto de formal prisión en contra de Laura Morán y Alejandra Cuevas, resultaban estas inconstitucionales, en el caso de la segunda de la formal prisión, el máximo Tribunal de Justicia del país llegó a la conclusión de que pretender acreditar el tipo penal de homicidio por comisión, por omisión accesoria, era una figura inexistente en el derecho positivo mexicano, lo que en medios de comunicación se ha manifestado como la invención de un delito, una de las consecuencias directas e irreparables de la indebida acción penal, represento para Alejandra la privación de su libertad por más de 500 días, es de todos nosotros conocido, que en México la impunidad ronda el 95% de acuerdo con las investigaciones serias.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Es decir, que 5 de cada 100 delitos denunciados en nuestro país, quedan sin ser sancionados o castigados, en promedio existen en México 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías de investigación por cada 100,000 habitantes, estos datos de finales de año pasado revelan que la prisión preventiva oficiosa se incrementó en un 21%, de uno de cada cuatro detenciones resultan calificadas como ilegales, lo que ha tenido como consecuencia un decremento en la reparación del daño, llegando a tan solo .30% las víctimas que reciben el resarcimiento a lo afectado, desde esta tribuna hago un llamado respetuoso al señor gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras y a la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Olga Regina García López, a fin de que a partir de la experiencia vivida en la Suprema Corte esta semana, de manera decidida y conjunta lleven a cabo un análisis del estado que guardan la procuración de Justicia en San Luis Potosí, pero sobre todo de la capacitación que el elemento humano debe tener para hacer posible que los índices de impunidad disminuyan en comparación con la media nacional, logrando así el tan anhelado anhelo de paz que todas y todos los potosinos queremos, hay un apoyo a la estrategia que propuso el señor gobernador y que fue avalada por este Congreso del Estado para conformar la Guardia Civil, es cuanto Presidenta.

Presidenta: solicita participar en Asuntos Generales la legisladora Gabriela Martínez Lárraga, por la representación parlamentaria del Partido Redes Sociales Progresistas.

Gabriela Martínez Lárraga: gracias Presidenta, demoler la historia de los vallenses escudándose en la modernidad, no es válido, los vallenses se han pronunciado en contra de la demolición del Arco de las Tres Culturas, que representa las tres lenguas y la cultura de la huasteca, de los Tének, los Náhuatl y los Xi ói, desde esta tribuna me uno a todas esas voces de los vallenses y los huastecos, que exigen se detenga su demolición, porque para ellos no sólo es un arco, es un elemento emblemático que representa la entrada a nuestra huasteca potosina, una vez más le preguntó al Ejecutivo, construir un arco monumental con un costo de 25 millones de pesos es una prioridad para un municipio que carece de lo más básico, como son hospitales, calles pavimentadas, camiones de basura, agua, alumbrado público, salud, vivienda escuelas dignas, 25 millones en pavimentación, en salud, en todos estos rubros, para una ciudad como Ciudad Valles marcaría la diferencia para todos los vallenses; por eso, desde esta tribuna les digo, no a obras decorativas, sí a la salud, a infraestructura y a desarrollo para todos los vallenses, es cuanto Presidenta.

Presidenta: para su segunda intervención en Asuntos Generales, el legislador Juan Francisco Aguilar Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

Juan Francisco Aguilar Hernández: gracias Presidenta, nuevamente buenas tardes, el día 2 de abril de cada año se encuentra instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, cuyo fin es dar relevancia a la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas con el trastorno de espectro autista o TEA, en San Luis Potosí se encuentra en operación el Centro de Autismo dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CREE, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí, en razón de la pandemia provocada por el virus Covid-19, este centro dejó de operar y la atención se derivó por el gobierno anterior al Instituto Temazcalli, institución que tiene bajo su responsabilidad la atención de personas con problemas de adicción, labor que realizan de manera eficiente.

Sin embargo, es de todo injustificable que se pretenda en ese centro dar atención a personas con TEA, es también necesario reconocer la labor que por parte de la restitución del Centro de Autismo ha llevado a cabo la presidenta actual del DIF del Estado, la señora Ruth González, así como la rehabilitación de las instalaciones del CREE, y por supuesto en consecuencia las del Centro de Autismo; sin embargo y ante el acercamiento que hacen integrantes de la Asociación Gilberto Rincón Gallardo, quienes me han manifestado la necesidad de que revise el alcance en la atención que se brinda a las personas con TEA por parte del centro de autismo a cargo, como ya lo he dicho, del DIF Estatal, es que a nombre de ellos hago uso de esta Tribuna, para solicitar de la manera más atenta y respetuosa a la presidenta del DIF Estatal, seguro del interés que ella misma ha mostrado hacia los problemas de las y los potosinos, tenga a bien ordenar se lleve a cabo un diagnóstico de la atención y en su caso simplemente en las medidas que hagan posible una mejor atención hacia las y los potosinos con este síndrome, es cuanto Presidenta.

Presidenta: también en asuntos generales la voz al legislador Amilcar Loyde Villalobos, del grupo parlamentario del Partido MORENA.

Amilcar Loyde Villalobos: con su venia Presidenta, el Sistema de Telesecundarias se fundó con la finalidad de atender a las zonas más lejanas y con menos posibilidades económicas, donde la población estudiantil al ser pequeña en número no justificaba técnicamente el gasto de un plantel docente completo, fue un modelo innovador, que recurrió a un avance tecnológico de su tiempo, la señal satelital, de la mano de la figura siempre insustituible del docente; sin embargo, hoy por hoy ese sistema en San Luis Potosí se encuentra en crisis, por malos manejos y corruptos manejos de gobiernos pasados y liderazgos sindicales, que prefirieron anteponer intereses personales a los de la



Diario de los Debates

Sesión Ordinaria No. 24

marzo 31, 2022

comunidad educativa, la expresión más grave de lo mencionado anteriormente, es la fractura del Fondo de Pensiones de Telesecundaria, donde el desvío de recursos, fallidas e ilegales inversiones de los fondos y una constante omisión para atender una problemática, que desde hace varios años es visible y conocida por todas las partes involucradas, nos ha llevado a un punto crítico.

La torre se agrietó y los responsables no hicieron nada, la torre se fue carcomiendo, y aunque los trabajadores lo señalaron, los responsables hicieron poco, y ahora que la torre está por derrumbarse, sólo el trabajo conjunto y el involucramiento amplio y sincero de todas las partes podrán dar una solución a este problema; hoy se habla de la inminente federalización de los profesores de telesecundaria, misma que podría ayudar al fondo de pensiones, pues el gasto de maestros activos podría cubrir parte del pago de los jubilados; sin embargo, este proceso ha despertado legítimas preocupaciones de los docentes, respecto a los cambios que tendrán con el nuevo estatus, antigüedad, bonos, jubilaciones, etcétera; los docentes no se niegan tajantemente a los cambios para rescatar su sistema, como lo expresaron en el pasado foro educativo del 22 de marzo, realizado en el auditorio Gómez Morín del Congreso del Estado; por el contrario, quieren ser parte de la solución, pero necesitan ser informados, escuchados e involucrados en este proceso, la salida a este dilema no puede ser solamente un acuerdo de cúpulas, sino un proceso amplio y horizontal, donde todas las voces tengan cabida, diálogo, ese debe ser el camino.

Por todo lo anterior, hago un exhorto a todas las autoridades involucradas, Gobierno del Estado, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, Secretaría de Educación Pública, SEP, y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, para que generen los espacios donde se involucren a las bases trabajadoras en la búsqueda de soluciones, donde se les informe y escuche de manera directa a las y los maestros, para que no se les manipule por el interés de unos cuantos, todos tendremos que contribuir para lograr una solución viable, y esto sólo se logrará con un diálogo abierto y sincero de todas las partes, pero reitero, comunicación directa con los maestros de base, es cuanto señora Presidenta.

Presidenta: ¿alguna otra legisladora o legislador desea intervenir en Asuntos Generales?;

Hemos ya concluido el Orden del Día; cito a Sesión Ordinaria el próximo jueves 7 de abril a las 10:00 horas, presencial, en este salón “Ponciano Arriaga Leija”

Se levanta la sesión.

Concluye: 12:30 horas.